



Herausgeber/Editor:

Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V.
Asociación Hispano-Alemana de Juristas

www.dsjv-ahaj.com

Editorial	50
Johannes Pitsch La constitución de una filial en Alemania desde la perspectiva española	52
Lucas de León - Sotelo Fuentes Promulgación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025: Reforma del régimen de costas de los procedimientos civiles	57
Lucas de León - Sotelo Fuentes Erlass und Inkrafttreten des Organgesetzes 1/2025: Reform der Kostenregelung in Zivilverfahren in Spanien	59
Frank Müller Steuerrecht 2025 (Teil 2)	61
Alejandro del Campo Zafra, Alejandro del Campo Jiménez Las novedades y los últimos pronunciamientos sobre la residencia fiscal en España	72
Aleix Valls Inteligencia Artificial sin mitos: lo que los abogados deben saber (y hacer)	76
Laura Salamanca, Carla Sans, Julius Letzel, Lucia Caamaño, Greta Torka, Itamar Restrepo XXXIX Congreso de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas en Segovia, del 19 al 21 de junio de 2025	77
Julian W. Maurer Rezesion Sarah Rachut: Grundrechtsverwirklichung in digitalen Kontexten	82
Alejandra Riera Humanes Reseña Francisco Antonio Vaquer Ferrer: La fiscalidad de los no residentes por la titularidad de participaciones en entidades con sustrato inmobiliario a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio	84
Notizen aus der Vereinigung / Noticias de la Asociación	87
Veranstaltungen / Eventos	88
Mercado de trabajo / Praktikantenstellen	91
Willkommen / Bienvenidos	96
Impressum / Pie de imprenta	97

INFORMACIONES

Zeitschrift für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr
Revista jurídica hispano-alemana

Schriftleitung/ Redacción:

Dr. Markus Artz LL.M.
Koblenzer Str. 80, 56073 Koblenz
T +49 2619 423173
artz@artzlopez.com
m.artz@dsjv-ahaj.org

Editorial	50
Johannes Pitsch La constitución de una filial en Alemania desde la perspectiva española	52
Lucas de León - Sotelo Fuentes Promulgación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025: Reforma del régimen de costas de los procedimientos civiles	57
Lucas de León - Sotelo Fuentes Erlass und Inkrafttreten des Organgesetzes 1/2025: Reform der Kostenregelung in Zivilverfahren in Spanien	59
Frank Müller Steuerrecht 2025 (Teil 2)	61
Alejandro del Campo Zafra, Alejandro del Campo Jiménez Las novedades y los últimos pronunciamientos sobre la residencia fiscal en España	72
Aleix Valls Inteligencia Artificial sin mitos: lo que los abogados deben saber (y hacer)	76
Laura Salamanca, Carla Sans, Julius Letzel, Lucia Caamaño, Greta Torka, Itamar Restrepo XXXIX Congreso de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas en Segovia, del 19 al 21 de junio de 2025	77
Julian W. Maurer Rezesion Sarah Rachut: Grundrechtsverwirklichung in digitalen Kontexten	82
Alejandra Riera Humanes Recensión Francisco Antonio Vaquer Ferrer: La fiscalidad de los no residentes por la titularidad de participaciones en entidades con sustrato inmobiliario a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio	84
Notizen aus der Vereinigung / Noticias de la Asociación	87
Veranstaltungen / Eventos	88
Mercado de trabajo / Praktikantenstellen	91
Willkommen / Bienvenidos	96
Impressum / Pie de imprenta	97

Editorial

Liebe Mitglieder und Freunde,

zu dieser «Sommerausgabe» der INF begrüße ich Euch erneut ganz herzlich und wünsche eine spannende Lektüre.

Nach dem soeben stattgefundenen Jahreskongress in Segovia und den dort gewonnenen Eindrücken und Erlebnisse kann ich mich nur nochmals bei allen Akteuren und ganz besonders bei Euch, liebe Mitglieder, bedanken. Die letzten Jahreskongresse waren, vor allem bezogen auf die Teilnehmerzahlen, ein riesiger Erfolg.

Hervorheben möchte ich die Unterstützung durch die Deutsche Botschaft und der Botschafterin Frau Maria Margarete Gosse. Die Eröffnung in der Sala Capitular des Konvents Santa Cruz la Real beeindruckt mich noch heute. Für die Unterstützung durch das Instituto de Empresa und Frau Soledad Atienza Becerril möchte ich mich ebenfalls ausdrücklich bedanken.

Mit der Wahl Córdoba als nächsten Jahreskongressort in Spanien und dem in 2026 stattfindenden Kongress in Karlsruhe haben wir zwei spannenden Jahre vor uns, bevor die Wahlperiode dieses Vorstandes endet und wir einen neuen Vorstand wählen. Bis dahin werden wir wie gewohnt die Ärmel hoch krämpeln und hoffentlich zwei hervorragende Kongresse organisieren.

Jetzt erstmal wünsche ich Euch allen eine erholsame Sommerpause und freue mich auf ein Wiedersehen zur Herbsttagung am 15. November in Köln.

Euer Präsident

Lutz Carlos Moratinos Meissner, LL.M.

Estimados miembros y amigos,

Me complace daros la más cordial bienvenida a la edición de verano de INF y de desearos una lectura provechosa y amena.

Tras la reciente celebración del congreso anual en Segovia y las valiosas impresiones y experiencias vividas allí, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a todos los participantes y, en especial, a vosotros, apreciados socios. Los últimos congresos anuales se caracterizaron por un gran éxito, sobre todo en lo que respecta a la cantidad de asistentes.

Quisiera destacar el apoyo de la Embajada de Alemania y de la embajadora, la Sra. Maria Margarete Gosse. La inauguración solemne del congreso en la Sala Capitular del Convento de Santa Cruz la Real sigue causándome una profunda impresión hasta el día de hoy. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Instituto de Empresa y a la Sra. Soledad Atienza Becerril por su apoyo.

Con la elección de Córdoba como sede del siguiente congreso anual en España y el congreso que se celebrará en 2026 en Karlsruhe, nos esperan dos años llenos de eventos interesantes. En dos años finalizará el mandato de la actual Junta Directiva y se llevará a cabo la elección de una nueva. De aquí a entonces, nos pondremos manos a la obra como siempre, con el objetivo de organizar dos congresos excelentes.

Por el momento, os deseo a todos unas felices vacaciones de verano y espero volver a veros en la jornada de otoño el 15 de noviembre en Colonia.

Vuestro Presidente

Lutz Carlos Moratinos Meissner, LL.M.



Lutz Carlos Moratinos Meissner LL.M.

Präsident DSJV – Presidente AHAI
Rechtsanwalt & Abogado
Simon&Partner, Hamburg
l.moratinos@simon-law.de

Editorial

Liebe Mitglieder, Leserinnen und Leser,

gerne begrüße ich Sie zur neuesten Ausgabe unserer Zeitschrift. Die zweite Ausgabe 2025 enthält wieder zahlreiche Beiträge unserer Mitglieder:

Ein Erfolg unser Jubiläums-Kongress in Segovia: Wer ihn noch einmal Revue passieren lassen möchte, dem sei die Lektüre des Kongressberichtes empfohlen.

Ein besonderer Dank gilt unseren Autorinnen und Autoren, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise maßgeblich zum Erfolg dieser Zeitschrift beitragen. Ihre Beiträge spiegeln nicht nur das hohe fachliche Niveau wider, sondern auch die Leidenschaft und das Engagement für die Förderung des deutsch-spanischen Rechtsdialogs. Darüber hinaus ist unsere Zusammenarbeit auch im Bereich des europäischen Rechts wesentlich. Sowohl Deutschland als auch Spanien sind Mitglieder der Europäischen Union, wodurch viele gesetzliche Regelungen auf europäischer Ebene harmonisiert sind. Der regelmäßige juristische Austausch fördert eine einheitliche Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften und trägt somit zur Rechtssicherheit im europäischen Binnenmarkt bei.

Wir laden Sie wieder ein, aktiv an diesem Dialog teilzunehmen. Ihre Meinungen, Anregungen und Diskussionsbeiträge sind uns sehr willkommen. Lassen Sie uns gemeinsam die Chancen und Herausforderungen, die die rechtlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Spanien bieten, erörtern und gestalten.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich auf Ihre Rückmeldungen.

Ihr
Dr. Markus Artz, LL.M.
Schriftleiter

Estimados miembros y lectores:

Es un placer darles la bienvenida al último número de nuestra revista. El segundo número 2025 contiene sobre todo las contribuciones de nuestros socios.

Nuestro en Segovia también fue un éxito: si desea volver la vista atrás, le recomendamos que lea el resumen del congreso.

Nuestro especial agradecimiento a nuestros autores, cuyo compromiso y experiencia contribuyen de manera significativa al éxito de esta revista. Sus contribuciones no sólo reflejan el alto nivel de conocimientos especializados, sino también su pasión y compromiso con la promoción del diálogo jurídico hispano-alemán. Además, la cooperación en el ámbito del derecho europeo es fundamental. Tanto Alemania como España son miembros de la Unión Europea, por lo que muchas normativas están armonizadas a nivel comunitario. El intercambio jurídico regular favorece una interpretación y aplicación uniforme de estas normas y, en consecuencia, contribuye a la seguridad jurídica en el mercado interior europeo.

Les invitamos de nuevo a participar activamente en este diálogo. Sus opiniones, sugerencias y aportaciones al debate son muy bienvenidas. Discutamos y demos forma juntos a las oportunidades y retos que ofrecen las relaciones jurídicas entre Alemania y España.

Les deseo una lectura provechosa y espero sus comentarios.

Reciban un cordial saludo
Dr. Markus Artz, LL.M.
Editor



Dr. Markus Artz, LL.M.

Vizepräsident DSJV - Vicepresidente AHAI
Rechtsanwalt & Abogado
Fachanwalt für Familien- und Erbrecht
Dr. Artz López & Col. Rechtsanwälte Abogados Fachanwälte, Koblenz
artz@artzlopez.com

Johannes Pitsch

La constitución de una filial en Alemania desde la perspectiva española*

A la luz de la creciente actividad de empresas españolas en Alemania, este artículo ofrece una guía práctica para constituir una GmbH desde la perspectiva española. El autor explica los aspectos cruciales que deben tenerse en cuenta para asegurar una inscripción eficaz y diligente de la filial en el Registro Mercantil alemán.

A. Introducción

Desde hace varias décadas, las economías españolas y alemanas están profundamente interconectadas¹. A raíz de la adhesión de España a la Unión Europea en 1986, las empresas alemanas han incrementado notablemente sus inversiones en el país, especialmente en los sectores de la industria química, farmacéutica y de la automoción. A lo largo de las últimas décadas, el flujo de capital empresarial ha sido más elevado de Alemania hacia España que en sentido inverso. Últimamente, el panorama se presenta de forma más equilibrada ya que las empresas españolas han reforzado su presencia en Alemania, impulsadas, entre otros factores, por un crecimiento económico nacional más favorable. Al mismo tiempo, los costes laborales en España siguen siendo considerablemente inferiores a los de Alemania, lo que supone una ventaja al desplazar trabajadores, especialmente en el marco de proyectos puntuales. Destacan varios sectores tales como las telecomunicaciones, la ingeniería y la energía. Precisamente en estos sectores se observa la presencia de importantes empresas españolas involucradas en proyectos de gran alcance en Alemania. Por ello, la constitución de una filial para cada uno de estos proyectos constituye un instrumento eficaz para limitar los riesgos al ámbito específico de cada iniciativa. Asimismo, en varios sectores se observa el aumento de adquisiciones de empresas alemanas por parte de compradores españoles. En este contexto, también conviene considerar recurrir a una filial en Alemania, por ejemplo, como parte de una estructura holding, tanto por razones organizativas como fiscales.

Al establecer una presencia operativa y permanente en Alemania, la forma societaria más utilizada es la *Gesellschaft mit beschränkter Haftung*² (en adelante: “GmbH”). La GmbH es el equivalente funcional a la SL española, si bien existen algunas diferencias entre ambas.

Una alternativa a la constitución de una filial es la adquisición de una sociedad ya existente³. Existe un número considerable de empresas especializadas en la venta de sociedades que aún no han iniciado sus operaciones mercantiles (“*shelf companies*”). Los costes de la adquisición de una *shelf company* resultan en muchos casos

1 En este contexto, un análisis interesante por Walther von Plettenberg se encuentra disponible en: <https://www.ahk.es/es/news-media/ahk-news/2025/2025-02/espana-y-alemania-socios-privilegiados-en-un-momento-clave-para-europa> (Página consultada el 3 de mayo de 2025).

2 La traducción de *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* es “Sociedad con responsabilidad limitada”.

3 Después de adquirir la sociedad, los compradores nombran a administradores nuevos y realizan las modificaciones estatutarias que consideren oportunas. Los nuevos administradores, además, habrán de comunicar al RM el hecho de que se trata de una constitución a nivel económico (“*wirtschaftliche Neugründung*”). En más detalle: Pitsch, Sociedades limitadas a inmediata disposición – un aspecto importante en la práctica de fusiones y adquisiciones en Alemania, en: *Informaciones* 2005, p. 47.

superiores a los derivados de la constitución de una nueva sociedad. No obstante, en situaciones que requieren actuación inmediata, la adquisición de una *shelf company* puede ser una decisión idónea.

Este artículo ofrece una visión general de los pasos principales para constituir una GmbH, sin ánimo de exhaustividad.

B. Requisitos formales antes de constituir una sociedad en Alemania

A continuación, expondremos tres requisitos formales que deben cumplirse al inicio del proceso de constituir una sociedad en Alemania. La experiencia demuestra que son precisamente estos aspectos los que con mayor frecuencia provocan retrasos y, por tanto, requieren especial atención.

I. Cumplimiento con las reglas para la prevención del blanqueo de capitales

A la hora de asesorar en el proceso de la constitución de una filial en Alemania, tanto el abogado como el notario tienen la obligación de identificar al titular real de los socios fundadores⁴. El titular real (“*wirtschaftlicher Berechtigter*” de acuerdo con la terminología alemana) es la persona física que en última instancia posee o controla una persona jurídica. Si el fundador de una sociedad es, a su vez, otra sociedad (la matriz), se considerará titular real a cada persona física que controla más del 25% del capital de la matriz⁵. En la práctica, cuando se trata de una matriz española, suele requerirse, entre otros documentos, el acta de titularidad real de la matriz.

Si no existe ninguna persona física que controle más del 25 % del capital de la matriz —o, en estructuras más complejas, más del 50 % de una matriz indirecta⁶—, se considerarán titulares reales a sus administradores⁷ o, en su caso, a los miembros de su Consejo de Administración⁸.

II. Poderes

En muchos casos, será clave preparar los poderes correspondientes para la constitución de la filial. Si los fundadores desean evitar comparecer personalmente ante notario en Alemania para autorizar la escritura pública⁹, deberán otorgar un poder a favor de la persona que, en representación de la matriz, asistirá en su lugar al notario.

4 (§ 2 (1) no. 10 a) ee) de la Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (*Geldwäschegesetz*), a continuación: “GwG”; traducción libre: Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

5 § 3 (2) no. 1 GwG.

6 § 3 (2) 4 GwG.

7 En este artículo, se usará el término “administrador” para hacer referencia al Geschäftsführer de una GmbH (*Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*, a continuación: “GmbHG”), Ley alemana de las sociedades limitadas.

8 § 3 (2) 5 GwG.

9 Si se menciona en este artículo la “escritura pública”, nos referimos a la “*notarielle Beurkundung*” de acuerdo con los §§ 6 y sig. *Beurkundungsgesetz* (Ley alemana de certificaciones notariales) y § 128 BGB. El notario certifica que la persona mencionada en el documento ha hecho ante él una declaración del contenido certificado.

El poder debe ser notarial, basta con que se certifique la firma del poderdante (*“Unterschriftsbeglaubigung”*)¹⁰. Si se trata de un poder ante notario español¹¹, debe constar la firma con puño y letra y se requiere apostilla de la Haya y su traducción al alemán. El poderdante deberá realizar la firma en presencia del notario, dado que el Registro Mercantil (en adelante, “RM”), por lo general, no acepta la legitimación de la firma por cotejo¹².

Es recomendable acordar el texto de antemano con el notario alemán y utilizar una redacción bilingüe si el notario español lo permite¹³. Es necesario disponer del poder en su original en el momento de la constitución de la sociedad ante notario alemán; ahora bien, hay notarios que proceden a realizar el acta de constitución si se les muestra una copia escaneada del poder¹⁴.

III. Preparación de la apertura de la cuenta bancaria

El tercer requisito al que nos referimos es la apertura de la cuenta bancaria. En realidad, no se trata de un requisito indispensable para la constitución de una sociedad en Alemania, ya que existen otras formas de aportar el capital social: La ley permite aportaciones dinerarias y no dinerarias¹⁵ y en cuanto a la aportación dineraria, se permite la aportación del capital social en efectivo¹⁶. Debido a que la constitución de sociedades a través de aportaciones no dinerarias tiene escasa práctica en general en el contexto de la constitución de filiales por empresas españolas, no expondremos esta opción en detalle.

A diferencia de la práctica en España, los bancos tan sólo abren la cuenta bancaria de la nueva sociedad una vez que se haya realizado el acta de constitución ante notario. Dicho esto, con el fin de agilizar la inscripción de la sociedad en Alemania, se recomienda hablar con el banco de preferencia antes de ir al notario a fin de preparar los documentos requeridos y coordinar quién necesitará ir presencialmente al banco.

C. La estructura corporativa de la GmbH

I. Los socios

1. Aspectos generales

Los socios obtienen su posición como tales a través de sus aportaciones. De esta manera, en el acta de constitución se especifica el número de participaciones que se asignarán a cada socio como contraprestación¹⁷. Cabe destacar que la responsabilidad de los socios queda limitada al importe de sus respectivas aportaciones, conforme al principio de responsabilidad limitada que caracteriza a la GmbH¹⁸. Los socios solo responden ante los acreedores de la sociedad con su patrimonio personal en la medida en que dicha responsabilidad se base en un fundamento jurídico especial, como un contrato o un acto ilícito,

o, excepcionalmente, en los supuestos de levantamiento del velo¹⁹.

En el caso de una filial de una empresa extranjera, suele constituirse con un socio (sociedad unipersonal²⁰). También es frecuente que varias sociedades, ya sean extranjeras o alemanas, se asocien para constituir conjuntamente una filial (*Joint Venture*). Por último, se observa con frecuencia que una sociedad extranjera establezca una filial en la que una persona física, en particular el futuro administrador, posea una participación minoritaria.

2. El deber de no competir: ¿cuándo se aplica a los socios?

El socio único de una filial no está sujeto a la obligación de no competir²¹. En cambio, cuando la sociedad tiene varios socios, surge la pregunta de si existe el deber de los socios de no competir con la sociedad. La jurisprudencia entiende que el deber de no competencia se aplica a los socios con capacidad de influencia relevante, lo que incluye no solo a los titulares de una mayoría del capital, sino también a aquellos con una participación minoritaria si esta conlleva poder de decisión efectivo²². Por otro lado, el deber de no entrar en competencia en un *Joint Venture* podrá vulnerar la prohibición de los cárteles en la legislación de UE²³ según la cual, entre otros aspectos, se prohíben pactos que impidan, restrinjan o falseen la libre competencia dentro de la UE. Por ello, es fundamental analizar cada caso de manera individual. La jurisprudencia únicamente permite la obligación de no entrar en competencia cuando sea necesaria para garantizar la existencia y el funcionamiento del *Joint Venture*²⁴.

II. Capital social

1. Capital social mínimo de 25.000,00 €

El capital social mínimo de la GmbH asciende a 25.000,00 €. Para poder inscribir una GmbH que dispone del capital mínimo en el RM, los socios deben ingresar 12.500,00 €²⁵, sin perjuicio de la obligación de aportar el capital restante.

2. La UG requiere un capital social de tan solo 1,00 €

Con el fin de ofrecer una alternativa que requiere menos capital, desde el año 2008 existe la *Unternehmergesellschaft* (“UG”) que puede constituirse con un capital mínimo de 1,00 €²⁶. De esta forma, el legislador alemán quiso ofrecer a los emprendedores la posibilidad de recurrir a una sociedad capitalista con un capital social muy reducido. Esta opción disfrutó de gran aceptación, hoy en día existen más de 175.000 sociedades de este tipo en Alemania²⁷. Salvo algunas excepciones puntuales²⁸, se aplica a la UG la normativa de la GmbH.

10 § 2 II GmbHG, § 129 BGB.

11 Comparar MÜKoGmbHG/Heinze, 4. Aufl. 2022, GmbHG § 2 Rn. 92.

12 Kammergericht, decisión del 03.03.2022 – 22 W 92/21, NZG 2022, 926.

13 La redacción bilingüe reducirá los costes de traducción ya que, de esta manera, sólo hará falta traducir la certificación notarial y la Apostilla.

14 DNotI-Report 2023, 169.

15 § 5 (4) GmbHG.

16 OLG Oldenburg, decisión del 26. 07. 2007 - 1 U 8/07, NZG 2008, 32; Altmeyen, 11 ed., 2023, GmbHG § 7 Rn. 25.

17 § 3 (1) núm. 3, 4 GmbHG.

18 § 13 (2) GmbHG.

19 MÜKoGmbHG/Fleischer, 4. Aufl. 2023, GmbHG § 41 Rn. 33.

20 Expresamente permitida por § 1 GmbHG desde 1980, comparar MÜKoGmbHG/Fleischer, 4ª ed. 2022, GmbHG § 1 Rn. 68.

21 BGH, decisión del 07.01.2008 - II ZR 314/05, NJW-RR 2008, 629, 630.

22 BGH, sentencia del 05.12.1983 - II ZR 242/82, NJW 1984, 1351; Weitnauer / Grob, GWR 2014, 185, 186.

23 Art. 101 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

24 BGH, sentencia del 23.06. 2009 - KZR 58/07, NZG 2010, 76.

25 § 7 II 2 GmbHG.

26 § 5 a GmbHG.

27 Altmeyen, 11. ed. 2023, GmbHG § 5a Rn. 3.

28 Por ejemplo, en la denominación de la sociedad deberá figurar „UG” en lugar de „GmbH”, para más detalles: § 5ª a GmbHG.

III. Denominación social

La denominación social debe ser adecuada para identificar a la empresa y tener carácter distintivo²⁹. No se permiten denominaciones genéricas que se limiten a describir el sector de actividad³⁰.

Para escoger adecuadamente la denominación social, conviene ponerse en contacto con la Cámara de Comercio (*IHK*) de la futura sede de la sociedad. Si bien no efectúan una búsqueda exhaustiva sobre derechos de terceros, sí ofrecen orientación acerca de la idoneidad de la denominación social. Cuando se realice la inscripción de la sociedad en el RM, éste pedirá a la Cámara de comercio local su visto bueno en todo caso. Por lo tanto, es muy aconsejable entrar en contacto con la Cámara de Comercio antes de la constitución ante notario³¹.

El control del RM para verificar si existe una sociedad con la misma denominación está limitado a la circunscripción del RM competente. Ello se debe a que el Derecho registral alemán solo exige que la nueva denominación se diferencie de las ya inscritas en el mismo municipio o en el ámbito territorial del registro competente³². Parece poco acertada esta regla hoy en día. De todos modos, en la práctica conviene escoger una denominación social que no vulnere los derechos de terceros desde ninguna perspectiva: el hecho de que una denominación sea inscrita en el RM no impide que terceros puedan exigir el cese de su uso por vulnerar su marca, nombre comercial u otros derechos protegidos³³.

IV. Sede y dirección social

En los estatutos, los fundadores deben fijar la sede de la sociedad³⁴, cuya inscripción se realiza en el RM correspondiente a dicha ubicación³⁵. Esta sede determina además el fuero judicial general de la entidad³⁶. Es el lugar para celebrar la junta de socios³⁷. Cabe destacar que el socio único de la sociedad o todos los socios, de forma unánime, tienen plena discreción para celebrar la junta en otro lugar (incluso en el extranjero, salvo si se trata de un acuerdo que requiere escritura pública)³⁸.

Por el contrario, la dirección social de la sociedad no figura en los estatutos y podrá situarse en el lugar de la sede o bien en cualquier otro lugar en Alemania³⁹. Corresponde a los administradores comunicar la dirección social al Registro RM para su inscripción, tal como se detalla en el apartado D. La distinción entre la sede y la dirección social prevista en el derecho alemán desde el año 2008 no existe, a mi entender, de forma idéntica en otros países y permite una gestión más

flexible de las oficinas principales de la sociedad. No es imprescindible que exista una oficina de la sociedad en la dirección social⁴⁰. Puede optarse, por ejemplo, por un bufete de asesores fiscales que ofrezca el servicio de recibir notificaciones⁴¹. Ahora bien, conviene consultar de antemano todos estos aspectos con los asesores fiscales⁴².

V. Objeto de la sociedad

El objeto social debe constar en los estatutos. Su redacción debe permitir identificar de forma general el ámbito de actividad de la empresa y facilitar su asignación a un sector industrial concreto⁴³. La modificación posterior del objeto de la sociedad requiere cambiar los estatutos mediante escritura pública⁴⁴. Si los administradores cambian el objeto social *de facto* (sin que se hayan modificado los estatutos), incurrirán en una infracción de sus deberes⁴⁵. Además, el objeto social delimita el alcance del deber del administrador de no competir con la sociedad⁴⁶.

VI. Los órganos de la sociedad

La GmbH cuenta con dos órganos esenciales: la junta de socios ("*Gesellschafterversammlung*") y el administrador ("*Geschäftsführer*").

Mientras que, en la *Aktiengesellschaft*, el equivalente a la Sociedad Anónima Española, existe de forma obligatoria el *Aufsichtsrat*, el Consejo de Supervisión, en la GmbH sólo es obligatorio contar con este órgano si la sociedad tiene habitualmente más de 500 empleados⁴⁷, para que estos puedan participar en las cuestiones empresariales. Aparte del caso aislado en el que una sociedad recién constituida adquiera una empresa con más de 500 empleados a través de un *asset deal*, el *Aufsichtsrat* obligatorio carece de relevancia práctica para las sociedades contempladas en el presente artículo⁴⁸.

1. La Junta de socios

Los socios expresan su voluntad a través de los acuerdos sociales adoptados en la junta de socios⁴⁹. La ley permite que los acuerdos sociales se adopten sin necesidad de convocar una junta, siempre que

29 Comparar §§ 18, 30 Handelsgesetzbuch (HGB). Para más detalles: Altmeyden, 11ª ed. 2023, GmbHG § 4 Rn. 3.

30 MüKoHGB/Heidinger, 6ª ed. 2025, HGB § 18 Rn. 30.

31 Kiesel/Neises/Plewa/Poneleit/Rolfes/Wurster, DNotZ 2015, 740.

32 § 30 HGB.

33 Comparar § 37 (2) 2 HGB, §§ 5, 14 y 15 MarkenG (Ley de marcas), § 12 BGB (Código civil alemán) y asimismo § 5 UWG (Ley de la competencia desleal).

34 § 4a GmbHG.

35 § 7 (1) GmbHG.

36 La dirección social no determina el fuero general, comparar BayObLG, decisión del 19.12.2019 – 1 AR 139/19, NZI 2020, 242, pero sí es el lugar dónde se efectuará notificaciones a la sociedad (§ 35 (2) 3 GmbHG).

37 § 121 (5) AktG que se aplica a la GmbH de forma análoga. En este sentido: OLG München, sentencia del 22.03.2023 – 7 U 1995/21, NZG 2023, 945; OLG Düsseldorf, decisión del 12.07.2012 – I-6 U 220/11, BeckRS 2012, 22394.

38 Noack/Servatius/Haas/Noack, 24ª ed. 2025, GmbHG § 51 Rn. 20.

39 OLG Frankfurt a. M., decisión del 29.04.2021 – 11 SV 16/21, BeckRS 2021, 15208;

Noack/Servatius/Haas/Servatius, 24. Aufl. 2025, GmbHG § 4a Rn. 5.

40 Comparar § 24 (2) Handelsregistervordnung. La norma citada prevé que se le comunica al RM de las oficinas ("*Lage der Geschäftsräume*") de la sociedad si difiere de la dirección social. En este artículo no entramos en detalles acerca de la cuestión si, hoy en día, existe una estructura mínima (oficina etc.) de la que debe disponer la sociedad.

41 Noack/Servatius/Haas/Servatius, 24ª ed. 2025, GmbHG § 8 Rn. 25.

42 En principio, el derecho fiscal no pone obstáculos ya que el lugar de la dirección, es decir, de la administración determina la competencia local de las autoridades fiscales (comparar §§ 20, 10 Abgabenordnung). Si no existe ninguna oficina ni otro tipo de establecimiento en el lugar de la sede, conviene notificarlo a Hacienda expresamente.

43 § 3 (1) núm. 2 GmbHG. Para más detalles: Noack/Servatius/Haas/Servatius, 24ª ed. 2025, GmbHG § 3 Rn. 7-10.

44 § 53 (1), (3) GmbHG.

45 Noack/Servatius/Haas/Servatius, 24ª ed. 2025, GmbHG § 3 Rn. 10.

46 A falta de una norma expresa, se suele tener en consideración de forma análoga el § 88 (1) 1 Aktiengesetz (Ley de las sociedades anónimas). Para más detalles: Noack/Servatius/Haas/Beurskens, 24ª ed. 2025, GmbHG § 37 Rn. 84.

47 § 1 (1) núm. 1 Drittelbeteiligungsgesetz (Ley alemana de participación de un tercio) aplica a sociedades con más de 500 empleados y prevé que un tercio de los miembros del Aufsichtsrat son representantes de los empleados. A su vez, § 1 (1) núm. 2 Mitbestimmungsgesetz (Ley alemana de cogestión) determina que en las sociedades con más de 2.000 empleados, los últimos puedan nombrar a la mitad de los miembros del Aufsichtsrat.

48 Además, se podrá acordar en los estatutos de la GmbH constituir un Aufsichtsrat de forma voluntaria, pero no suele ser habitual.

49 § 48 (1) GmbHG.

todos los socios consientan expresamente. Este consentimiento puede referirse tanto al contenido del acuerdo como a la forma de su adopción sin reunión formal⁵⁰.

En principio, la junta de socios puede celebrarse desde el extranjero, y adoptar sus decisiones (1) por escrito, (2) por videollamada, (3) por teléfono o incluso (4) de forma híbrida. No obstante, determinados acuerdos sociales requieren escritura pública en función de su contenido, como por ejemplo el aumento o la reducción del capital social, o las modificaciones estatutarias⁵¹.

Aunque no exigen escritura pública, muchos acuerdos sociales están sujetos a inscripción registral y por lo tanto se necesitará recurrir a un notario para encargarle los trámites ante el RM⁵². Esto sucede, a título ilustrativo, con el cese y nombramiento de administradores⁵³. En estos casos, los administradores podrán solicitar la inscripción del acuerdo social ante notario español quien certifica la firma y obtiene la apostilla. Posteriormente, se consigue una traducción jurada y se envían los documentos al notario alemán quien realiza el trámite ante el RM.

2. Los administradores

Los administradores ("*Geschäftsführer*") se encargan de los negocios de la GmbH y, la representan frente a terceros⁵⁴. No obstante, determinadas decisiones pueden corresponder internamente a la junta de socios (comparar con el punto C. VII.).

La GmbH puede contar con uno o varios administradores. La representación de la sociedad puede atribuirse de forma solidaria o mancomunada, y también es posible establecer reglas específicas en los estatutos. Por ejemplo, algunos administradores podrán ostentar la representación individual, mientras que otros únicamente podrán actuar conjuntamente con un segundo administrador o con un apoderado inscrito. A diferencia de lo que ocurre en la SL española, la GmbH alemana no podrá contar con un Consejo de Administración como órgano societario.

Los administradores no están obligados a residir en Alemania⁵⁵. No obstante, en la práctica pueden surgir dificultades si los administradores no se encuentran en Alemania a la hora de firmar contratos con determinados proveedores, como por ejemplo con operadores de telecomunicaciones, ya que estos suelen exigir una firma manuscrita de un representante inscrito en el Registro Mercantil. Para prevenir este tipo de incidencias, podrá ser conveniente nombrar un apoderado e inscribirlo en el RM.

VII. Estatutos

Son las normas internas relativas al funcionamiento y la organización de la sociedad. Resulta aconsejable recurrir a estatutos bastante escuetos.

50 § 48 (2) GmbHG.

51 § 53 (3) 1 GmbHG.

52 § 12 (1) HGB, § 378 FamFG, el así llamado *Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit* (Ley sobre el procedimiento en asuntos de familia y en materia de jurisdicción voluntaria)

53 § 39 (1) GmbHG.

54 § 35 (1) 1 GmbHG.

55 Noack/Servatius/Haas/Servatius, 24ª ed. 2025, GmbHG § 8 Rn. 6.

Una cuestión habitual en relación con los estatutos es cómo delimitar las competencias de los administradores frente a las de la junta de socios. En particular, conviene precisar qué decisiones pueden adoptar los administradores por sí solos y en qué materias se requiere necesariamente la intervención de los socios. La ley otorga amplia libertad a los socios para diseñar el reparto de funciones entre la junta de socios y los administradores⁵⁶.

A menudo se prevé en los estatutos que determinadas decisiones requieren la aprobación de los socios, entre ellas:

- La apertura o cierre de sucursales, así como la constitución o disolución de filiales (es decir, sociedades constituidas directamente por la filial),
- La adquisición de otras empresas,
- El inicio de nuevas líneas de negocio o el cese de las existentes.

No obstante, estas reglas no afectan a la capacidad jurídica de los administradores para representar a la sociedad frente a terceros. Las limitaciones internas impuestas a los administradores por los estatutos o por decisiones de los socios no surten efecto frente a terceros⁵⁷.

D. Conclusión del contrato social ante notario

La cita ante notario constituye el acto durante el cual se concluye el contrato social mediante escritura pública⁵⁸, se aprueban los estatutos y se nombran los primeros administradores. En dicho acto, los administradores confirman que disponen del capital social, si bien de hecho aún no se ha cumplido con este requisito. El notario pospone el envío de la confirmación al RM hasta que se haya ingresado el capital social a la cuenta bancaria de la sociedad.

A través de este acto de formalización de la sociedad, ya nace la GmbH *in Gründung* (sociedad en constitución). Conviene señalar que, en situaciones de urgencia, desde el momento en que han sido nombrados, los administradores ya podrán concluir contratos en nombre de la sociedad⁵⁹. En tal caso, habrá que tomar en cuenta la responsabilidad personal de los administradores en la fase previa a la inscripción de la sociedad en el RM⁶⁰.

La conclusión del contrato social debe llevarse a cabo ante notario alemán ya que, en este caso, el derecho alemán no admite la intervención de notarios extranjeros (con la excepción de algunos notarios suizos)⁶¹. Este artículo no entra a valorar la posibilidad de otorgar la escritura pública por vía electrónica ante notario (es decir, mediante comparecencia digital a través de la plataforma notarial habilitada), ya que, aunque la ley permite esta modalidad desde agosto de 2022 en determinados supuestos, todavía no se utiliza de forma generalizada. Además, su aplicación práctica presenta dificultades, especialmente para quienes no hayan comparecido previamente ante un notario, ya que es necesario instalar el software específico requerido para la identificación digital⁶².

56 Para más detalles: Noack/Servatius/Haas/Noack, 24ª ed. 2025, GmbHG § 46 Rn. 103-105; Noack/Servatius/Haas/Beurskens, 24ª ed. Aufl. 2025, GmbHG § 37 Rn. 27-33.

57 § 37 (2) GmbHG.

58 § 2 (1) GmbHG. Comparar con la nota a pie número 9de este artículo.

59 Noack/Servatius/Haas/Servatius, 24ª ed. 2025, GmbHG § 11 Rn. 12-17.

60 § 8 (2) GmbHG.

61 En detalle: Noack/Servatius/Haas/Servatius, 24ª ed. 2025, GmbHG § 2 Rn. 11.

62 Rubner/Leuring, NJW-Spezial 2022, 463; Noack/Servatius/Haas/Servatius, 24ª ed. 2025, GmbHG § 2 Rn. 69-73.

Como ya se ha mencionado, la sociedad matriz puede otorgar un poder a favor de la persona que comparecerá ante el notario alemán para formalizar la constitución. Por su parte, los administradores de la filial alemana podrán aceptar el cargo y solicitar la inscripción de la sociedad también ante un notario español⁶³, por lo que no resulta preciso que viajen a Alemania.

Tras la cita notarial, se procederá a la apertura de la cuenta bancaria de la sociedad para realizar el ingreso del capital social⁶⁴. Una vez acreditado que dicho capital se encuentra libremente a disposición de los administradores, el notario tramitará la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. Entre la documentación que presentará se incluirá la lista de socios, debidamente firmada por los administradores⁶⁵. Esta lista se depositará en el Registro y será accesible para cualquier persona interesada⁶⁶.

E. La inscripción de la nueva sociedad en el RM y sus efectos jurídicos

La inscripción de la sociedad en el RM tiene carácter constitutivo; con ella, la GmbH adquiere personalidad jurídica plena. En caso de que se hayan celebrado contratos en nombre de la sociedad antes de su inscripción, cesa la responsabilidad personal de quienes actuaron en nombre de la sociedad en constitución ("GmbH in Gründung")⁶⁷.

La inscripción ante el RM durará entre uno y dos meses desde la comparecencia ante notario. Como señalamos antes, en muchas ocasiones, la apertura de la cuenta bancaria es el proceso que más retrasos causa.

Una vez inscrita en el RM, la sociedad, además, debe inscribirse en el registro de la transparencia ("*Transparenzregister*") a efectos de cumplir con las normas relativas a la prevención del lavado de capital. Por último y en función del objeto social, será oportuno iniciar los trámites correspondientes para obtener las licencias y permisos necesarios.

F. Resumen

La constitución de una GmbH en Alemania por parte de una matriz española es un proceso que, con una planificación adecuada y una estrecha colaboración con asesores locales, puede completarse en un plazo de uno a dos meses hasta su inscripción en el RM. La experiencia demuestra que, desde la perspectiva de los fundadores, es factible llevar a cabo gran parte del proceso desde España, gracias a la posibilidad de involucrar a un notario español para ciertos trámites. Al mismo tiempo, es crucial contar con un asesoramiento jurídico y fiscal especializado en Alemania para asegurar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y evitar posibles contratiempos.

Siguiendo los pasos descritos y aprovechando las herramientas disponibles, se puede establecer una filial de manera eficiente y segura, abriendo así nuevas oportunidades de negocio en un mercado clave como el alemán.



Johannes Pitsch

Rechtsanwalt (abogado alemán)
y socio responsable del Spanish Desk
RWP Rechtsanwälte, Düsseldorf
j.pitsch@rwp.de

* Nuestro agradecimiento a la editorial Aranzadi LA LEY por su amable autorización para publicar el presente artículo. Su primera publicación fue en el Diario LA LEY, número 10740, de 10 de junio de 2025.

⁶³ MüKoGmbHG/Herrler, 4ª ed. 2022, GmbHG § 7 Rn. 42, 43.

⁶⁴ Además, en la práctica, es importante asegurarse de que la sociedad tenga un buzón de correo desde la cita notarial para poder recibir notificaciones oficiales.

⁶⁵ § 8 (1) núm. 3 GmbHG.

⁶⁶ § 40 GmbHG, § 9 HGB.

⁶⁷ Comparar con § 11 (2) GmbHG y con BGH, decisión del 16.03.1981 - II ZR 59/80, NJW 1981, 1452.

Lucas de León - Sotelo Fuentes

Promulgación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025: Reforma del régimen de costas de los procedimientos civiles

El pasado 2 de enero de 2025 fue promulgada la Ley Orgánica 1/2025, cuyo objetivo es optimizar la eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta ley entró en vigor el 3 de abril de 2025 e introduce reformas sustanciales en distintos ámbitos del proceso judicial.

El objetivo principal de la Ley Orgánica 1/2025 es promover el uso de mecanismos que permitan resolver los conflictos sin necesidad de recurrir al proceso judicial. La norma refuerza así una visión de la justicia moderna y eficiente, centrada en la prevención del litigio y en la búsqueda de acuerdos entre las partes, castigando la inactividad y premiando los esfuerzos por alcanzar soluciones negociadas.

Entre las medidas más relevantes, destaca la obligatoriedad de acudir a mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC) antes de presentar demanda judicial, **así como una reforma en el régimen de imposición de costas en los procesos declarativos**.

Tradicionalmente, la condena en costas se fundamentaba en el resultado del litigio, salvo en supuestos excepcionales como la existencia de dudas de hecho o de derecho, o la concurrencia de temeridad. **La nueva regulación incorpora como elemento decisivo la participación previa en un MASC para que la parte vencedora pueda acceder a la condena en costas**, incentivando de esta manera la resolución extrajudicial de conflictos.

A continuación, se detallan las principales novedades introducidas por la nueva normativa:

I. Participación en MASC y su incidencia en la estimación total de la demanda y en la imposición de costas

La modificación del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) mantiene el principio general conforme al cual las costas se imponen a la parte cuyas pretensiones hayan sido íntegramente desestimadas, salvo dudas de hecho o derecho. No obstante, se añade una previsión relevante en el apartado tercero del artículo 394.1 LEC: cuando la participación en un MASC sea preceptiva o se hubiese acordado, la parte que resulte vencedora en el proceso no podrá beneficiarse de la condena en costas si ha rehusado injustificadamente, de manera expresa o por actos concluyentes, participar en un MASC. No se exige que el MASC concluya con un acuerdo, sino únicamente que exista una participación y de buena fe en el intento de negociación para lograr una solución a la controversia.

Esta modificación representa un cambio significativo que tanto las partes como sus abogados deberán considerar antes de rehusar a la ligera su participación en cualquiera de los MASC previstos en la LO 1/2025. Y es que, por muy sólida que sea nuestra posición en el proceso —ya sea como demandante o demandado—, ello no garantiza, como ocurría hasta ahora, necesariamente un pronunciamiento favorable en materia de costas solo por el hecho de vencer en el pleito.

II. Participación en MASC y estimación parcial de la demanda

El artículo 394.2 LEC también ha sido reformado para los supuestos en que la estimación de la demanda sea parcial. En estos casos, por regla general, cada parte asumirá sus propias costas, y se dividirán las comunes, salvo temeridad. Sin embargo, si una de las partes no

hubiera participado, injustificadamente, en un MASC obligatorio o acordado, el Letrado o Letrada de la Administración de Justicia podrá, de forma motivada y discrecional, imponerle la totalidad de las costas, aun cuando el fallo le haya resultado parcialmente favorable.

La principal diferencia entre el apartado 1º y 2º del artículo 394 LEC es que, aunque ambos supuestos contemplan la posibilidad de modular la condena en costas con motivo de rechazo injustificado del MASC, en el caso de la estimación total de la demanda, el tenor literal de la ley no dice que *“no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que hubiere rehusado expresamente o por actos concluyentes, y sin justa causa, participar en un medio adecuado de solución de controversias”*, lo que implica un mandato al juez, quien carece de discrecionalidad para imponer las costas en este supuesto. Por contrario, cuando se trata de la estimación parcial de la demanda, la ley aplica un régimen más dispositivo y flexible pues permite condenar al pago de las costas, en decisión debidamente motivada.

III. Efectos de los MASC en procesos con beneficiarios de justicia gratuita

Las reglas anteriores en materia de imposición de costas aplican también a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita. Además, en caso de resultar beneficiarios de las costas, el nuevo artículo 394.3 LEC establece que, deberán abonar a sus profesionales designados los honorarios correspondientes con el importe de las costas, debiendo estos devolver las cantidades recibidas previamente del erario público. Esta gestión se canalizará a través de las Oficinas Judiciales y los respectivos colegios profesionales.

En caso de ser condenado en costas, el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, es decir, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil (*Véase artículo 36.2 Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita*).

IV. Mediación y allanamiento

El artículo 395 LEC regula las consecuencias del allanamiento del demandado. Si bien este acto no conlleva, en principio, condena en costas (artículo 395.1 LEC), se podrán imponer cuando el tribunal aprecia mala fe o abuso del servicio de Justicia. A este respecto, se incluye un nuevo apartado tercero según el cual se considerará mala fe el rechazo previo e injustificado a participar en un MASC seguido de un allanamiento posterior. En tales casos, la condena en costas será automática, salvo que el tribunal aprecie una causa excepcional debidamente justificada.

V. Régimen de desistimiento

El artículo 396.1 LEC no sufre modificaciones. Se mantiene el principio general de que, en caso de desistimiento, el actor deberá asumir las costas, salvo que la parte demandada haya prestado su consentimiento.

VI. Límites en la tasación de costas y reclamaciones de cuantía indeterminada

Por otro lado, se actualizan los límites aplicables en la tasación de costas. El artículo 394.3 LEC dispone que la parte condenada solo estará obligada a abonar hasta un tercio del valor del proceso, cuando el beneficio económico obtenido sea cuantificable. En el caso de reclamaciones de cuantía indeterminada, el valor de referencia para realizar la tasación de costas se incrementa de 18.000 a 24.000 euros, salvo que el tribunal, justificadamente y en atención a la complejidad del asunto, determine otro importe.

VII. Reformas en la impugnación de la tasación de costas

Una vez determinada la imposición de costas, según las reglas anteriores, se procederá a su tasación para establecer el importe exacto. Conforme a la nueva normativa, los gastos derivados de la participación en MASC —incluidos honorarios de letrados, expertos o mediadores— podrán incluirse en la tasación, al tratarse ahora de actuaciones preceptivas con origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso. Así lo recogen, por ejemplo, los criterios de unificación de los Letrados de la Administración de Justicia de Barcelona, que admiten como suplidos los gastos debidamente acreditados mediante factura: *“En la tasación de costas, los gastos generados por un tercero o experto independiente en el MASC se podrán repercutir como suplidos, presentada la factura correspondiente”*. Se deberán acreditar y cuantificar los gastos y presentar la documentación acreditativa en los términos del artículo 242.2 LEC.

La tasación podrá ser impugnada conforme al artículo 245 LEC, ya sea por incluir conceptos indebidos o excesivos, aunque por este segundo motivo, únicamente los honorarios de los abogados, las abogadas, peritos o profesionales no sujetos a arancel. Como novedad, la nueva redacción del apartado 5 de dicho artículo permite al condenado en costas solicitar su exoneración o reducción si, durante el proceso MASC, formuló una propuesta razonable que fue rechazada por la otra parte, siempre que la sentencia sea sustancialmente coincidente con dicha propuesta. Esta disposición también se aplica si la propuesta fue realizada por un tercero neutral, se hubiese rechazado sin justificación y la sentencia recaída en el proceso sea sustancialmente coincidente con la citada propuesta.

Si se alega exención en el pago de costas por haber rehusado el contrario al MASC (art.394.4 LEC), se tramitará como incidente del art.245 bis LEC de exoneración o moderación de costas. En el incidente de solicitud de exoneración o moderación de costas, si no se acompaña la documentación sobre la propuesta realizada junto con la impugnación, se solicitará subsanación. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la petición a la parte contraria por un plazo de tres días. Si esta acepta, se dictará decreto fijando el importe correspondiente. En caso de oposición, el tribunal resolverá mediante auto, sin imposición de costas.

VIII. Conclusión

La Ley Orgánica 1/2025 introduce una reforma profunda en el régimen de costas procesales, con el propósito de promover la resolución extrajudicial de conflictos y descongestionar los tribunales. La participación en mecanismos alternativos de resolución de controversias deja de ser una opción para convertirse en un requisito esencial que influye directamente en las consecuencias económicas del litigio.

En definitiva, esta norma marca un avance hacia una justicia más eficiente, moderna y colaborativa, en la que el diálogo y la mediación ocupan un lugar central en la gestión de los conflictos jurídicos, favoreciendo así procedimientos más ágiles y equitativos para todas las partes intervinientes.



Lucas de León - Sotelo Fuentes

Abogado
MMMM Monereo Meyer Abogados, Madrid
lleon@mmm.es

Lucas de León - Sotelo Fuentes

Erlass und Inkrafttreten des Organgesetzes 1/2025: Reform der Kostenregelung in Zivilverfahren in Spanien

In Spanien wurde am 2. Januar 2025 das Organgesetz 1/2025 (*Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia*) verabschiedet, das ein Reformpaket für mehr Effizienz in der Justiz vorsieht. Am 3. April 2025 trat es in Kraft und sieht umfangreiche Reformen in allen Bereichen des Justizprozesses vor.

Hauptziel des Organgesetzes 1/2025 ist die Förderung der Nutzung alternativer Streitbeilegungsmechanismen, mit denen die Lösung des jeweiligen Rechtsstreits erreicht werden soll, ohne dass der Weg zu den Gerichten beschritten werden muss. Hinter der Reform steht die Vision einer modernen und effizienten Justiz, die auf Konfliktvermeidung und die gütliche Einigung zwischen den Parteien ausgerichtet ist und in der Untätigkeit geahndet und Bemühungen um die Verhandlung von Lösungen belohnt werden.

Zu den wichtigsten Maßnahmen zählt die Pflicht, vor Einreichung einer Klage geeignete Streitbeilegungsmechanismen (MASC) in Anspruch zu nehmen, die mit einer **Reform der Regelung der Verfahrenskosten in Erkenntnisverfahren** einhergeht.

Bisher richtete sich die Auferlegung der Verfahrenskosten ausschließlich nach dem Ergebnis des Verfahrens, außer in Fällen, in denen Tatsachen- oder Rechtszweifel bestanden oder leichtfertiger Justizmissbrauch (*temeridad*) vorlag. **Mit der neuen Regelung wird ein neues Kriterium für die Festsetzung der Verfahrenskosten eingeführt: Die Teilnahme an einem obligatorischen bzw. angeordneten Streitbeilegungsverfahren ist entscheidend dafür, ob die obsiegende Verfahrenspartei auch von einem Kostenurteil zu Lasten der unterlegenen Partei profitieren kann.** Auf diese Weise fördert die Neuregelung die außergerichtliche Einigung.

Nachstehend gehen wir auf die wichtigsten Neuerungen in diesem Zusammenhang ein:

I. Alternative Streitbeilegung und vollumfängliche Stattgabe der Klage

Die Neufassung des Artikel 394.1 der spanischen Zivilprozessordnung (*Ley de Enjuiciamiento Civil*, LEC) behält zunächst das bestehende Grundprinzip der Auferlegung der Verfahrenskosten zu Lasten der Partei bei, deren Ansprüche zurückgewiesen wurden. Eine Ausnahme gilt nur bei Tatsachen- oder Rechtszweifeln. Die Neuerung besteht nun in der Aufnahme einer wesentlichen Bestimmung in Artikel 394.1 LEC, dass keine Kostenentscheidung zugunsten der obsiegenden Partei ergehen darf, wenn sich diese grundlos, ausdrücklich oder stillschweigend geweigert hat, an dem vorgeschriebenen bzw. angeordneten alternativen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. Ausschlaggebend für das Kostenurteil ist jedoch nicht, ob mit dem alternativen Streitbeilegungsverfahren eine Einigung erzielt wurde, sondern lediglich, dass die Streitparteien an dem Verfahren teilgenommen und im guten Glauben versucht haben, eine Lösung des Streits zu verhandeln.

Diese Änderung stellt eine bedeutende Neuerung dar, die sowohl die Parteien als auch ihre Rechtsanwälte berücksichtigen sollten, bevor sie ihre Teilnahme an einem MASC nach dem Organgesetz 1/2025 leichtfertig ablehnen. Denn so solide eine Position im Gerichtsverfahren auch sein mag – sei es als Kläger oder Beklagter –, so garantiert sie

nicht, wie bisher, zwangsläufig eine günstige Kostenentscheidung allein auf Grundlage des Erfolgs im Klageverfahren.

II. Alternative Streitbeilegung und Teilstattgabe der Klage

Artikel 394.2 LEC hat auch hinsichtlich der Teilstattgabe (bzw. Teilabweisung) von Ansprüchen Änderungen erfahren. Grundsätzlich gilt in solchen Fällen, dass jede Partei für die ihr entstandenen Verfahrenskosten sowie für die Hälfte der gemeinsamen Verfahrenskosten aufzukommen hat, es sei denn, eine Partei hat leichtfertig zum Missbrauch der Justiz gehandelt. Hat jedoch eine Partei an dem gesetzlich vorgeschriebenen bzw. richterlich angeordneten MASC nicht teilgenommen, kann sie kraft einer begründeten Entscheidung zur vollständigen Zahlung der Verfahrenskosten verurteilt werden, auch wenn das Urteil teilweise zu ihren Gunsten ausfiel. Diese Entscheidung liegt im Ermessen des Rechtspflegers.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Absatz des Artikel 394 LEC liegt darin, dass zwar beide eine Anpassung der Kostenentscheidung bei grundloser Verweigerung des alternativen Streitbeilegungsverfahrens vorsehen, im Falle der vollständigen Stattgabe der Klage der Wortlaut des Gesetzes jedoch klar abgegrenzt ist: *„die Kostenentscheidung darf nicht zugunsten der Partei ergehen, die sich grundlos, ausdrücklich oder stillschweigend geweigert hat, an dem vorgeschriebenen bzw. angeordneten MASC teilzunehmen.“* Dabei handelt es sich somit um eine klare Weisung an den Richter, die ihm keinen Ermessensspielraum bei der Festsetzung der Kosten einräumt. Bei Teilstattgabe der Klage ist das Gesetz hingegen flexibler, da der Richter bzw. Rechtspfleger in eigenem Ermessen eine Partei zur Übernahme der Kosten in einer begründeten Entscheidung verurteilen darf.

III. Alternative Streitbeilegung und Prozesskostenhilfe

Die dargestellten Regelungen gelten auch im Fall der Prozesskostenhilfe. So nimmt die Neufassung des Artikel 394.3 LEC die Pflicht für die Partei auf, die nicht zur Übernahme der Prozesskosten verurteilt wurde, dass sie ihren Pflichtverteidigern und -prozessagenten ihre Honorare i.H. der Verfahrenskosten zahlen muss. Diese müssen jedoch dann die Beträge zurückzahlen, die sie gegebenenfalls zuvor aus öffentlichen Mitteln für ihre Beteiligung am Verfahren erhalten haben. Die Abwicklung dieser Zahlung erfolgt über die Geschäftsstelle des zuständigen Gerichts und die entsprechenden Rechtsanwalts- und Prozessagentenkammern.

Im Falle einer Verurteilung zur Tragung der Kosten ist der Begünstigte der Prozesskostenhilfe nur zur Zahlung der Kosten verpflichtet, die der Gegenpartei in den Fällen entstanden sind, die ausdrücklich im Gesetz 1/1996 vom 10. Januar zur Prozesskostenhilfe genannt sind, d. h. wenn sich innerhalb von drei Jahren nach Beendigung des Verfahrens seine Vermögensverhältnisse verbessern und die Verjährung gemäß Artikel 1967 des spanischen Zivilgesetzbuches (siehe Artikel 36.2 des Gesetzes 1/1996 zu Prozesskostenhilfe) unterbrochen wird.

IV. Alternative Streitbeilegung und Klageanerkennnis

Artikel 395 LEC regelt die Folgen eines Klageanerkennnisses. Grundsätzlich werden der unterlegenden Partei keine Verfahrenskosten auferlegt, wenn sie die Klageansprüche anerkennt, es sei denn

sie hat nach Auffassung des Gerichts dabei bösgläubig gehandelt. Als bösgläubige Handlung gilt nach dem neu hinzugefügten, dritten Absatz jedoch auch die grundlose Weigerung, an einem alternativen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen, das gesetzlich vorgeschrieben oder richterlich angeordnet wurde. Erkennt sie später die Klageansprüche an, würde sie daher trotz der Anerkennung zur Kostenübernahme verurteilt, es sei denn, nach Auffassung des Gerichts sprechen außerordentliche Gründe dagegen.

V. Abstandnahme

Hinsichtlich der Kostenübernahme im Falle der Verfahrenseinstellung aufgrund von Abstandnahme, sieht das Gesetz 1/2025 keine Neuerungen gegenüber der bisherigen Regelung vor. Nach Artikel 396.1 LEC wird der Abstand nehmende Kläger zur Übernahme der Verfahrenskosten verurteilt, es sei denn der Beklagte hat dieser Abstandnahme zugestimmt.

VI. Kostenbegrenzung und unbestimmte Forderungen

Eine weitere Neuerung erfasst die Grenzen der Kostenfestsetzung. So begrenzt Artikel 394.3 LEC den Höchstbetrag der Verfahrenskosten, die die unterlegene Partei tragen muss, auf ein Drittel des Streitwerts. Allerdings erhöht sich der in diesem Zusammenhang zu Grunde gelegte Streitwert bei nicht bezifferbaren Forderungen von 18.000 Euro auf 24.000 Euro, sofern das Gericht aufgrund der Komplexität der Angelegenheit nichts anderes bestimmt.

VII. Anfechtung der Kostenfestsetzung

Wurde die Kostenentscheidung getroffen, wird ihr genauer Betrag im Rahmen der Kostenfestsetzung bestimmt. Gemäß den neuen Vorschriften können die Kosten für die Beteiligung an einem MASC – einschließlich der Honorare für Rechtsanwälte, Sachverständige und Mediatoren – in diese Kostenfestsetzung eingeschlossen werden, da es sich nun um vorgeschriebene Maßnahmen handelt, die ihren Ursprung unmittelbar im jeweiligen Verfahren nehmen. So halten beispielsweise die Rechtspfleger von Barcelona in ihrer Rechtsauffassung zur Vereinheitlichung des Vorgehens fest, dass ordnungsgemäß mit Rechnungen nachgewiesene Kosten als Auslagen zugelassen sind: „Im Rahmen der Kostenfestsetzung können Kosten, die durch einen Dritten oder einen unabhängigen Sachverständigen im Rahmen der alternativen Streitbeilegungsmaßnahmen entstanden sind, als Auslagen geltend gemacht werden, sofern die entsprechende Rechnung vorgelegt wird.“ Die Kosten müssen nachgewiesen und beziffert werden, und die entsprechenden Belege sind gemäß Artikel 242.2 LEC vorzulegen.

Die Kostenfestsetzung kann gemäß Artikel 245 LEC angefochten werden, entweder wegen Aufnahme unzulässiger Kosten oder Überhöhung, wenngleich eine derartige Überhöhung nur hinsichtlich der Honorare von Rechtsanwälten, Sachverständigen oder anderer Dienstleister geltend gemacht werden kann, die keiner Gebührenordnung unterliegen. Neu ist, dass der neue Wortlaut von Absatz 5 dieses Artikels dem zur Tragung der Kosten Verurteilten das Recht einräumt, die Befreiung oder Herabsetzung der Kosten zu beantragen, wenn er im Rahmen der alternativen Streitbeilegung einen angemessenen Vorschlag unterbreitet hat und dieser von der anderen Partei abgelehnt wurde, sofern das Urteil im Wesentlichen mit diesem Vorschlag übereinstimmt. Diese Bestimmung gilt auch, wenn der Vorschlag von einem neutralen Dritten unterbreitet wurde, grundlos abgelehnt wurde und das im Verfahren ergangene Urteil im Wesentlichen mit dem genannten Vorschlag übereinstimmt.

Wird eine Befreiung von der Kostenübernahme beantragt, weil die Gegenpartei das alternative Streitbeilegungsverfahren abgelehnt hat (Art. 394.4 LEC), wird dies wie ein Fall des Art. 245 bis LEC über die Befreiung oder Minderung der Kosten behandelt. Werden dem Antrag auf Befreiung oder Minderung der Kosten nicht die Unterlagen über den zusammen mit der Anfechtung unterbreiteten Vorschlag beigefügt, wird eine Nachbesserung verlangt. Der Rechtspfleger leitet den Antrag innerhalb einer Frist von drei Tagen an die Gegenpartei weiter. Stimmt diese zu, wird ein entsprechender Kostenfestsetzungsbeschluss erlassen. Im Falle eines Widerspruchs entscheidet das Gericht durch Beschluss ohne Auferlegung von Kosten.

VIII. Schlussfolgerung

Das Gesetz 1/2025 nimmt wesentliche Änderungen an der Regelung der Verfahrenskosten vor, um die außergerichtliche Streitbeilegung zu fördern und so die Gerichte zu entlasten. Die Teilnahme an alternativen Streitbeilegungsverfahren ist somit keine Option mehr, sondern wird wesentliche Voraussetzung, die direkten Einfluss auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des Rechtsstreits nimmt.

Die Neuregelung ist ein Schritt zu einer effizienteren, moderneren und kollaborativeren Justiz, in der Dialog und Mediation eine Schlüsselrolle bei der Konfliktlösung einnehmen. Zudem fördert sie agilere und gerechtere Verfahren, in denen alle betroffenen Parteien gleich behandelt werden.



Lucas de León - Sotelo Fuentes

Abogado
MMMM Monereo Meyer Abogados, Madrid
lleon@mmm.es

Frank Müller

STEUERRECHT 2025 (TEIL 2)

Inhalt

A. Zwischenschalten SL

Gründung von Kapitalgesellschaften zur Minimierung von Steuern natürlicher Personen sowie im Rahmen des Erwerbs von Aktiva

B. Simulation von Gesellschafterdarlehen und deren steuerliche Behandlung Aktuelle Rechtsprechung und praktische Hinweise

C. Aktuelles - Lex Beckham

Verordnung zu Art. 93, Definition des „Entsandten“, das „besondere Interesse des spanischen Staats“ – ENISA

Nachteile der Regelung und Sonderregelung des Baskenlands

D. Gewinnabführungsvertrag Spanien – Deutschland

Zulässigkeit von Gewinnabführungsverträgen zwischen einer deutschen GmbH und einer spanischen S.L.

A. Zwischenschalten SL

Häufig erfolgt die Gründung von Kapitalgesellschaften mit dem Ziel der Minimierung von Steuern natürlicher Personen, indem Einnahmen oder Ausgaben nicht dem tatsächlichen Träger der wirtschaftlichen Tätigkeit, sondern vielmehr einer Gesellschaft zugerechnet werden.

Das Zwischenschalten einer Kapitalgesellschaft stellt auch im Rahmen des Erwerbs von Aktiva ein beliebtes Gestaltungsinstrument dar.

Finanzbehörden wiederum versuchen Einkünfte in wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht einer Gesellschaft, sondern den tatsächlich handelnden, dahinter stehenden natürlichen Personen zuzurechnen.

Der vorliegende Artikel behandelt die Sichtweise der spanischen Steuerbehörden.

I. Zwischenschaltung international

Gemäß EuGH-Urteil vom 12.9.2006 in der Rechtssache C-196/04, Cadbury Schweppes, kann das Zwischenschalten einer Kapitalgesellschaft in EU-Fällen nur dann missbräuchlich sein, wenn sie eine „rein künstliche, jeder wirtschaftlichen Realität bare Gestaltung“ ist.

In Deutschland sieht der Bundesfinanzhof Gesellschaften kritisch, wenn diese ohne eigenes Personal, ohne eigene Geschäftsräume und ohne eigene Geschäftsausstattung agieren. Nach § 42 Satz 1 AO darf durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts das Steuerergesetz nicht umgangen werden. Ein Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten liegt nach ständiger Rechtsprechung des BFH bei rechtlichen Gestaltungen vor, die zur Erreichung des erstrebten wirtschaftlichen Ziels unangemessen sind, der Steuerminderung dienen sollen und durch wirtschaftliche oder sonst beachtliche außersteuerliche Gründe nicht zu rechtfertigen sind.

II. Zwischenschalten SL Spanien – Handeln natürlicher Personen (Kriterium der Steuerbehörde)

1. Risiken im Zusammenhang mit der Zwischenschaltung von Kapitalgesellschaften bei der Erbringung von beruflichen Tätigkeiten

Jeder Unternehmer oder Selbständige kann grds. die Art und Weise, in der er seine Dienstleistungen erbringt, frei wählen. Er kann entweder unmittelbar im eigenen Namen agieren, oder - bspw. aus Haftungsgründen - mittels einer Gesellschaft.

2. Beide Formen der Erbringung der Dienstleistungen sind zivil- oder gesellschaftsrechtlich rechtmäßig und unbedenklich, letztere kann jedoch steuerrechtlich ggf. Risiken mit sich bringen, sofern die Verwendung der Gesellschaft erfolgt, um von einer natürlichen Person erbrachte Leistungen über die Gesellschaft abzurechnen, ohne dass zum einen diese selbst handelt, zum anderen die Finalität darin besteht, die Steuern des Unternehmers oder Freiberuflers durch Verlagern der Einkünfte in unzulässiger Weise zu senken.

III. Zwischenschalten SL - steuerliche Behandlung

1. Zwischenschaltung der SL durch Berufsträger.

1.1 Die spanische Rechtsordnung erlaubt natürlichen Personen mittels verschiedener Formen von juristischen Personen zu handeln. Ein Beispiel hierfür sind Kapitalgesellschaften, denen das Gesetz eigene Rechtsfähigkeit und damit die Fähigkeit zur Vornahme von Geschäften sowie zur Begründung von Rechten und Pflichten zuerkennt. Diese Gesellschaftsformen verfolgen einen spezifischen Zweck, wie das Treiben von Handel und der Verfolgung wirtschaftlicher Aktivitäten, und werden hier nach in den Gesellschaftsarten abgegrenzt.

Auf diese Weise kann eine Person im Fall der Erbringung beruflicher Dienstleistungen diese entweder persönlich als natürliche Person oder aber mittels einer juristischen Person, durch die Gründung einer Berufsgesellschaft („sociedad limitada profesional, SLP“), erbringen; teilweise besteht insoweit eine gesetzliche Pflicht. Beide dieser Optionen sind grds. legal, haben aber unterschiedliche steuerliche Folgen.

Die steuerliche Behandlung juristischer Personen durch das spanische Finanzamt bringt einige Vorteile gegenüber derjenigen der natürlichen Personen mit sich, weswegen das Zwischenschalten einer SL grds. wirtschaftlich von Vorteil sein kann.

1.2 Die Wahl der Form der Leistungserbringung darf jedoch nicht dazu dienen, die steuerliche Belastung auf unrechtmäßige Weise zu verringern – etwa indem über eine Gesellschaft abgerechnet wird, ohne dass diese tatsächlich an der Tätigkeit beteiligt ist, allein mit dem Ziel, weniger Steuern zu zahlen. Auch wenn es wie ausgeführt grds. rechtlich zulässig ist, berufliche Leistungen mittels Gesellschaften zu erbringen, ist der bloße Einsatz solcher Gesellschaften als reines Instrument zur Senkung der Steuerlast des Berufsträgers unzulässig.

So äußerte sich das Oberste Gericht von Madrid (Urteil vom 28. Januar 2015, Az. 1496/2012), bestätigt durch das Urteil des Obersten Gerichtshofs Spaniens (TS) vom 4. Oktober 2016 (Az. 2402/2015): „Zwar erlaubt die Rechtsordnung die Erbringung beruflicher Dienstleistungen durch Kapitalgesellschaften, jedoch schützt sie nicht den Fall, in dem eine Gesellschaft zur Abrechnung von Leistungen einer natürlichen Person genutzt wird, ohne dass diese Gesellschaft tatsächlich in die Leistungserbringung eingebunden ist – mit dem ausschließlichen Ziel, die direkte Besteuerung des Berufsträgers zu verringern.“

1.3 Um nun zu bestimmen, wann denn eine Nutzung solcher Gesellschaften als rechtswidrig und missbräuchlich gelten kann, ist das Verständnis des Bezugs zwischen der beruflichen und der wirtschaftlichen Tätigkeit zu verstehen.

Gemäß Art. 1 des Gesetzes 2/2007 über Berufsgesellschaften (Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales) handelt es sich um Gesellschaften, deren Geschäftszweck die gemeinsame Ausübung einer beruflichen Tätigkeit ist. Eine solche liegt dann vor, wenn sie einen Hochschulabschluss voraussetzt und die Eintragung in eine Kammer (Colegio Profesional) erforderlich ist.

Nach diesem Verständnis könnte auf den ersten Blick angenommen werden, dass ausschließlich Berufsgesellschaften berufliche Tätigkeiten ausüben dürfen.

1.4 Aus steuerlicher Sicht jedoch wird der berufliche Charakter einer Gesellschaft aber nicht durch deren rechtliche Form oder satzungsmäßigen Zweck bestimmt, sondern vielmehr durch die Art der erzielten Einkünfte.

Das Gesetz 35/2006 vom 28. November über die Einkommensteuer für natürliche Personen (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)), definiert Einkünfte aus wirtschaftlicher Tätigkeit als **solche, die aus persönlicher Arbeit, aus Kapital oder aus beidem erzielt werden, sofern eine eigenständige Organisation von Produktionsmitteln und Personal vorliegt, mit dem Ziel der Herstellung und Verteilung von Waren oder Dienstleistungen. Daraus folgt, dass berufliche Tätigkeiten lediglich eine Untergruppe innerhalb des umfassenderen Begriffs der wirtschaftlichen Tätigkeit darstellen, welcher sämtliche freiberuflichen Tätigkeiten umfasst.**

Die Nutzung von Gesellschaften zur Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten kann als Rechtsmissbrauch gewertet werden, wenn ein Gesellschafter – unter Ausnutzung der steuerlichen Vorteile juristischer Personen – eine Gesellschaft zwischenschaltet, an die er seine beruflichen Dienstleistungen erbringt.

In diesen Fällen wird die Gründung der Gesellschaft nicht zur Erfüllung der gesetzlich vorgesehenen Unternehmensziele eingesetzt, sondern ausschließlich zur Erlangung wirtschaftlicher Vorteile.

Aus Sicht der Finanzverwaltung gelten diese Gesellschaften als Strukturen missbräuchlicher Steuerplanung, insbesondere dann, wenn der Berufsträger alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der zwischengeschalteten Gesellschaft ist, die weder die Struktur noch die Mittel besitzt, die sie zur Ausübung der behaupteten Tätigkeit benötigt.

Wenn die Gesellschaft nicht über ausreichende Mittel verfügt oder nicht tatsächlich am Geschäftsverkehr teilnimmt, handelt es sich nur um eine rein formale Gestaltung ohne reale Mitwirkung an geschäftlichen oder beruflichen Vorgängen, was im Hinblick auf den höchstpersönlichen Charakter der erbrachten Leistungen besonders ins Gewicht fällt.

2. Risiken im Zusammenhang mit dem Zurückhalten von Einkünften in gesellschaftsrechtlichen Strukturen

In der Praxis zeigen sich Risiken bei der Vermischung von Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen des Gesellschafters.

2.1 Diese Praktiken umfassen unter anderem Einnahmen nicht in der persönlichen Steuererklärung zu deklarieren, während die Gesellschaft private Ausgaben des Gesellschafters übernimmt.

In der Buchführung der Gesellschaft werden diese Aufwendungen in der Regel als Betriebsausgaben abgesetzt, einschließlich der Vorsteuer (Mehrwertsteuer) – was ggf. im Falle einer Privatperson nicht möglich wäre.

2.2 In anderen Fällen nutzen die Gesellschafter Vermögensgegenstände der Gesellschaft, wie Immobilien oder Fahrzeuge, auf der Grundlage von Miet- oder Nutzungsüberlassungsverträgen.

Insoweit bedürfen solche Verträge sorgfältiger Prüfung in steuerlicher Hinsicht, um sicherzustellen, dass deren Bewertung den Steuernormen entspricht. Insbesondere den Bestimmungen des Artikel 18 des Gesetzes 27/2014 vom 27. November über die Körperschaftsteuer (Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS)).

In diesem Zusammenhang lassen sich häufig von der Verwaltung als schwerwiegend eingestufte Fälle feststellen, in denen Mietverträge lediglich zum Schein abgeschlossen werden, um Vorsteuerabzüge zu rechtfertigen, oder Einnahmen mit nicht berufsbezogenen Ausgaben verrechnet werden, was zu steuerlichen Korrekturen bei verschiedenen Steuerarten führen kann, wie etwa bei Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Mehrwertsteuer oder auch der Vermögensteuer, sowie natürlich auch zu Strafen.

3. Mechanismen der Steuerverwaltung zur steuerlichen Korrektur beim Zwischenschalten von SL

Der missbräuchliche Einsatz gesellschaftsrechtlicher Strukturen hat die Finanzverwaltung dazu veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen, um die exzessive Nutzung insbesondere der Berufsgesellschaften zur unrechtmäßigen Minderung der Steuerlast zu verhindern.

Diese Maßnahmen zielen nicht darauf ab, die Ausübung eines Berufs durch eine Gesellschaft zu unterbinden – die Wahl der Rechtsform zur Ausübung einer Tätigkeit steht wie ausgeführt ausdrücklich grundsätzlich frei –, sondern darauf, zu verhindern, dass diese Rechtsform rechtswidrig zur Steuervermeidung genutzt wird.

Die Steuerverwaltung hat daher zwei Ansätze entwickelt, um diese Situation zu bereinigen, je nachdem, ob die Gesellschaft über die notwendigen Ressourcen zur Ausübung der Tätigkeit (Personal und Ausstattung) verfügt oder nicht.

3.1 Gesellschaft ohne eigene Mittel: Verfügt die Gesellschaft nicht über die notwendigen Mittel zur Ausübung der Tätigkeit und wird diese tatsächlich vom Berufsträger selbst ausgeführt, wird das Zwischenschalten der SL als eine reine Scheinhandlung („simulación“) qualifiziert. Es handelt sich um die bloße formelle Zwischenschaltung einer Gesellschaft, die an der geschäftlichen oder beruflichen Beziehung selbst nicht beteiligt ist, da diese ausschließlich vom Berufsträger selbst wahrgenommen wird.

In einem solchen Fall greift die Finanzverwaltung auf Artikel 16 der Ley 58/2003 (Ley 58/2003 Ley General tributaria (LGT)) zurück und nimmt eine steuerliche Korrektur vor, indem sie die betreffenden Einkünfte als Einkünfte aus persönlicher Arbeit behandelt, die der Einkommensteuer (IRPF) unterliegen.

Ein Beispiel hierfür ist das oben erwähnte Urteil des Oberlandesgerichts Madrid vom 28. Januar 2015.

3.2 Gesellschaft mit eigenen Mitteln:

Wenn die Gesellschaft hingegen die erforderlichen Ressourcen besitzt, um ihre Tätigkeit auszuüben, also sächliche und persönliche Mittel, dann wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft die Tätigkeit auch tatsächlich ausübt.

Allerdings muss der Wert der vom Gesellschafter erbrachten Dienstleistungen angemessen sein und die Voraussetzungen erfüllen, die Artikel 18 des Körperschaftsteuergesetzes vorgibt.

Falls die Dienstleistungen nicht angemessen bewertet worden sind, führt dies zu einer steuerlichen Korrektur und gegebenenfalls zu entsprechenden Sanktionen.

Daher rührt das Erfordernis die erbrachten Dienstleistungen zum Marktwert anzusetzen.

Artikel 18 Absatz 6 erleichtert diese Bewertung, wenn eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt ist, bei deren Erfüllung davon ausgegangen wird, dass die vom Berufsgesellschafter erbrachten Dienstleistungen zum Marktwert erfolgen. Diese Voraussetzungen sind:

- a. Die beruflichen Einkünfte der Gesellschaft müssen aus beruflichen Tätigkeiten stammen, und es müssen außerdem die personellen und sachlichen Mittel vorhanden sein, um diese auszuführen.
- b. Die Vergütung der/des Gesellschafter/s für die Erbringung von Dienstleistungen an die Gesellschaft darf nicht weniger als 75 % des geschäftlichen Ergebnisses ohne Abzug dieser Einkünfte betragen.

Zum Beispiel: Bei einer Praxis mit einem Gewinn von 100.000 € darf die Bewertung der Dienstleistungserbringung durch den Gesellschafter als Berufsträger nicht unter 75.000 € liegen, damit sie als marktgerecht anerkannt wird.

- c. Zudem muss die Vergütung an der positiven Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet sowie schriftlich geregelt sein und darf nicht unter dem 1,5-fachen des Durchschnittsgehalts eines Angestellten mit vergleichbarer Funktion liegen. Das bedeutet, dass in dem vorgenannten Beispiel, wenn ein angestellter Arzt in Spanien 35.000 € brutto pro Jahr verdient, der Gesellschafter als Berufsträger nicht weniger als 52.500 € ($35.000 \text{ €} \times 1,5$) erhalten darf, mithin an die Gesellschaft abrechnen muss.

In beiden Fällen kann die Steuerverwaltung bei unzureichender Bewertung einschreiten, die Beträge korrigieren und anpassen sowie Sanktionen verhängen. Es soll also u.a. vermieden werden Gewinne zu günstigeren Körperschaftsteuersätzen in der zwischengeschalteten SL zu versteuern und diese in der Gesellschaft stehen zu lassen.

Darüber hinaus stehen dem spanischen Finanzamt in diesem Zusammenhang verschiedene Instrumente zur Verfügung, um Steuerbetrug und Steuervermeidung zu verhindern.

Besonderer Erwähnung bedürfen die aus Titel I der Allgemeinen Abgabenordnung (Ley General Tributaria (LGT)), insbesondere

- Artikel 13 (Qualifizierung),
- Artikel 15 (Konflikt bei der Anwendung der steuerlichen Vorschriften) und
- 16 (Scheingeschäft).

Allerdings hat jedes dieser Instrumente eigene Besonderheiten und Voraussetzungen.

Der Oberste Gerichtshof (Tribunal Supremo, TS) hat wiederholt betont, dass diese Instrumente nicht austauschbar sind und ihre Anwendung an den konkreten Kontext angepasst sein muss.

Im Hinblick auf die Anwendung von Sanktionen gilt: Wird keine Simulation festgestellt, gelten die Gesellschaft und der Gesellschafter als voneinander unabhängige juristische Personen, und die Sanktion berechnet sich anhand der Einkommensteuer, die der Gesellschafter zu wenig gezahlt hat, ohne die bereits entrichtete Körperschaftsteuer der Gesellschaft zu berücksichtigen.

Die Steuerverwaltung neigt dazu, eher die Qualifizierung oder die Simulation statt des Konflikts bei der Anwendung der steuerlichen Vorschriften zu verwenden, da die Anwendung der Artikel 13 und 16 der LGT verfahrensrechtlich einfacher ist.

Wird die Simulation bestätigt, dann wird die Gesellschaft als unabhängige Einheit ignoriert, und die von der Gesellschaft gezahlte Körperschaftsteuer wird auf die Steuerpflicht des Gesellschafters angerechnet, was die Bemessungsgrundlage der Sanktion bei der Einkommensteuer reduziert.

Allerdings wird diese Praxis, die das Zentrale Wirtschafts- und Verwaltungsentscheidungsorgan (TEAC) in seiner jüngsten Entscheidung vom 24. Juli 2023 (04117/2020) bestätigt hat, kritisiert, da sie Simulationen steuerlich begünstige.

4. Definition Simulation

Zu beachten, dass Artikel 16 der Allgemeinen Abgabenordnung (LGT) die steuerliche Simulation regelt, jedoch weder konkret definiert, was unter Simulation zu verstehen ist, noch die Voraussetzungen zu ihrer Feststellung nennt.

Auch das spanische BGB (Código Civil (CC)) gibt keine klare Definition der Simulation. Die zivilrechtliche Rechtsprechung verbindet die Simulation jedoch mit dem Rechtsgrund („causa“) der Verträge und führt sie auf die Absicht der Parteien zurück, einen täuschenden Anschein zu schaffen, der Dritte benachteiligt ((Art. 1276 und 1277 CC).

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (Tribunal Supremo, TS) — sowohl der Zivilkammer (Sala Primera) als auch der Kammer für Verwaltungsstreitverfahren (Sala Tercera -de lo Contencioso-administrativo-) — hat die wesentlichen Elemente der Simulation herausgearbeitet:

„Die Diskrepanz zwischen der durch die Parteien geschaffenen Realität und der von ihnen abgegebenen Erklärung sowie die Existenz einer bewussten Verschleierung und Täuschung, die Dritte benachteiligen soll.“

4.1 Professor Francesco Ferrara beschreibt in seiner Monografie „Die Simulation der Rechtsgeschäfte“ die Voraussetzungen eines simulierten Rechtsgeschäfts:

- a. Eine Erklärung, die absichtlich nicht der wahren Absicht entspricht.
- b. Eine vorherige Vereinbarung der beteiligten Parteien.
- c. Die Absicht, Dritte zu täuschen.

Das herausragende Kennzeichen eines simulierten Geschäfts ist der absichtliche Widerspruch zwischen Wille und Erklärung. Die Parteien wollen das Geschäft tatsächlich gar nicht abschließen, sondern nur diesen Anschein erwecken, indem sie eine Erklärung abgeben, die ihrer wahren Absicht widerspricht.

Das führt zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts und ruft die falsche Vorstellung hervor, es sei existent. Die Simulanten wollen Dritten

glauben machen, dass ein Rechtsverhältnis besteht, das tatsächlich gar nicht existiert, indem sie eine äußerlich täuschende, aber inhaltsleere Erklärung abgeben, die null und nichtig ist und nur dazu dient, die Öffentlichkeit zu beeindrucken.

4.2 Diese Vorstellung lässt sich auch auf die steuerliche Simulation übertragen, bei der sowohl absolute Simulation (z. B. die Ausstellung falscher Rechnungen) als auch relative Simulation (z. B. die Erklärung und Besteuerung der Übertragung einer Immobilie als Kauf statt als Schenkung) vorkommen. In diesen Fällen liegen alle zuvor genannten Elemente vor, sodass der gesamte Anwendungsbereich des Art. 16 LGT zur Anwendung kommt.

Die Simulation durch Einschaltung einer juristischen Person ist jedoch komplexer und erfordert eine sorgfältige Prüfung, um zu ermitteln, ob es sich um eine echte (zulässige oder rechtsmissbräuchliche) oder eine nur vorgetäuschte Zwischenschaltung handelt. Bei der echten Zwischenschaltung handelt die vorgeschaltete Person rechtmäßig im Namen eines anderen, während sie bei der simulierten Zwischenschaltung nur als Fassade zur Täuschung dient.

Hinsichtlich der Gründung und Nutzung einer Gesellschaft zur Erbringung beruflicher Dienstleistungen wird argumentiert, dass es sich dabei nicht um eine Simulation handelt, da weder eine Verschleierung noch Täuschung vorliegt und die Absichten der Parteien mit ihren Erklärungen übereinstimmen. Dies wird durch die ordnungsgemäße Erfüllung der steuerlichen Pflichten und die Transparenz gegenüber der Verwaltung gestützt.

Allerdings haben manche rechtlichen und gerichtlichen Interpretationen die Ansicht vertreten, dass die Gründung einer Gesellschaft durch eine natürliche Person zur Abrechnung ihrer Dienstleistungen sehr wohl eine Simulation darstellen kann, wenn Verschleierung oder das Fehlen eines wirtschaftlich validen Grundes nachgewiesen werden.

In Fällen, in denen die Gesellschaft Dienstleistungen erbringt - auch wenn diese von einer natürlichen Person die Gesellschafter ist, ausgeführt werden - darf nicht automatisch von Simulation ausgegangen werden, wenn weder Verschleierung noch Täuschung vorliegt. Die Gründung einer Gesellschaft zur Erbringung beruflicher Dienstleistungen sollte daher bei ordnungsgemäßer und transparenter Erklärung gegenüber der Steuerverwaltung laut der Rechtsprechung des TS und der Lehrmeinung nicht als Simulation gelten.

Tatsächlich bestätigen die Gerichte häufig die Entscheidungen der Steuerbehörde (AEAT), die zwischengeschaltete Gesellschaften oder deren Dienstleistungen als simuliert einstufen. Allerdings gibt es auch Stimmen, die fordern, dass diese Doktrin überprüft werden sollte, um sicherzustellen, dass die Simulation nur dann zur Anwendung kommt, wenn die Elemente der Täuschung und der Verschleierung tatsächlich vorliegen.

5. Zwischenschalten SL - aktuelle Rechtsprechung:

Da der Sanktionsbereich den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit und der Tatbestandsmäßigkeit unterliegt, darf die Verwaltung das Verhalten nicht willkürlich entweder als verbundene Geschäfte („operaciones vinculadas“) oder als Simulation qualifizieren, ohne dies hinreichend zu begründen.

Falls beide Tatbestände unter verschiedene rechtliche Regelungen subsumierbar sind, sollte die für den Steuerpflichtigen günstigere Regelung angewendet werden, also die mildere Sanktion.

Wird eine Simulation festgestellt, ist der Verstoß allerdings schwerwiegender aufgrund der Verschleierung und möglichen Täuschung. In seinem Urteil vom 8. Juni 2023 (Az. rec. cas. Nr. 6528/2021) betont der TS, dass es bei Simulationen gerechtfertigt ist, „den Schleier der juristischen Person zu lüften“, („levantar el velo corporativo“) um aufzudecken, dass die zwischengeschaltete Gesellschaft nur eine Fassade ist und dass die natürliche Person und die Gesellschaft steuerlich als ein und dieselbe Einheit zu betrachten sind.

5.1 Die steuerliche Regulierung und die Sanktionsbemessung müssen dieser Perspektive entsprechen, und die Sanktionsgrundlage muss die Differenz zwischen der tatsächlich gezahlten Steuer der fiktiven Gesellschaft und der geschuldeten Einkommensteuer der natürlichen Person widerspiegeln.

Die Urteile vom 6. und 8. Juni 2023 (Az. rec. cas. 8550/2021 und 5002/2021) gehen nicht darauf ein, ob der allgemeine Sanktionsrahmen der LGT oder der spezielle Sanktionsrahmen der Vorschriften über verbundene Geschäftsvorfälle (Art. 18.13 der geltenden Körperschaftsteuergesetzgebung) zur Anwendung kommt.

5.2 In früheren Urteilen vom 15. Oktober 2018 (rec. cas. Nr. 4561/2017) und vom 18. Mai 2020 (rec. cas. Nr. 6187/2020) hat der

Oberste Gerichtshof festgestellt, dass das Sonderregime gemäß Körperschaftsteuergesetz nicht anwendbar ist, wenn das Unternehmen nicht verpflichtet ist, die in diesem Regime vorgesehene Dokumentation zu führen.

In diesem Fall findet das allgemeine Sanktionssystem gemäß der Abgabenordnung (LGT) Anwendung – insbesondere die Sanktionen nach Artikel 191 –, die nicht zur Anwendung kämen, wenn das genannte Sonderregime greifen würde.

Diese Urteile machen deutlich, dass der Steuerverwaltung bei der Regulierung der Situation von Gesellschaften, die berufliche Dienstleistungen erbringen, zwei Wege offenstehen: die Berichtigung der Bewertung der Geschäfte; oder die Annahme der Simulation.

Die Kriterien für die Wahl zwischen diesen Optionen bleiben jedoch unklar, was problematisch ist, da die Verwaltung ohne klare Leitlinien nicht im freien Ermessen entscheiden sollte, zumal die Sanktionsfolgen unterschiedlich ausfallen.

5.3 Ein späteres Urteil vom 21. Juni 2023 (rec. cas. Nr. 7268/2021) ergänzt diese Situation:

Darin wurden Kommunikationsdienstleistungen über eine zwischengeschaltete Gesellschaft einem Radiosender angeboten, zu dem der Berufsträger und Gesellschafter keine direkte Verbindung hatte. Die Steuerprüfung korrigierte die Situation und ging davon aus, dass der Berufsträger Einnahmen nahezu in Höhe des Gewinns der Gesellschaft hätte erhalten und versteuern müssen.

Die Audiencia Nacional hatte in ihrem Urteil vom 7. Juli 2021 (rec. Nr. 112/2018) zugunsten des Steuerpflichtigen entschieden und argumentiert, dass die Gesellschaft über eigene Mittel und Personal verfügte. Der TS hob dieses Urteil jedoch auf und bestätigte die vorgenommene steuerliche Regulierung der Verwaltung.

Das Wesentliche an diesem Urteil ist das Fehlen von Klarheit bei der Definition, wann die Nutzung einer zwischengeschalteten Gesellschaft als rechtsmissbräuchlich anzusehen ist. Der Oberste Gerichtshof hat in früheren Entscheidungen – insbesondere in den Urteilen vom

17. Dezember 2019 (Revisionsnummer 6108/2017) und vom 17. Dezember 2020 (Revisionsnummer 5977/2018) – klargestellt, dass ein Missbrauch dann vorliegt, wenn die Gesellschaft über keine personellen und sachlichen Mittel verfügt, die über diejenigen der Gesellschafter hinausgehen, welche in Wirklichkeit selbst die Dienstleistungen erbringen.

Die Urteile aus dem Jahr 2023, insbesondere das vom 21. Juni, heben hervor, dass die Verwaltung in einigen Fällen keine Simulation festgestellt, sondern lediglich die Bewertung der verbundenen Geschäftsvorgänge korrigiert hat, ohne ihre Entscheidung für den einen oder anderen Weg ausreichend zu begründen.

In diesem letzten Urteil wird erwähnt, dass es sich zwar nicht um eine schwerwiegende Simulation handelte, jedoch eine nicht erforderliche Zwischenschaltung einer Gesellschaft bestand, welche die Einkünfte und die steuerliche Belastung des Berufsträgers erheblich verringerte.

Die Steuerbehörde (AEAT) scheint zu versuchen, im Steuerbereich die zivilrechtliche „Doktrin des Durchgriffs“ anzuwenden, die ihren Ursprung im angloamerikanischen Recht hat. Diese ermöglicht es, in Ausnahmefällen die rechtliche Selbständigkeit einer Gesellschaft zu ignorieren, wenn sie missbräuchlich zur Umgehung rechtlicher Haftungen oder Rechte benutzt wird.

5.4 Der Oberste Gerichtshof hat betont, dass die Rechtsfähigkeit der Gesellschaften grundsätzlich zu respektieren ist.

Doch wenn ihre Rechtsfähigkeit der zwischengeschalteten SL dazu missbraucht wird, Dritte zu täuschen oder zu benachteiligen, können Gerichte diesen „Schleier lüften“ und hinter die rechtliche Struktur der Gesellschaft blicken. Die Anwendung dieser Doktrin unterliegt bestimmten Voraussetzungen, wie u. a. die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes vom 5. Oktober 2021 (STS 673/2021) zeigt:

- a. Die Regel muss sein, die Rechtspersönlichkeit der Kapitalgesellschaften zu akzeptieren.
- b. Nur ausnahmsweise und restriktiv darf diese ignoriert werden, wenn der Missbrauch der Rechtsfähigkeit dazu dient, Dritte zu schädigen oder deren Rechte zu umgehen. Das Vertrauen in den Grundsatz von Treu und Glauben muss bei Handelsgeschäften gewahrt bleiben.

Die Urteile vom 7. Juni 2011 (STS 422/2011) und vom 30. Mai 2012 (STS 326/2012) stellen fest, dass die sogenannte „Durchgriffshaftung“ („levantamiento del velo“) es erlaubt, „in die persönliche Substanz von juristischen Personen oder Gesellschaften einzudringen, denen das Gesetz eine eigene Rechtspersönlichkeit verleiht, um zu verhindern, dass unter dem Deckmantel dieser rechtlichen Fiktion private oder öffentliche Interessen geschädigt oder diese Form als Mittel zum Betrug verwendet wird (Art. 6.4 CC).“ Die Rechtsprechung erlaubt es den Richtern, „den juristischen Schleier zu durchdringen, um Missbrauch dieser rechtlichen Eigenständigkeit zu vermeiden (Art. 7.2 CC), sofern dadurch Dritte oder deren Rechte (Art. 10 der Verfassung) oder auch die Interessen der Gesellschafter geschädigt werden, also bei einem missbräuchlichen Gebrauch der Rechtspersönlichkeit oder einer unsozialen Ausübung des Rechts (Art. 7.2 CC).“

5.4.1 Das heißt konkret: Dieses gerichtliche Eingreifen stützt sich auf Grundsätze wie Treu und Glauben sowie die Verhinderung des Rechtsmissbrauchs und Gesetzesumgehung, wie im spanischen Zivilgesetzbuch vorgesehen. Gleichwohl handelt es sich beim Durchgriff um eine außergewöhnliche und restriktiv anzuwendende Maßnahme,

die nur dann zulässig ist, wenn nachgewiesen werden kann, dass das juristische Konstrukt in böser Absicht und allein zum Zweck der Umgehung rechtlicher Verpflichtungen errichtet wurde.

Generell teilt also der Oberste Gerichtshof (Tribunal Supremo) die Auffassung der Steuerverwaltung, allerdings mit gewissen Vorbehalten. Daraus lassen sich Schlussfolgerungen ableiten:

- a. Ob ein Missbrauch durch das Zwischenschalten der SL vorliegt, hängt davon ab, ob die Gesellschaft über eigene personelle und sachliche Mittel verfügt. Ist dies der Fall, so ist grundsätzlich die Bewertung der verbundenen Geschäftsvorfälle zu berichtigen. Nur wenn die Gesellschaft ausschließlich zur Erlangung steuerlicher Vorteile besteht, kann der Missbrauchstatbestand des Art. 15 LGT zur Anwendung kommen und die Simulation nach Art. 16 verdrängt werden.
- b. Die „Sicherer-Hafen-Regel“ aus Art. 18.6 des Körperschaftsteuergesetzes setzt voraus, dass die Gesellschaft über eigene personelle und sachliche Mittel verfügt, die einen Mehrwert für die erbrachten Dienstleistungen darstellen.

5.4.2 Das aus diesen Urteilen abzuleitende Sanktionssystem ist unklar, besonders hinsichtlich der Definition der Simulation, da diese häufig weniger die Verschleierung als vielmehr die Diskussion über die Existenz und die Relevanz der personellen und sachlichen Mittel der Gesellschaft betrifft.

6. Fazit Zwischenschalten SL: Die Gründung und Nutzung einer spanischen Kapitalgesellschaft zur Erbringung unternehmerischer oder freiberuflicher Tätigkeiten bedarf intensiver steuerlicher Beratung, um die oben aufgezeigten Folgen und erheblichen finanziellen Konsequenzen zu vermeiden. Steuerprüfungen im Rahmen solcher Konstruktionen können zu Bescheiden mit bedeutenden Sanktionen führen. Die Aufdeckung solcher Strukturen hat die spanische Finanzbehörde seit 2023 auf ihre Kontrollpläne gesetzt.

B. Simulation von Gesellschafterdarlehen und deren steuerliche Behandlung in Spanien - Aktuelle Rechtsprechung und praktische Hinweise

I. Einführung und rechtliche Grundlagen

Gesellschafterdarlehen sind in Spanien eine häufige Finanzierungsform, bei der ein Gesellschafter einer Gesellschaft Mittel als Darlehen zur Verfügung stellt. Diese Darlehen können in der Buchhaltung der Gesellschaft auf Konten wie „551 – Cuenta corriente con socios y administradores“ oder „171 – Otras deudas a largo plazo“ erfasst werden, was die Anerkennung eines Kreditverhältnisses zwischen Gesellschafter und Gesellschaft dokumentiert.

1. Damit ein solches Darlehen steuerlich und buchhalterisch anerkannt wird, muss die Realität des Vertragsverhältnisses nachgewiesen werden. Dies umfasst insbesondere:

- eine formale Dokumentation des Darlehens, idealerweise in schriftlicher Form, wenn möglich öffentlich beurkundet (z.B. als Vertrag oder Urkunde),
- die fristgerechte Vorlage der Autoliquidation für die Steuer auf Vermögensübertragungen und beurkundete Rechtsakte („Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ITPAJD“), auch wenn diese Steuer in der Regel befreit ist,
- marktübliche Verzinsung des Darlehens sowie Rückzahlungen, die mit den üblichen Konditionen zwischen unabhängigen Dritten vergleichbar sind.

Fehlen diese Nachweise oder entsprechen die Umstände nicht den Marktkonditionen, kann die Finanzverwaltung oder ein Prüfer das Darlehen als simuliert einstufen. Dies hat weitreichende Konsequenzen, da in der Folge die vermeintlichen Darlehensbeträge steuerlich nicht als Verbindlichkeiten, sondern als verdeckte Einlagen oder sogar als Spenden bzw. Zuwendungen („liberalidades“) gewertet werden.

2. Konsequenzen einer Nichtanerkennung des Gesellschafterdarlehens

Wird ein Darlehen als simuliert eingestuft, erfolgt häufig eine steuerliche Umqualifikation als Schenkung bzw. Einlage in das Eigenkapital der Gesellschaft. Gemäß der 18. Bewertungsnorm des spanischen Plan General Contable (PGC) gelten solche Einlagen als nicht rückzahlbare Zuschüsse und werden direkt in das Eigenkapital eingebucht. Diese Umwandlung bewirkt, dass die Gesellschaft keine Verbindlichkeiten mehr ausweist und keine Darlehenszinsen als Betriebsausgaben geltend machen kann.

Besonders relevant ist, dass bei einem Gesellschafterdarlehen, das als erlassen gilt (d.h. der Gesellschafter verzichtet auf Rückzahlung), nur die Beträge, die über die Beteiligung am Eigenkapital hinausgehen, als zu versteuernder Ertrag bei der Gesellschaft angesehen werden.

3. Aktuelle Rechtsprechung der Audiencia Nacional (Urteil vom 30.09.2024)

Das Urteil der Audiencia Nacional vom 30. September 2024 hat die steuerliche Behandlung von angeblichen Gesellschafterdarlehen, die als simuliert angesehen wurden, neu bewertet. Die entscheidenden Punkte sind:

- Die Audiencia Nacional bestätigte eine steuerliche Nachprüfung, die die Existenz des Darlehens infrage stellte und es als simuliert einstuft.
- Daraus folgt, dass die eingezahlten Beträge nicht als Darlehen, sondern als „liberalidades“ (freiwillige Zuwendungen, Spenden) behandelt werden.
- Diese Einstufung zieht eine vollständige steuerliche Rückabwicklung der ursprünglichen Buchungen nach sich, mit dem Ergebnis, dass die Beträge als Einnahmen zu erfassen sind.
- Die Entscheidung widerspricht damit bisheriger Praxis und Verwaltungsauffassungen, wonach derartige Einlagen zumindest anteilig dem Eigenkapital zugeordnet werden konnten, sofern entsprechende Dokumentation vorlag.
- Die Entscheidung macht deutlich, dass auch Spenden und Einlagen durch Gesellschafter sorgfältig dokumentiert werden müssen, etwa durch formale Beschlüsse und Eintragung im Handelsregister.

Interessant ist, dass das Urteil nicht explizit auf einen Alleingesellschafter Bezug nimmt, sondern auch Situationen umfasst, in denen ein Gesellschafter zwar nicht Alleininhaber ist, aber Zahlungen leistet, die nicht seiner Kapitalbeteiligung entsprechen. In solchen Fällen kann der übersteigende Teil als steuerpflichtiger Ertrag betrachtet werden.

4. Praktische Empfehlungen für Unternehmen

Aus den dargestellten Ausführungen und der Rechtsprechung ergeben sich folgende Empfehlungen:

- **Sorgfältige Dokumentation:** Jede finanzielle Mittelbereitstellung eines Gesellschafters an die Gesellschaft muss schriftlich fixiert werden. Idealerweise sollte das Darlehen durch einen Vertrag geregelt und gegebenenfalls öffentlich beurkundet sein.

- **Fristgerechte Steuererklärungen:** Die Anmeldung der Operation im Rahmen der ITPAJD-Steuer (auch wenn befreit) ist ein wichtiges Indiz für die Ernsthaftigkeit der Vereinbarung.
- **Marktkonforme Konditionen:** Verzinsung und Rückzahlungsmodalitäten sollten den Bedingungen zwischen unabhängigen Dritten entsprechen.
- **Buchhalterische Abbildung:** Die Mittel sollten korrekt entweder als Darlehen (Verbindlichkeit) oder als Einlage im Eigenkapital verbucht werden, entsprechend der tatsächlichen Vertragslage.
- **Prüfung bei Darlehensverzicht:** Wird das Darlehen erlassen, ist der steuerliche Effekt genau zu analysieren, um eine Überbesteuerung zu vermeiden.

5. Fazit: Simulation Gesellschafterdarlehen

Gesellschafterdarlehen sind eine flexible Finanzierungsquelle, an deren steuerliche Anerkennung in Spanien klare Anforderungen gestellt werden. Das Urteil der Audiencia Nacional vom 30.09.2024 macht deutlich, dass die Finanzverwaltung und die Gerichte eine strenge Prüfung vornehmen und den Nachweis der „Realität der vertraglichen Vereinbarung“ verlangen. Fehlt der Nachweis der echten Darlehensbeziehung, droht eine Umqualifikation in steuerlich relevante Spenden oder Einlagen mit zum Teil erheblichen steuerlichen Konsequenzen.

Unternehmen und Gesellschafter sollten daher die Formalitäten nicht vernachlässigen und bei der Gestaltung von Darlehensverträgen und Einlagen entsprechend berücksichtigen, um Rechtsunsicherheiten und mögliche Nachzahlungen zu vermeiden.

C. Aktuelles - Lex Beckham

I. Art. 93 des spanischen Einkommensteuergesetzes

Die steuerliche Sonderregelung des Art. 93 des spanischen Einkommensteuergesetzes gewährt unter bestimmten und engen Voraussetzungen eine steuerliche Vorzugsbehandlung für Personen die ihren Wohnsitz in das spanische Hoheitsgebiet verlegen, um dort einen Arbeitsvertrag abzuschließen, eine Geschäftsführerstellung anzutreten, eine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, die als unternehmerische Tätigkeit iSd Artikel 70 des Gesetzes 14/2013 eingestuft wird oder solche einer hochqualifizierten Fachkraft, die Dienstleistungen für Unternehmen erbringt, Ausbildungs- oder FuEul-Tätigkeiten durchführt.

II. Verordnung zu Art. 93

Ein Problem, das im Einzelfall zu Prüfungsverfahren nach Erteilung des Sonderstatus und ggf. zur nachträglichen Aberkennung im Einzelfall hat führen können, resultiert ggf. aus dem Umstand, dass Artikel 93 des spanischen Einkommensteuergesetzes durch die dritte Schlussbestimmung des Gesetzes 28/2022 vom 21. Dezember über die Förderung des Ökosystems für Start-Ups (BOE vom 22. Dezember, Start-Up-Gesetz) mit Wirkung zum 01. Januar 2023 geändert wurde und erhebliche Änderungen im so genannten „Lex Beckham“ vorgenommen wurden, die Umsetzung dieses Gesetzes allerdings erst mit Verzögerung von einem Jahr, mittels Königlichem Dekret 1008/2023 vom 5. Dezember erfolgte.

Das Dekret änderte den Inhalt des Kapitel I in Artikel 113 bis 120 des Titels VIII (Spezielle Regimes) der Verordnung über die Einkommensteuer der natürlichen Personen (Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, **RIRPF**) und trat gemäß der Ersten Schlussbestimmung des „**Real Decreto 1008/2023**“ erst in 2024 in Kraft.

Das heißt, nach einem ganzen Jahr der Schwebe erst wurden detaillierte **Regelungen, Maßnahmen und technische Vorschriften zu den Spezialregelungen für Beckham-Steuerpflichtige** für die Finanzverwaltung mittels königlichem Dekret festgelegt. Ein solches Dekret das vom spanischen König auf Vorschlag des Ministerrats erlassen wird, ist einem Gesetz nachrangig und dient der Ausführung oder Ergänzung eines Gesetzes.

Parallel dazu wurden mit der Ministerialverordnung HFP/1338/2023 vom 13. Dezember die Steuerformulare Modelle 151 und 149 an diese Änderungen angepasst.

Das neue Formular 151 konnte erstmals in 2024 verwendet werden.

Das Modell 149 dient der Mitteilung der Option auf das Regime, der Verzichtserklärung, des Ausschlusses oder des Endes der Entsendung.

Aufgrund der erheblichen Verzögerung bestimmt die Verordnung zum Lex Beckham eine Übergangsregelung für die Ausübung der Option des Regimes.

III. Entsandte iSd. Gesetzes

In Abschnitt Sechs wurde der Titel von des Ersten Kapitels im Titel VIII geändert und lautet nun in deutscher Übersetzung wie folgt:

„Spezielles Steuerregime für Arbeitnehmer, Fachkräfte, Unternehmer und auf spanisches Territorium entsandte Investoren.“

Der Begriff für „Entsandte“, im Spanischen „Desplazados“, ist insoweit unklar, da er im Deutschen im Wesentlichen die Entsendung eines Mitarbeiters auf Veranlassung des Arbeitgebers umfasst. Gemeint ist in der Verordnung allerdings der zeitlich begrenzte Einsatz von im Gesetz bestimmten, aus dem Ausland zugezogenen natürlichen Personen auf spanischem Territorium.

In Abschnitt Sieben wird Artikel 113 geändert und bestimmt den Anwendungsbereich für natürliche Personen, die aufgrund ihres Zuzugs nach Spanien ihren steuerlichen Aufenthalt in Spanien erwerben und die Option wahrnehmen, gemäß der Einkommensteuer für Beschränkt Steuerpflichtige besteuert zu werden, während sie weiterhin die Eigenschaft als Steuerpflichtige der Einkommensteuer für natürliche Personen behalten.

Abschnitt Sieben führt auch zum besonderen Interesse Spaniens bestimmter qualifizierter unternehmerischer Tätigkeiten und zum Erfordernis eines positiven Berichts der [ENISA](#) aus.

Abschnitt Acht ändert Artikel 114 und bestimmt den Inhalt des besonderen Steuerregimes für die Einkommensteuer von Beschränkt Steuerpflichtigen.

Abschnitt Neun ändert Artikel 115 und trifft Bestimmungen zur Dauer des Spezialregimes.

Abschnitt Elf ändert Artikel 117 und regelt den Verzicht auf das Regime,

Abschnitt Zwölf in Artikel 118 den Ausschluss aus dem Regime.

Abschnitt Dreizehn ändert Artikel 119 und trifft Bestimmungen zu Mitteilungen an die Steuerverwaltung und zum Nachweis des Regimes.

IV. Das besondere Interesse des spanischen Staats - ENISA

Abschnitt Sieben führt wie oben ausgeführt auch zum besonderen Interesse Spaniens bestimmter qualifizierter unternehmerischer Tätigkeiten und zum Erfordernis eines positiven Berichts der [ENISA](#) aus.

Der vorgenannte positive Bericht der ENISA hat erhebliche Bedeutung im Rahmen bestimmter dbzgl. Antragsverfahren.

ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.A.) ist ein spanisches öffentliches Unternehmen, das, über die Generaldirektion für Industrie und kleine und mittlere Unternehmen, dem Ministerium für Industrie und Tourismus untersteht. Die Hauptfunktionen bestehen in der Finanzierung tragfähiger und innovativer Unternehmensprojekte und der Bereitstellung von Finanzierungslinien durch Darlehen für Start-ups, KMU und Unternehmer. Besonders gefördert werden Innovation, Wachstum und die Modernisierung des spanischen Unternehmenssektors.

Besondere Ziele sind die Förderung innovativen Unternehmertums und Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen in der Gründungs- oder Expansionsphase. Der Beitrag ENISA Spanien erläutert zu den Voraussetzungen der Zertifizierung.

Das **spanische** Startup-Gesetz 28/2022 bietet jungen, innovativen Unternehmen zahlreiche Vorteile, darunter Steuererleichterungen, vereinfachte Verwaltungsprozesse und verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten. Damit ein Unternehmen als Startup anerkannt wird, ist eine offizielle Zertifizierung durch ENISA erforderlich.

Gleiches gilt für bestimmte unternehmerische Tätigkeiten die grds. im Rahmen der Anwendung des Sonderstatus der „Beckham-Regelung“ zum Ausschluss führen würden, allerdings dann zu der Möglichkeit der Anwendung des Spezialstatus führen können, soweit es sich im Rahmen der neuen Regelung (Art. 93, 1. b) 3°) um Aktivitäten iSd. Art. 70 des Gesetzes 14/2013 vom 27.11. handelt.

Voraussetzungen sind:

1. Registrierung im ENISA-Kundenportal

Der erste Schritt besteht darin, sich im Enisa-Kundenportal anzumelden oder einen neuen Account zu erstellen.

Sobald das Formular aufgerufen wurde, beginnt der eigentliche Antragsprozess.

2. Daten des Antragstellers

In diesem Abschnitt müssen die Daten des gesetzlichen Vertreters des Unternehmens sowie einer weiteren Kontaktperson angegeben werden. Diese Daten sind erforderlich, um die Verantwortlichkeiten klar zu definieren und eine schnelle Kommunikation zu gewährleisten.

Angaben zum gesetzlichen Vertreter:

- Vollständiger Name (Vor- und Nachname)
- DNI/NIE (spanische Identifikationsnummer für Ausländer)
- Geschäftliche e-Mail-Adresse
- Notariell beglaubigte Vollmacht, falls der Antrag von einem Dritten eingereicht wird
- **Erforderliche Unternehmensdokumente:**
 - Steueridentifikationsnummer (NIF): Bestätigung der steuerlichen Registrierung
 - Bescheinigung über steuerliche Unbedenklichkeit: Nachweis, dass das Unternehmen keine offenen Steuerschulden hat
 - Bescheinigung über Sozialversicherungsabgaben: Belegt, dass das Unternehmen seinen Sozialversicherungspflichten nachkommt
 - Jahresabschluss des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres

Falls das Unternehmen noch keine Jahresabschlüsse vorlegen kann, muss die entsprechende Checkbox markiert werden. In diesem Fall müssen die Gründungsurkunde sowie der Handelsregistrauszug als Ersatzdokumente hochgeladen werden.

3. Unternehmensgruppe

Falls das Unternehmen zu einer Unternehmensgruppe gehört, also von einer anderen Gesellschaft kontrolliert wird oder Gesellschafter hat, die juristische Personen sind, sind weitere Dokumente erforderlich:

- NIF der Muttergesellschaft
- Organisationsstruktur: Eine detaillierte Darstellung der Unternehmensgruppe, aus der die Hierarchien und Beteiligungsverhältnisse hervorgehen

Falls das Unternehmen **keiner Gruppe** angehört, kann dieser Abschnitt übersprungen und direkt mit dem nächsten Schritt fortgefahren werden.

4. Geschäftsplan

Ein zentraler Bestandteil der Zertifizierung ist die Prüfung des Geschäftsmodells. Hierbei werden verschiedene Kriterien bewertet, um zu bestätigen, dass das Unternehmen tatsächlich als innovatives Startup eingestuft werden kann.

ENISA-Darlehen

Falls das Unternehmen in den letzten drei Jahren bereits ein Darlehen über ENISA in Spanien erhalten hat, entfällt die separate Bewertung der Innovationskraft und Skalierbarkeit. In diesem Fall gelten die vorherigen Prüfungen durch ENISA als ausreichend.

Innovationsgrad

Ein Unternehmen gilt als innovativ, wenn es eine neuartige Lösung oder Technologie entwickelt und einsetzt. Die folgenden Aspekte können den Innovationsgrad belegen:

- Nutzung eigener Technologien oder **Entwicklung neuer Produkte/ Dienstleistungen**
- **Patente, Marken oder Urheberrechte**
- **Unterscheidungsmerkmale** gegenüber bestehenden Angeboten auf dem Markt
- **Erhaltene Innovationspreise oder Förderungen**

Skalierbarkeit

Ein weiteres wesentliches Kriterium ist die **Skalierbarkeit des Geschäftsmodells**. Dabei werden folgende Aspekte geprüft:

- **Marktpotenzial:** Größe und Wachstum des Zielmarktes
- **Wettbewerbsfähigkeit:** Differenzierung von Mitbewerbern und langfristige Erfolgsaussichten
- **Lebenszyklus des Unternehmens:** Entwicklungsstand und Wachstumsperspektiven
- **Managementteam:** Erfahrung, Qualifikation und Führungsstruktur
- **Gesellschafter, Lieferanten und Kunden:** Unternehmensnetzwerk und strategische Partnerschaften

Ein gut strukturierter Geschäftsplan mit klar definierten Zielen, Finanzprognosen und Wachstumspotenzial verbessert die Chancen auf

eine erfolgreiche Zertifizierung erheblich.

5. Vorteile der Startup-Zertifizierung

Die Zertifizierung als Startup bringt bedeutende Vorteile mit sich:

- **Steuererleichterungen:** Ermäßigter Körperschaftsteuersatz von 15 % statt 25 % in den ersten vier Jahren mit Gewinn
- **Bürokratieabbau:** Weniger Verwaltungsaufwand für Startups
- **Bessere Finanzierungsmöglichkeiten:** Erhöhter Zugang zu staatlichen Fördermitteln und privaten Investoren
- **Mitarbeiterbeteiligung:** Verbesserte steuerliche Bedingungen für Stock Options

V. Beckham-Gesetz – Nachteile

Die Vorschriften der früheren, wie auch der neueren Beckham-Regelung und ihrer Verordnung werden streng und nicht immer einheitlich ausgelegt, was zu Rechtsunsicherheiten bei der Anwendung dieser relativ komplexen Regelung führen kann.

Ebenso wie in den früheren Gesetzesfassungen gehen mit dem Vorteil des günstigen Steuersatzes für höhere Arbeitseinkommen, der nicht zu versteuernden Einkünfte aus Kapital- oder Immobilienvermögen in anderen Ländern und ggf. der Vermeidung der Vermögensteuer, auch gewisse Nachteile einher.

So gibt es im Rahmen der Beckham-Regelung keinen Abzug von Ausgaben oder anderen Vergünstigungen, die im Rahmen der Steuererklärung für steuerlich Ansässige, mithin unbeschränkt in Spanien Steuerpflichtige gelten, wie z. B. die Befreiungen für den Hauptwohnsitz, die Vergünstigungen für Familien mit minderjährigen Kindern oder älteren Menschen, Elterngeld, Beiträge zu Rentenplänen, die Vergünstigung für Mieteinnahmen aus einer in Spanien gelegenen Immobilie oder der Abzug von Ausgaben im Zusammenhang mit einer Behinderung.

Ein weiterer Nachteil kann darin bestehen, dass einige Doppelbesteuerungsabkommen, in Fällen, in denen der Steuerpflichtige den Beckham-Status wählt, die Anwendbarkeit des DBA und damit eine Freistellung oder Anrechnung von im anderen Staat auf dort erzielte Einkünfte beglichenen Steuern ausschließen, da dieser Status die realiter vorliegende steuerliche Ansässigkeit durch die Fiktion des Status eines Steuerausländers beseitigt, so dass diese DBA den in den Abkommen grds. geregelten Schutz nicht gewähren.

Sofern die Unterschiede zur unbeschränkten Steuerpflicht im Ergebnis nicht erheblich sind, kann daher zu empfehlen sein, diese zu wählen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei Versteuerung gemäß der Sonderregelung auch kein Anspruch auf die Steuerbefreiung für Abfindungen im Kündigungsfall besteht. Die ansonsten mögliche Steuerbefreiung gemäß Art. 7e des EinkStG bis zum Höchstbetrag von 180.000 Euro oder die vorgesehene Reduzierung für „unregelmäßige Einkünfte“ von 30 % würde nicht greifen, so dass vollständig mit dem festen Steuersatz von 24% versteuert werden muss. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob die Abfindung ggf. von der Besteuerung ausgenommen ist, da sie aus einer früheren Tätigkeit vor Entsendung nach Spanien stammt, oder u. U. der Verzicht auf die Besteuerung im Sonderregime angeraten ist.

Ebenso von Nachteil ist, dass die nach der Sonderregelung versteuernde Person nicht von der Erbschaft- und Schenkungsteuer

befreit ist. Das heißt alle Vermögenswerte und Rechte, die durch Erbschaft oder Schenkung erworben werden, sind nach den Regeln der Gebietsautonomie der Ansässigkeit in Spanien zu versteuern, selbst wenn diese aus dem Ausland stammen. Gleiches kann für Veräußerungen gelten.

Kapitalgewinne werden wie bei jedem anderen Steuerinländer besteuert (19 – 28 %), sofern sie aus Vermögenswerten stammen, die in Spanien belegen sind, oder als aus spanischen Quellen stammende Einkünfte gelten. Sofern Kapitalgewinne aus Vermögenswerten stammen, die sich außerhalb Spaniens befinden, unterliegen diese also nicht der Besteuerung in Spanien im Rahmen des Beckham-Regimes, da der Steuerpflichtige für im Ausland erzielte Einkünfte als steuerlicher Nichtansässiger gilt.

Zu beachten ist auch der Wohnort und die Arbeitsstätte eines Steuerpflichtigen. Dies, da die spanischen Gebietsautonomien unterschiedliche Regelungen im Rahmen der Einkommensteuer treffen können.

So kann sich bspw. die Steuergesetzgebung im Baskenland deutlich unterscheiden. **Bizkaia verfügt – ebenso wie Álava und Gipuzkoa – über eigene Steuerhoheiten, da es zu den historischen Territorien des Baskenlandes gehört.** Das bedeutet, Bizkaia ist befugt, den Großteil der Steuern in seinem Gebiet selbst zu gesetzlich regeln, zu verwalten, zu erheben, zu prüfen und abzurechnen.

Diese steuerlichen Zuständigkeiten sind im Rahmen des Wirtschaftsabkommens (Concierto Económico) geregelt – einem bilateralen Abkommen zwischen dem spanischen Staat und dem Baskenland.

Einerseits erhöht die forale steuerliche Regelung den Zeitraum der Anwendbarkeit des Sonderstatus auf 10 Jahre, andererseits ist eine der zentralen Voraussetzungen, dass das beschäftigende Unternehmen seinen Sitz in Spanien hat oder über eine Betriebsstätte dort verfügt.

Damit ist die Beckham-Regelung für aus dem home-office im Wege der Fernarbeit tätige Mitarbeiter ausländischer Unternehmen dort nicht anwendbar, sofern diese keine Betriebsstätte in Spanien unterhalten, sondern lediglich über eine Lohnsteuernummer in Spanien zu rein formalen Zwecken für die Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen und IRPF-Abzügen verfügen.

Aspekt	Artikel 93 LIRPF (staatliches Regime)	Artikel 56.bis NF 13/2013 (Bizkaia)
Anwendungsbereich	Gesamtes spanisches Staatsgebiet (ausgenommen Baskenland und Navarra)	Ausschließlich im historischen Territorium Bizkaia anwendbar
Dauer des Regimes	Jahr des Wohnsitzwechsels + 5 Jahre (insgesamt 6 Jahre)	Jahr des Wohnsitzwechsels + 10 Jahre (insgesamt 11 Jahre)
Voraufenthalt in Spanien	Keine steuerliche Ansässigkeit in Spanien in den vorangegangenen 5 Steuerjahren	Gleichlautend: keine steuerliche Ansässigkeit in den letzten 5 Jahren

Aspekt	Artikel 93 LIRPF (staatliches Regime)	Artikel 56.bis NF 13/2013 (Bizkaia)
Grund für den Zuzug	Arbeitnehmerverhältnis, wirtschaftliche Tätigkeit, Investition oder Unternehmertum	Qualifizierte Tätigkeit im Rahmen eines Arbeitsvertrags oder als Selbstständiger/Unternehmer
Art des Arbeitsverhältnisses	Arbeitnehmer, Selbstständige, Unternehmer, Investoren	Ursprünglich nur Arbeitnehmer; Erweiterung auf Selbstständige/Unternehmer bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen
Tätigkeitsbereich	Kein konkreter Höchstanteil der im Ausland ausgeübten Tätigkeit vorgesehen	Bis zu 15 % (bzw. 30 % bei verbundenen Unternehmen) der Tätigkeit darf im Ausland erfolgen
Begünstigtes Unternehmen	Es ist nicht erforderlich, dass der Arbeitgeber in Spanien ansässig ist	Ja: Tätigkeit muss grundsätzlich für ein Unternehmen oder eine Betriebsstätte in Spanien erfolgen (Ausnahmen für Selbstständige möglich)
Besteuerung	Besteuerung als Nichtansässiger gemäß IRNR: • 24 % bis 600.000 € • 47 % ab 600.000 €	Besteuerung als Ansässiger, jedoch mit spezifischen Steuerbefreiungen und Abzugsmöglichkeiten
Bemessungsgrundlage	Nur in Spanien erzielte Einkünfte unterliegen der Besteuerung	Welteinkommen (mit Steuerbefreiungen für bestimmte ausländische Einkünfte)
Steuerbefreiung auf Einkünfte	Keine Steuerbefreiungen; Anwendung eines festen Steuersatzes	Steuerbefreiung von 30 % auf den Bruttoarbeitslohn bzw. die Bruttoeinkünfte aus wirtschaftlicher Tätigkeit
Zusätzliche abzugsfähige Ausgaben	Keine zusätzlichen abzugsfähigen Aufwendungen aufgrund der Entsendung	Abzugsfähig sind zusätzlich bis zu 20 % der Aufwendungen für den Ortswechsel
Ausländische Einkünfte	Nicht steuerpflichtig, sofern sie nicht aus spanischer Quelle stammen	Steuerfrei, sofern: • Sie außerhalb Spaniens erzielt wurden und • Sie im Ausland versteuert wurden (nicht in Steueroasen)
Antragstellung	Antrag erforderlich	Gilt als gestellt mit Abgabe der Einkommensteuererklärung (IRPF)

D. Gewinnabführungsvertrag Spanien – Deutschland

I. Zulässigkeit von Gewinnabführungsverträgen zwischen einer deutschen GmbH und einer spanischen S.L.

Die Frage, der Zulässigkeit eines Gewinnabführungsvertrags (GAV) zwischen einer deutschen und einer spanischen Kapitalgesellschaft wird tatsächlich von in beiden Ländern tätigen Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Spanien aufgeworfen.

Während ein solcher Vertrag in Deutschland eine gängige Praxis zur steuerlichen Konsolidierung innerhalb von Konzernstrukturen darstellt, sind die rechtlichen und steuerlichen Bedingungen in Spanien deutlich anders. In diesem Beitrag wird aufgezeigt, weshalb ein solcher Gewinnabführungsvertrag bei einem grenzüberschreitenden gesellschaftsrechtlichen Sachverhalt zwischen Deutschland und Spanien unzulässig ist.

Definition Gewinnabführungsvertrag

Ein Gewinnabführungsvertrag (GAV) ist ein Unternehmensvertrag im Sinne der § 291ff. AktG. Er ist ein Vertrag zwischen einer Muttergesellschaft und einer Tochtergesellschaft, durch den sich die Tochtergesellschaft verpflichtet, ihren Gesamtgewinn an die Muttergesellschaft abzuführen. Dieser Vertrag ist im deutschen Aktiengesetz (§§ 291 ff. AktG) geregelt und wird hauptsächlich in Konzernstrukturen genutzt, um steuerliche Vorteile zu erzielen. Der GAV hat eine doppelte Wirkung: Zum einen wirkt auch er sich neben einem Beherrschungsvertrag auf die gesellschaftsrechtliche Struktur aus und beeinflusst zum anderen die steuerliche Behandlung der Unternehmensgruppe.

2. Gesellschaftsrechtliche Bedeutung des GAV und Formvorschriften

Gesellschaftsrechtlich gesehen führt der GAV zu einer Vertiefung organisatorischen Verbindung zwischen der Muttergesellschaft und ihrer Tochtergesellschaft, welche durch einen Beherrschungsvertrag herbeigeführt wurde. Der Vertrag ist ein wichtiges Element des Konzernrechts und wird im Handelsregister der beherrschten Gesellschaft eingetragen, wodurch er für Dritte rechtsverbindlich wird. Ein Gewinnabführungsvertrag wird daher wirksam, wenn er in das Handelsregister der beherrschten Gesellschaft (Organgesellschaft) eingetragen wird. Die Eintragung im Handelsregister der herrschenden Gesellschaft (Organträger) ist nicht vorgesehen und auch nicht zulässig.

Ein Gewinnabführungsvertrag muss nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Satz 1 KStG für eine Mindestlaufzeit abgeschlossen werden. Diese Mindestlaufzeit soll sicherstellen, dass die vertragliche Bindung von beiden Seiten ernst genommen wird und nicht aus steuerlichen Gründen kurzfristig wieder aufgelöst wird.

3. Steuerliche Auswirkungen eines GAV

Steuerlich führt der Gewinnabführungsvertrag zu einer Organschaft nach dem Körperschaftsteuergesetz (KStG). Eine Organschaft bedeutet, dass die Muttergesellschaft den gesamten Gewinn der Tochtergesellschaft steuerlich vereinnahmen kann, wodurch die steuerliche Belastung auf Ebene des Konzerns optimiert wird. Gewinne und Verluste innerhalb des Konzerns werden auf konsolidierter Basis besteuert, sodass der Konzern als eine einzige steuerliche Einheit behandelt wird. Dies führt zu einer erheblichen Steuerersparnis; die Verlustvorträge der Tochtergesellschaften können mit den Gewinnen der Muttergesellschaft verrechnet werden.

4. Rechtliche Zulässigkeit eines Gewinnabführungsvertrags zwischen Deutschland und Spanien

a) Grenzüberschreitende Gewinnabführungsverträge – Zulässigkeit

Ein klassischer Gewinnabführungsvertrag nach deutschem Aktienrecht kann nicht grenzüberschreitend zwischen einer deutschen GmbH und einer spanischen Sociedad Limitada (S.L.) abgeschlossen werden. Dies liegt an mehreren rechtlichen und systematischen Differenzen zwischen dem deutschen und dem spanischen Gesellschaftsrecht.

b) Unterschiede im Gesellschaftsrecht

Das deutsche Aktienrecht sieht den Gewinnabführungsvertrag als ein Instrument zur steuerlichen Organschaft vor. Voraussetzung ist, dass beide Gesellschaften im deutschen Handelsregister eingetragen sind und eine Mutter-Tochter-Beziehung aufweisen. Diese Regelung gilt jedoch nur für Gesellschaften, die in Deutschland ansässig sind. Ein Gewinnabführungsvertrag zwischen einer deutschen GmbH und einer spanischen S.L. ist daher allein schon deshalb nicht möglich, da das spanische Gesellschaftsrecht keine entsprechende Regelung kennt.

Im spanischen Recht existiert keine vergleichbare Gewinnabführungsregelung wie im deutschen Aktienrecht. Stattdessen ist das spanische Gesellschaftsrecht auf die Eigenständigkeit von Unternehmen fokussiert, was auch durch den Gläubigerschutz und das Prinzip der Ergebnisverwendung durch Gesellschafterbeschluss gestützt wird. Dies bedeutet, dass eine vertraglich festgelegte Gewinnabführung in dieser Form gegen die grundlegenden Prinzipien des spanischen Gesellschaftsrechts verstoßen würde.

5. Rechtliche Divergenzen zwischen den Ländern

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die unterschiedliche rechtliche Struktur des Konzernrechts in Deutschland und Spanien. Während Deutschland eine institutionalisierte Konzernstruktur kennt, bei der Unternehmen durch Verträge wie einen Beherrschungsvertrag oder den GAV miteinander verbunden sein können, ist Spanien deutlich stärker auf die Eigenständigkeit der Gesellschaften ausgerichtet. Diese Divergenzen zwischen den nationalen Rechten führen dazu, dass ein Gewinnabführungsvertrag im deutschen Sinne aus diesem Grund in Spanien nicht umsetzbar ist.

6. Steuerliche Aspekte: Organschaft und ihre Grenzen

Organschaft in Deutschland

Der Gewinnabführungsvertrag nach deutschem Recht hat nicht nur gesellschaftsrechtliche Auswirkungen, sondern auch tiefgreifende steuerliche Konsequenzen. Eine der wichtigsten steuerlichen Auswirkungen ist die Organschaft, die es einer Muttergesellschaft ermöglicht, die Gewinne und Verluste ihrer Tochtergesellschaften zu konsolidieren. Dies hat mehrere Vorteile für den Konzern:

- Verrechnung von Gewinnen und Verlusten: Verluste einer Tochtergesellschaft können mit den Gewinnen der Muttergesellschaft verrechnet werden, was zu einer Steuerersparnis führen kann.
- Zentralisierte Steuererklärung: Der Konzern gibt eine gemeinsame Steuererklärung ab, die es erleichtert, Steuervorteile zu realisieren.
- Steuerliche Absetzbarkeit von Verlusten: Verluste der Tochtergesellschaft können direkt mit den Gewinnen der Muttergesellschaft verrechnet werden, was die Steuerlast reduziert.

7. Grenzüberschreitende Organschaft

Die steuerliche Organschaft nach deutschem Recht ist jedoch nicht auf grenzüberschreitende Unternehmensstrukturen anwendbar. Das deutsche Steuerrecht setzt voraus, dass sowohl die Muttergesellschaft als auch die Tochtergesellschaft unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland sind. Dies ist bei einer spanischen S.L. nicht der Fall, da sie in Spanien ansässig ist und dort ihre steuerlichen Pflichten erfüllt. Daher kann die deutsche GmbH keine steuerliche Organschaft mit einer spanischen Tochtergesellschaft begründen.

Ein Gewinnabführungsvertrag zwischen einer spanischen SL und ihrer deutschen Muttergesellschaft ist mithin aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen in den Ländern nicht zulässig.



Frank Müller

Rechtsanwalt und Abogado
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für
Steuerrecht (Rechtsanwalt Spanien)
Frankfurt am Main - Barcelona
ra@abogadomueller.net

Alejandro del Campo Zafra, Alejandro del Campo Jiménez

Las novedades y los últimos pronunciamientos sobre la residencia fiscal en España

Del 19 al 21 de junio de 2025 tuvo lugar el XXXIX Congreso Anual de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas, celebrado en el Hotel Cándido de Segovia.

Los abogados de DMS Legal Intelligence, Alejandro del Campo Zafra y su hijo Alejandro del Campo Jiménez, tuvieron el honor de intervenir como ponentes para analizar las novedades y los últimos pronunciamientos sobre la residencia fiscal en España, ofreciendo consejos prácticos sobre la referida materia.

Reproducimos a continuación el contenido de su ponencia conjunta, en la que, tras exponer las “reglas” de la residencia fiscal, de conformidad con la normativa interna española y con los convenios para evitar la doble imposición en aquellos casos en los que se produce un conflicto de residencia entre dos Estados, ofrecieron una serie de consejos prácticos, “jugando” con esas reglas para conseguir ahorros fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el Impuesto sobre el Patrimonio y, finalmente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

LAS DIRECTRICES GENERALES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO 2025

Como cada año, la Agencia Tributaria publicó el Plan de Control Tributario en el que, una vez más, insiste en la existencia de “*conductas extremadamente lesivas para los intereses de la Hacienda Pública relacionadas con la simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español, especialmente en casos de personas físicas, con la principal finalidad de obtener una tributación efectiva inferior a la debida*”.

Además, también tienen en cuenta a todas aquellas personas que, sin ser nacionales españoles, pasan más tiempo en España que en otro país y, sin embargo, siguen declarándose como no residentes a efectos fiscales.

Finalmente, la Agencia Tributaria pone el foco en la simulación de la residencia fiscal entre diferentes Comunidades Autónomas, con la intención de “*aprovecharse indebidamente de una inferior tributación*”.

Y la realidad es que estas directrices se están traduciendo en la práctica en numerosos requerimientos de información realizados a personas con patrimonios relevantes en España por las autoridades con el fin de comprobar y, en su caso, atraer a España la residencia fiscal de esas personas. En esos requerimientos, entre otras cosas, se solicita lo siguiente:

- Escritura de adquisición de cada uno de los inmuebles de los que sea propietario en España, con indicación del uso dado a cada uno. Si están alquilados a terceros (ya sea como vivienda habitual o como vivienda vacacional), contrato de alquiler, y recibos de los años 2022, 2023 y 2024.
- Certificado de residencia fiscal del obligado, cónyuge e hijos menores de edad.
- Si se declara residente fiscal fuera de España, detalle del domicilio de residencia. También del cónyuge e hijos menores de edad. Descripción de la situación en España.
- Identificación de personas residentes en España que dependen del obligado (económicamente, por edad, discapacidad)

- Escrituras de constitución o ampliación de capital de sociedades españolas en las que participe el obligado, cónyuge u otro familiar.
- Recibos de consumo eléctrico de cada uno de los inmuebles en territorio español de los años 2022, 2023 y 2024.

¿QUÉ IMPLICA SER RESIDENTE FISCAL EN ESPAÑA?

Ser considerado residente fiscal en España implica, desde el punto de vista fiscal, estar sujeto a las siguientes normas de tributación:

- Tributar en el **IRPF** no solo por las rentas de fuente española, sino también por las rentas que se obtengan en el resto del mundo (sin perjuicio de poder aplicar los mecanismos para evitar la doble imposición que se prevén en los diferentes convenios, así como los de la propia Ley del IRPF), a unos tipos del 19% al 50% para rentas generales y a unos tipos del 19% al 30% para rentas del ahorro (intereses, dividendos, ganancias de patrimonio).
- Tributar en el **Impuesto sobre el Patrimonio** (o en el novedoso Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas) por todos los bienes y derechos de los que el contribuyente sea titular, aunque los mismos estén situados en el extranjero, con tarifas que alcanzan el 3,50%, aunque pudiendo aplicar mínimos exentos y bonificaciones que varían en función de la CCAA, lo que supone no tener que pagar por los primeros 500.000 euros o hasta los primeros 3.700.000 euros.
- Tributar en el **Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones** por herencias y donaciones mundiales, esto es, sin perjuicio del lugar en el que se encuentren los bienes que se adquieren y la residencia del causante o donante. Aunque la tributación pueda ser muy baja o incluso nula en herencias entre familiares directos, la realidad es que siguen existiendo importantes diferencias entre Comunidades Autónomas que deben ser tenidas en cuenta.
- Presentar el **modelo 720 y/o modelo 721**, que consiste en una declaración informativa sobre los bienes y derechos situados en el extranjero de los que el contribuyente es titular (cuentas bancarias, valores, inmuebles, criptomonedas, etc.).

No cabe duda de que estas implicaciones deben ser tenidas en cuenta, ya que dependiendo de las rentas que se obtengan en el extranjero o el patrimonio del que se sea titular fuera de España, adquirir la condición de residente fiscal en España puede ser extremadamente gravoso, a nivel impositivo.

¿QUÉ VENTAJAS TIENE NO SER RESIDENTE FISCAL EN ESPAÑA?

A diferencia de lo que sucede al ser residente fiscal en España, los no residentes tributan de la siguiente manera en nuestro país:

- Tributar en el **Impuesto sobre la Renta de No Residentes** solamente por aquellas rentas que se entiendan obtenidas en territorio español. Por ejemplo, a un tipo fijo del 19% para ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de inmuebles situados en España, con independencia de que la persona viva o no en un Estado de la UE o del EEE, ya que por el alquiler de inmuebles situados en territorio español tributan a un tipo del 19% aquellos que residen en un país de la UE o del EEE, y a un tipo del 24% los extracomunitarios.

- Tributar en el **Impuesto sobre el Patrimonio** (o en el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas) solamente por los bienes y derechos que se encuentren situados en España, sin que los bienes y derechos situados en el extranjero se deban tener en cuenta. Además, cabe destacar que los no residentes tienen derecho a aplicar la normativa de la CCAA en la que radique el mayor valor de sus bienes en España.
- Tributar en el **Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones** solamente por aquellas herencias y donaciones en las que se reciban bienes situados en territorio español. Además, los no residentes tienen derecho a aplicar la normativa de la CCAA con la que exista determinado punto de conexión, pueden aprovecharse de importantes beneficios.

POSIBLE ALTERNATIVA: LA LEY BECKHAM

Sin perjuicio de todo lo anterior, el artículo 93 de la Ley del IRPF contempla un régimen fiscal especial, aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español; comúnmente conocido como Ley Beckham.

Los dos requisitos más importantes para poder acogerse a este beneficioso régimen son dos: (i) no haber sido residente en España durante los 5 años anteriores, y (ii) desplazarse a España como consecuencia de un contrato de trabajo, por la adquisición de la condición de administrador de una entidad, realizar una actividad calificada como emprendedora o como profesional altamente cualificado.

Las principales ventajas que tienen este régimen fiscal especial son las siguientes:

- Tributar en el **IRPF** solamente por las rentas obtenidas en España (menos las rentas del trabajo y de actividades económicas, que sí se incluyen las obtenidas en el extranjero). Los tipos que se aplican son: para rentas generales, del 24% los primeros 600.000 euros y del 47% a partir de dicha cantidad; para rentas del ahorro, una escala que va del 19% al 30%.
- Tributar en el **Impuesto sobre el Patrimonio** (o en el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas) solamente por los bienes y derechos que se encuentren situados en España, sin que los bienes y derechos situados en el extranjero se tengan en cuenta.
- Los acogidos a la Ley Beckham no están obligados a presentar los **modelos 720 y 721**.

OJO: en el **Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones** se tributará como el resto de residentes en España, esto es, por herencias y donaciones mundiales.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que este régimen fiscal especial es aplicable durante el ejercicio en el que se viene a España más otros cinco y que, para poder acogerse, deben cumplirse una serie de requisitos formales y con determinados plazos.

LA REGULACIÓN DE LA RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA: LA LEY DEL IRPF

Establece el artículo 9 de la Ley del IRPF que una persona tiene su residencia habitual en España si permanece en territorio español durante más de 183 días de un año natural o si radica en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Además, se establece una presunción por la cual se considera que una persona tiene su residencia en España cuando, de acuerdo con

los criterios anteriores, resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél. Esta presunción admite prueba en contrario, por ejemplo, aportando un certificado de residencia fiscal en otro país.

Tanto la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio como la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se remiten a la Ley del IRPF en lo que a la determinación de la residencia en España se refiere. Sin embargo, en la Ley del ISD existe una particularidad que debe ser tenida en cuenta, que dispone que la determinación de la residencia habitual se estará a lo dispuesto en las normas del IRPF, computándose, en su caso, los días de residencia exigidos con relación a los trescientos sesenta y cinco anteriores al del devengo del Impuesto (y no del año natural).

Tras haber expuesto la normativa por la cual una persona puede ser considerada como residente en España, a efectos fiscales, se recogen toda una serie de recientes sentencias y resoluciones de diferentes tribunales que arrojan luz sobre la interpretación de los ya mencionados requisitos (la permanencia en España, el centro de intereses económicos y la presunción familiar que admite prueba en contrario).

LA VALIDEZ DE LOS CERTIFICADOS PARA ACREDITAR LA RESIDENCIA FISCAL EN OTRO ESTADO

A continuación, se citan dos recientes sentencias del Tribunal Supremo en la que el citado tribunal establece que las autoridades fiscales españolas no están habilitadas para cuestionar un certificado de residencia que una determinada persona aporta de otro Estado, siempre que ese certificado se emita expresamente a los efectos de lo establecido en el convenio para evitar la doble imposición que tenga suscrito con España.

En esos casos, en los que el contribuyente aporta un certificado de residencia en otro país, la Agencia Tributaria española debe aplicar las reglas de desempate que contemplan los convenios para decidir sobre la residencia fiscal en uno u otro Estado, sin que pueda ignorar ese certificado y no aplicar las referidas reglas de desempate.

CONFLICTO DE DOBLE RESIDENCIA: CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN

Como decíamos, sucede en muchas ocasiones que una determinada persona es considerada residente fiscal en España de conformidad con la normativa interna española (ya sea por permanecer más de 183 días al año en territorio español o por tener en nuestro país el centro de sus intereses económicos), pero que también tiene la residencia fiscal en otro país, por disponer de un certificado de residencia que así lo establece.

En esos casos, se produce un conflicto de doble residencia que debe ser resuelto aplicando las normas de desempate que vienen enumeradas en el convenio que España tenga firmado con ese otro país.

Esas reglas de desempate establecen, en la gran mayoría de las ocasiones, el siguiente orden a seguir:

1. La persona será residente del estado en el que tenga una vivienda permanente a su disposición, admitiéndose a tales efectos cualquier tipo de vivienda, ya sea en propiedad o alquilada. En caso de que la persona tenga dicha vivienda en ambos estados, se le considerará residente del estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (su centro de intereses vitales).

2. Si no puede determinarse en qué estado tiene el centro de sus intereses vitales o si no tiene una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los dos estados, se le considerará residente del estado en el que viva habitualmente.
3. Si vive habitualmente en ambos estados o en ninguno de los dos, será residente del estado del que sea nacional; y si es nacional de ambos estados o de ninguno de los dos, las autoridades de los dos estados resolverán el conflicto de residencia de común acuerdo.

Tras enumerar estas reglas de desempate, se citan algunas sentencias, tanto de tribunales españoles como extranjeros, sobre la interpretación que merecen estos conceptos, así como los comentarios al modelo de convenio de la OCDE que, a pesar de no ser fuente de ley, lo cierto es que desempeñan una función interpretativa muy importante, tal y como lo ha confirmado en varias ocasiones el Tribunal Supremo.

CONSEJOS PRÁCTICOS EN RELACIÓN CON LA RESIDENCIA (O NO) FISCAL EN ESPAÑA

Teniendo en cuenta todo lo explicado sobre la regulación de la residencia fiscal en España, tanto desde un punto de vista de la normativa interna (la Ley del IRPF) como desde un punto de vista internacional (los convenios para evitar la doble imposición), se exponen una serie de consejos prácticos que permiten conseguir ahorros fiscales “jugando” con esas reglas de la residencia fiscal.

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

1-. Supuesto de un hijo alemán que fija su residencia en España y sus padres tienen un gran patrimonio, residen en Alemania (o en otro país) y no tienen bienes situados en España:

- Si el hijo viene a una CCAA barata (Madrid, Andalucía, Baleares, etc.) ningún problema: al fallecer sus padres tributará en el ISD ante la Hacienda estatal, pero aplicando la normativa de esa CCAA barata.
- Si el hijo viene a una CCAA cara (Cataluña, Asturias, etc.) hay que tener cuidado, ya que conviene que los padres hagan alguna inversión en una CCAA barata (comprar algún inmueble, abrir alguna cuenta bancaria, etc.) para que al fallecer el hijo pueda pagar a la Hacienda estatal, pero aplicando la normativa de esa CCAA barata, y no la de la cara.
- Si los padres tienen bienes en España en una CCAA cara, es recomendable que inviertan por mayor valor en una CCAA barata, y así dará igual que el hijo viva en una CCAA cara o barata.

2-. En el caso de alemanes residentes o no en España con un gran patrimonio inmobiliario en territorio español, por el que sus hijos tributarían en el ISD sean residentes o no. Debe tenerse en cuenta que si esos propietarios son residentes en una CCAA barata, o tienen la mayor parte de su patrimonio en una CCAA barata, se pueden plantear donar inmuebles a sus hijos (residentes o no) con un pacto sucesorio alemán (regulado en el artículo 2.346 del Código Civil alemán), o incluso con un pacto sucesorio balear si residen o tienen sus inmuebles en Baleares, de forma que los hijos pagarían poco o nada de ISD en España (en todo caso, debe tenerse en cuenta el Impuesto sobre Sucesiones en Alemania), y sin ganancia patrimonial para el donante en IRPF o IRNR.

3-. En el supuesto de una persona alemana con un elevado patrimonio que reside en una CCAA cara (como Cataluña), que se plantea trasladarse a una CCAA barata (como Madrid, Baleares o Andalucía) antes de fallecer o de formalizar un pacto sucesorio, es importante que

pasen más de 2 años y medio, porque en el ISD español se aplicará a esa herencia (por fallecimiento o en vida) la normativa de la CCAA en la que más tiempo haya vivido en los últimos 5 años.

4-. Supuesto de hecho en el que un padre alemán residente en España quiere donar dinero a un hijo residente en el extranjero, téngase en cuenta que, si el padre tiene ese dinero en España en una CCAA con el ISD caro, es importante que no haga transferencia del dinero desde España. Si primero coloca el dinero en una cuenta del padre en el extranjero, y luego transfiere el dinero a una cuenta del hijo (también en el extranjero) entonces esa donación “normal” (sin pacto sucesorio) no tributará en España. Sin embargo, si el padre hace la transferencia del dinero directamente desde España, el hijo no residente sí tendrá que pagar el ISD en España (por ejemplo, a un tipo del 7% en Baleares).

5-. En cuanto a los valores a declarar para los inmuebles heredados en España o en Alemania, siendo el heredero residente o no residente, si se puede tributar con la normativa de una CCAA barata, en herencias entre familiares directos, conviene declarar valores reales o de mercado en el ISD español, ya que eso puede ahorrar mucho dinero en el futuro: menos ganancia patrimonial y menos plusvalía municipal al vender, además de tener un gasto de amortización mayor al alquilar.

De hecho, hay ocasiones en las que hijos residentes en España que heredan inmuebles en Alemania declaran valores reducidos “catastrales” en el ISD alemán y, como también deben declarar el ISD en España, les conviene averiguar el valor de mercado en fecha de fallecimiento (solicitando una buena tasación) para declararlo en el ISD español.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

1-. Los residentes en Alemania y el resto de extranjeros no residentes solo tributan por bienes y derechos situados en España, pero teniendo en cuenta el correspondiente convenio para evitar la doble imposición. Por ejemplo, con el Convenio entre España y Alemania, los residentes en dicho país tributan por inmuebles o por sociedades con activo > 50% inmuebles en España (españolas, o desde 2022 también extranjeras), y no por el dinero que tengan en cuentas españolas u otro tipo de valores y bienes. Con otros Convenios (por ejemplo, el de EE.UU.), como no se contempla el IP se tributa por todos los bienes y derechos situados en España (inmuebles, dinero en cuentas, valores, etc.)

2-. Los residentes en Alemania y el resto de extranjeros no residentes con un elevado patrimonio que se plantean fijar residencia fiscal en España, es recomendable que se trasladen a una CCAA barata (como Madrid o Andalucía, en las que se paga a partir de 3.700.000 euros, o las Baleares, que se paga a partir de 3.000.000 euros), y teniendo en cuenta el límite de rentas que establece el artículo 31 de la Ley del IP.

3-. Los residentes en Alemania y el resto de extranjeros no residentes con un elevado patrimonio que se plantean fijar residencia fiscal en España, merece la pena estudiar si es posible aplicar la Ley Beckham para no tener que tributar por los bienes y derechos situados en el extranjero (durante el año en el que vienen a España + otros 5 años).

4-. En la compra de bienes inmuebles situados en España de un elevado valor por no residentes personas físicas, para reducir la base imponible del IP y evitar o reducir el pago del mismo, es aconsejable financiar la adquisición con un préstamo (a ser posible bancarios, españoles o extranjeros) especialmente en CCAA caras. Deben tener en cuenta que no valen aquellos préstamos obtenidos en un momento posterior a la adquisición del inmueble en España, aunque sea con hipoteca sobre el citado inmueble.

5-. En la compra de inmuebles situados en España de un elevado valor por no residentes a través de sociedades españolas participadas por sociedades extranjeras, o directamente por sociedades extranjeras, debe tenerse en cuenta que para no pagar el IP español hay que evitar que más del 50% del activo de esa sociedad sean, de forma directa o indirecta, inmuebles en España, ya que de lo contrario el no residente tendrá que tributar en España por el valor total de la sociedad extranjera (lo que tenga en España + en el extranjero). Además, debe tenerse mucho cuidado con los préstamos de socios porque la Agencia Tributaria española tiende a recalificarlos como fondos propios.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS / IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

1-. Respecto de las personas mayores de 65 años que se plantean vender su vivienda habitual y no tributar en el IRPF por la ganancia, al poder aplicar la exención prevista para tal caso, es muy importante que la venta se produzca en un ejercicio en el que tengan la residencia fiscal en España, ya que la referida exención no está prevista para los no residentes, en el IRNR.

Por ejemplo, si esa persona transmite su vivienda habitual a principios de año (enero, febrero, marzo), es importante que permanezca el suficiente tiempo en territorio español antes de trasladarse al extranjero, con el fin de consolidar la residencia fiscal en España en el año en que transmitió la vivienda, pudiéndose acoger, por tanto, a esa importante exención en el IRPF.

2-. Respecto de las personas menores de 65 años que se plantean vender su vivienda habitual y no tributar en el IRPF por la ganancia al reinvertir el importe total obtenido por la venta, al poder aplicar la exención prevista para tal caso, deben saber que:

- Se puede vender dicha vivienda situada en España en un año en que termine como residente, aplicando exención también si en el plazo de 2 años reinviertes en nueva vivienda habitual, aunque esté situada en el extranjero.
- Se puede marchar de España y vender la que fue su vivienda habitual en un año en que ya no sea residente, aplicando la exención en IRNR si reinvierte en otra vivienda habitual antes de 2 años, pero solo si traslada su residencia a un país que forme parte de la UE o del EEE.

3-. Las personas que se plantean vender una vivienda que no tiene el carácter de habitual, situada en España, se pueden plantear trasladar realmente y de forma incuestionable su residencia fiscal a otro país en que no deba tributar. De esta manera, como no residente en España, esa persona tributaría en el IRNR por la ganancia obtenida en territorio español (a un tipo fijo del 19%) y no en el IRPF (a unos tipos que van del 19% al 30%).

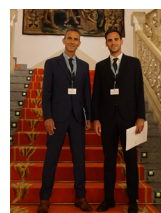
4-. Las personas que se plantean vender una vivienda que está situada en el extranjero (y, por tanto, que no tiene el carácter de habitual) tienen la posibilidad de irse de España y llevar a cabo esa venta en un ejercicio en el que no sean residentes fiscales en España, para no tener que pagar ningún impuesto en dicho país, por no tratarse de una renta de fuente española.

5-. Las personas con residencia fiscal en Alemania con una sociedad española que ha vendido un inmueble situado en España, tras haber pagado el correspondiente Impuesto sobre Sociedades por la ganancia obtenida (un 25%), y que se plantean disolver y liquidar esa sociedad para llevarse el dinero a Alemania, deben saber que tras la modificación del artículo 13 del Convenio entre España y Alemania por el Convenio Multilateral conviene esperar 365 días desde la venta del inmueble si no quieren tributar en España por la disolución y liquidación de la sociedad española.



Alejandro del Campo Zafra

Abogado y Asesor fiscal
DMS LEGAL INTELLIGENCE, S.L.P., Palma de Mallorca
adelcampo@dmslegal.org



Alejandro del Campo Jiménez

Abogado, Economista y Asesor fiscal
DMS LEGAL INTELLIGENCE, S.L.P., Palma de Mallorca
adelcampo@dmslegal.org

Aleix Valls

Inteligencia Artificial sin mitos: lo que los abogados deben saber (y hacer)

De qué hablamos cuando hablamos de “inteligencia”

Uno de los principales errores que cometemos al hablar de IA es antropomorfizarla. La tratamos como si tuviera conciencia, voluntad o valores. Pero la IA no “quiere” nada. Es una matriz matemática que, gracias a millones de parámetros y a una enorme capacidad computacional, procesa información y genera respuestas optimizadas. No aprende como los humanos, no recuerda ni posee ética propia. Lo que sí hace, y muy bien, es imitar ciertos patrones del lenguaje y del razonamiento lógico, lo cual explica por qué su uso en tareas jurídicas —desde la redacción de cláusulas hasta el análisis documental— está creciendo con rapidez.

IA en los despachos: entre el mito y la oportunidad

En el sector legal, el debate sobre IA a menudo se limita a dos extremos: o bien se la percibe como una amenaza existencial al trabajo del jurista, o bien como una solución mágica que resolverá todos los cuellos de botella. Ninguna de las dos miradas es útil. La realidad es más compleja: la IA generativa es una tecnología de propósito general —no específico—, lo que significa que puede usarse para redactar contratos, generar informes, analizar jurisprudencia... o también para propagar desinformación. Su impacto dependerá de quién la utilice, cómo, y con qué propósito.

Esto obliga a los despachos —grandes o pequeños— a tomar decisiones informadas. No se trata de adoptar IA por moda, sino de entender qué procesos pueden beneficiarse de su automatización, qué tareas seguirán requiriendo juicio humano, y cómo organizar equipos híbridos en los que personas y máquinas colaboren.

Regulación: ¿solución o freno?

El marco legal europeo en materia de IA, con su reciente Reglamento de Inteligencia Artificial, ha dado pasos relevantes. Sin embargo, su enfoque sigue anclado en modelos de machine learning clásicos, más fáciles de auditar y de acotar. La IA generativa, en cambio, escapa a estas categorías: puede redactar un correo o generar una demanda. Regularla solo por casos de uso es insuficiente y hasta contraproducente.

En este contexto, los abogados juegan un doble papel. Por un lado, como profesionales del derecho, deben ayudar a construir una regulación realista, dinámica y centrada en el uso ético de la tecnología. Por otro, como gestores de sus propios despachos, tienen que convivir con un marco normativo aún cambiante y aprender a navegarlo con criterio.

El sesgo, la ética y el malentendido

La IA no es ética ni sesgada por sí misma. Refleja los datos con los que ha sido entrenada. Si muestra sesgos de género o raciales, es porque esos sesgos estaban ya presentes en los datos —es decir, en la sociedad que los produjo—. Por eso, más que debatir sobre la “ética de la IA”, sería más útil hablar sobre el uso ético que hacemos de ella. Y aquí el mundo jurídico tiene mucho que aportar, tanto en la reflexión como en la praxis.

Recomendaciones prácticas para el sector legal

1. Formación básica. No hace falta ser ingeniero, pero sí entender los fundamentos de la IA para tomar decisiones informadas.
2. Evaluación de procesos. Identificar qué tareas son repetitivas o susceptibles de automatización.
3. Ética del uso, no del modelo. Definir protocolos internos sobre herramientas y contextos de uso.
4. Apuesta estratégica. No esperar a que la regulación lo imponga. Quien adopte antes, con criterio, tendrá ventaja competitiva.

Una transición inevitable (y gestionable)

Como en otras revoluciones tecnológicas, la IA generativa no solo transformará herramientas, sino también profesiones enteras. Algunos roles desaparecerán, otros se reinventarán, y muchos nuevos surgirán. El reto no es detener la transición, sino gestionarla con visión y responsabilidad.

Los abogados —por formación, por vocación y por rol social— están llamados a liderar este proceso. No solo para garantizar el cumplimiento legal, sino para orientar a la sociedad en un uso justo, responsable y humano de la tecnología.



Aleix Valls

Experto en innovación y tecnología, especializado en IA
CEO liquid lab, Barcelona
a.valls@liquidlab.io

Laura Salamanca, Carla Sans, Julius Letzel, Lucia Caamaño, Greta Torka, Itamar Restrepo

XXXIX Congreso de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas en Segovia, del 19 al 21 de junio de 2025

Del 19 al 21 de junio de 2025 tuvo lugar el XXXIX Congreso Anual de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas (AHAJ) en Segovia. A continuación, nos gustaría ofrecer un breve resumen del Congreso desde la perspectiva de los jóvenes juristas de la Asociación, especialmente para animar a otros jóvenes juristas a participar en los futuros congresos. Como es habitual en las publicaciones de la AHAJ, se ha optado por una presentación bilingüe del texto.

La noche del miércoles, antes del inicio oficial del Congreso, se celebró una cena en el Hotel Cándido. Además de un ambiente gastronómico agradable, la velada brindó la oportunidad de reencontrarse con socios ya conocidos y también de conocer a otros nuevos.

El primer día del Congreso empezó con la inauguración solemne en el Convento de Santa Cruz la Real, sede de la *IE University* en Segovia. Tras el discurso de apertura del presidente de la AHAJ, D. Lutz Carlos Moratinos Meissner, la embajadora alemana en España, Dña. Maria Margarete Gosse, tomó la palabra, nos dio la bienvenida y nos recordó la importancia de la cooperación entre juristas alemanes y españoles en defensa del Estado de Derecho. A continuación, el segundo teniente de alcalde de Segovia, D. Alejandro González Salamanca, y la decana de la facultad de derecho de la *IE University*, Dña. Soledad Atienza, nos dieron la bienvenida. Por último, disfrutamos de una ponencia fascinante sobre la historia de Segovia y del Convento de Santa Cruz la Real a cargo del vicerrector de la *IE University*, Dr. Miguel Larrañaga.

Tras la inauguración del Congreso, participamos en una visita guiada por Segovia que nos permitió revivir los acontecimientos históricos de los que antes nos había hablado el vicerrector. Repartidos en grupos de germanoparlantes e hispanohablantes, nos dirigimos al centro histórico de Segovia. Allí pudimos admirar el acueducto romano, el barrio judío, la catedral, así como las calles, plazas y casas del casco antiguo, con sus fachadas esgrafiadas. Después de una muy informativa, y algo calurosa, visita guiada por Segovia, volvimos en autobuses a la sede del Congreso en el Hotel Cándido.

Grupo de Trabajo I: Residencia fiscal en España

La primera jornada de ponencias comenzó con la intervención de Alejandro del Campo Jiménez y Alejandro del Campo Zafra. Padre e hijo ofrecieron una presentación exhaustiva y dinámica sobre la residencia fiscal en España, un tema de enorme relevancia, tanto para los nacionales como para los extranjeros que residen, invierten o heredan en España.

Durante la sesión, abordaron los criterios que definen la residencia fiscal, destacando que se considera residente quien permanece en España más de 183 días al año, quien tiene aquí su centro de intereses económicos, o cuando reside la unidad familiar. Subrayaron cómo la Agencia Tributaria ha intensificado los controles para detectar falsos no residentes, así como aquellos que, residiendo en una comunidad autónoma, intentan tributar en otra con fiscalidad más ventajosa.

Igualmente precisaron las relevantes diferencias fiscales que existen entre comunidades autónomas, especialmente en los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, donde algunas aplican bonificaciones muy ventajosas, mientras otras mantienen una mayor presión fiscal.

También analizaron la Ley Beckham, que permite a determinados trabajadores desplazados tributar como no residentes durante seis años, con ventajas significativas. Finalmente, repasaron las últimas novedades legislativas, resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo y criterios jurisprudenciales sobre el cómputo de días de permanencia, haciendo hincapié en cómo la Administración utiliza datos como consumos, tarjetas o vuelos para acreditar la residencia real.

Medidas cautelares en Alemania y España

Después de una pausa, durante la cual pudimos intercambiar impresiones sobre la conferencia y establecer nuevos contactos, comenzó el ciclo de ponencias titulado «De la práctica para la práctica» con el tema «Medidas cautelares en Alemania y España».

El Prof. Dr. Urs Peter Gruber, responsable de relaciones internacionales y titular de la Cátedra de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, ofreció en este marco una ponencia sumamente interesante, que destacó, entre otros aspectos, por su enfoque comparativo entre el derecho alemán y el español. Comenzó explicando la relación entre las medidas cautelares y el proceso principal en Alemania. Se subrayó como diferencia fundamental que en Alemania la medida cautelar también es posible de manera «aislada», es decir, sin necesidad de iniciar un procedimiento principal, mientras que, en el derecho español, conforme a los artículos 730 y 731 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), existe una accesoriadad respecto al proceso principal. Posteriormente, se abordaron el procedimiento y los requisitos para la adopción de una medida cautelar. En este contexto, se destacó que en el derecho alemán no hay limitación en cuanto a los medios de prueba (en particular, se permite la declaración jurada por parte de las partes o testigos, según el § 294, apartado 1 de la ZPO), mientras que en el derecho español existe una limitación conforme al artículo 728, apartado 2 de la LEC. También en cuanto al contenido de la resolución existen diferencias entre el derecho alemán y el español. En España existe una regulación unificada, mientras que en Alemania se distingue entre el dictado de un embargo preventivo, una medida cautelar general y una medida cautelar de cumplimiento. Finalmente, el ponente abordó los recursos disponibles contra las medidas cautelares.

A continuación, el Prof. Dr. Guillermo Palao Moreno, titular de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia, abordó la relevancia práctica y los retos jurídicos de las medidas cautelares en el contexto de los litigios civiles y mercantiles internacionales. Su ponencia se caracterizó por varios ejemplos prácticos, que dejaron muy claro el tema. Partiendo de un caso real, se analizó la función instrumental de estas medidas como garantía de tutela judicial efectiva, destacando su aplicación ante la dilación temporal de los procesos. La ponencia revisó exhaustivamente el marco normativo aplicable — estatal y europeo — con especial atención al Reglamento Bruselas I bis y al Reglamento (UE) 655/2014 sobre la Orden Europea de Retención de Cuentas. Asimismo, se estudió la competencia judicial tanto desde el foro principal como desde el foro especial en materia cautelar, así como las implicaciones prácticas en la solicitud, reconocimiento y ejecución transfronteriza de estas medidas. El ponente subrayó la necesidad de reforzar la cooperación entre autoridades judiciales, registrar avances

interior y sus techos pintados, sino especialmente por sus jardines y fuentes, que pudimos admirar de primera mano. Y con esta visita, concluyó el 39. Congreso Anual de la AHAAJ.

Por último, no queremos dejar de agradecer las numerosas conversaciones enriquecedoras, el ambiente abierto, cordial y colegial, así como la valiosa experiencia compartida. Esperamos con ilusión el próximo encuentro de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas, que tendrá lugar el 15 de noviembre de 2025 en Colonia, y confiamos en reencontrarnos allí con muchos miembros ya conocidos, así como con nuevos participantes.

XXXIX Kongress der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung Segovia 19. bis zum 21. Juni 2025

Vom 19. bis zum 21. Juni fand der 39. Jahreskongress der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung (DSJV) in Segovia statt. Aus der Perspektive der jungen Mitglieder möchten wir einen kurzen Überblick über den Kongress geben – insbesondere, um junge Juristinnen und Juristen zur Teilnahme an künftigen Kongressen zu motivieren. Wie üblich wurde der Tagungsbericht zweisprachig verfasst.

Am Vorabend des offiziellen Kongressbeginns fand ein Abendessen im Hotel Cándido statt. Neben einem ansprechenden kulinarischen Rahmen und der Möglichkeit, das Tagungshotel bereits kennenzulernen, bot das Abendessen Gelegenheit zum Austausch sowohl mit langjährigen als auch mit neuen Teilnehmern.

Der erste Kongresstag begann mit der feierlichen Eröffnung des Kongresses im Convento de Santa Cruz la Real, dem Sitz der IE University in Segovia. Nach der Eröffnungsrede des Präsidenten der DSJV, Lutz Carlos Moratinos Meissner, sprach die deutsche Botschafterin in Spanien, Maria Margarete Gosse, zu den Mitgliedern, begrüßte uns und hob dabei die Bedeutung der deutsch-spanischen juristischen Zusammenarbeit zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit hervor. Anschließend richteten der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Alejandro González Salamanca, und die Dekanin der juristischen Fakultät der IE University, Soledad Atienza, jeweils ein Grußwort an die Anwesenden, bevor der Vize-Rektor der Universität, Dr. Miguel Larrañaga, mit einem äußerst faszinierenden Vortrag zur Geschichte Segovias und des Convento de Santa Cruz begeisterte.

Um die im Vortrag von Miguel Larrañaga vermittelten historischen Fakten zu veranschaulichen, folgte auf die Eröffnung des Kongresses eine Stadtführung durch Segovia. In spanischsprachige und deutschsprachige Gruppen eingeteilt, wurden wir in die historische Altstadt geführt. Wir konnten das römische Aquädukt, das jüdische Viertel, die Kathedrale sowie zahlreiche historische Straßen, Plätze und Häuser mit den typischen segovianischen Fassaden im Esgrafiado-Stil bewundern. Nach dieser sehr informativen Stadtführung kehrten wir zum Kongresshotel Cándido zurück.

Arbeitsgruppe I: Steuerlicher Sitz in Spanien

Der erste Vortrag des Kongresses begann mit einem Beitrag von Alejandro del Campo Jiménez und Alejandro del Campo Zafra. In einem umfassenden und dynamischen Vortrag erläuterten Vater und Sohn die Relevanz des steuerlichen Sitzes in Spanien – ein Thema mit großer Bedeutung sowohl für Einheimische als auch für Ausländer mit Wohnsitz, Investitionen oder Erbschaften in Spanien.

Während des Vortrags veranschaulichten sie die Voraussetzungen für die Bestimmung des steuerlichen Sitzes in Spanien. Sie hoben hervor, dass als steuerlich ansässig gilt, wer sich mehr als 183 Tage im Jahr in Spanien aufhält, seinen wirtschaftlichen Mittelpunkt in Spanien hat oder deren engste Familie in Spanien wohnt. Sie wiesen darauf hin, dass die spanischen Steuerbehörden in den letzten Jahren ihre Kontrollen verstärkt haben, um sogenannte „Schein-Nichtansässige“ sowie die

falsche Angabe eines steuerlich günstigeren Wohnorts in einer anderen steuerlich günstigeren Autonomen Gemeinschaft.

Im Zuge dessen legten Sie auch die erheblichen steuerlichen Unterschiede zwischen den Autonomen Gemeinschaften, insbesondere bei Erbschaft-, Schenkung- und Vermögenssteuern dar. Einige Regionen gewähren erhebliche Steuererleichterungen, während andere eine höhere Steuerbelastung aufrechterhalten.

Ebenso widmeten sie sich der sogenannten Ley Beckham, welche nach Spanien entsandten Arbeitnehmern erlaubt, sechs Jahre lang wie Nichtansässige besteuert zu werden – mit erheblichen steuerlichen Vorteilen. Abschließend gingen sie auf die neuesten Gesetzesänderungen, Entscheidungen des Wirtschafts- und Verwaltungsgerichts sowie aktuelle Rechtsprechung zur Berechnung der Aufenthaltstage zur Bestimmung des Steuersitzes ein. Besonders betonten sie, wie die Verwaltung Daten wie Strom- und Wasserverbrauch, Kreditkartennutzung oder Flugbewegungen nutzt, um den tatsächlichen Wohnsitz zu ermitteln.

Einstweiliger Rechtsschutz in Deutschland und Spanien

Nach einer Kaffeepause, in der wir uns austauschen und neue Kontakte knüpfen konnten, begann das Vortragspanel „Aus der Praxis für die Praxis“ mit dem Thema „Einstweiliger Rechtsschutz in Deutschland und Spanien“.

Prof. Dr. Urs Peter Gruber, Auslandsbeauftragter und Inhaber des Lehrstuhls für Zivilrecht und Zivilprozessrecht an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, hielt in diesem Rahmen einen äußerst spannenden Vortrag, der unter anderem durch seine rechtsvergleichende Perspektive zwischen deutschem und spanischem Recht überzeugte. Er begann damit, die systematische Stellung des einstweiligen Rechtsschutzes zum Hauptsacheverfahren in Deutschland zu erläutern und zog einen Vergleich zum spanischen Recht. Als grundlegenden Unterschied wurde hervorgehoben, dass in Deutschland einstweiliger Rechtsschutz auch „isoliert“, d. h. ohne Einleitung eines Hauptsacheverfahrens möglich ist, während im spanischen Recht nach Art. 730, 731 LEC eine Art Akzessorietät zum Hauptsacheverfahren besteht. Anschließend ging es um das Verfahren und die Erlassvoraussetzungen einer einstweiligen Verfügung. Dabei wurde herausgestellt, dass im deutschen Recht die Beweismittel nicht beschränkt werden (insbesondere ist eine eidesstattliche Versicherung durch Parteien oder Zeugen möglich, § 294 Abs. 1 ZPO), während im spanischen Recht eine Beschränkung durch Art. 728. 2 LEC vorgesehen ist.

Auch in Bezug auf den Inhalt der Entscheidung ergeben sich Unterschiede zwischen deutschem und spanischem Recht. In Spanien besteht eine einheitliche Regelung, während in Deutschland zwischen der Anordnung eines Arrests, dem Erlass einer einstweiligen Verfügung und dem Erlass einer Leistungsverfügung unterschieden wird. Abschließend ging der Vortragende auf Rechtsbehelfe gegen einstweilige Verfügungen ein.

Anschließend befasste sich Prof. Dr. Guillermo Palao Moreno, Inhaber des Lehrstuhls für Internationales Privatrecht an der Universidad de Valencia, mit der praktischen Relevanz und den rechtlichen Herausforderungen von einstweiligen Anordnungen im Zusammenhang mit internationalen Zivil- und Handelsstreitigkeiten. Sein Vortrag bestach durch mehrere praktischen Beispiele, wodurch das Thema sehr anschaulich präsentiert wurde. Anhand eines realen Falles analysierte er die herausragende Funktion einstweiliger Anordnungen als Garantie für einen wirksamen Rechtsschutz. Der Vortrag gab einen umfassenden Überblick über den anwendbaren rechtlichen Rahmen – national und europäisch – mit besonderem Augenmerk auf die Brüssel Ia-Verordnung und die Verordnung (EU) 655/2014 zur Einführung eines Verfahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontopfändung. Die gerichtliche Zuständigkeit in der Hauptsache, sowie die Sondergerichtsbarkeit des einstweiligen Rechtsschutzes

en digitalización normativa y cuestionó si la actual regulación europea es suficiente o precisa revisión y actualización.

El jueves por la noche, aprovechando el buen tiempo veraniego, el grupo de Jóvenes Juristas se reunió en el acogedor restaurante «El Narizotas», en pleno casco antiguo de Segovia. Allí, y también durante la cena posterior con todos los asistentes del Congreso, hubo ocasión de conocer a nuevos miembros de la asociación, estrechar lazos y reencontrarse con viejos amigos, todo en un ambiente muy distendido.

Tras la cena, muchos participantes terminaron la noche tomando algo en la terraza del restaurante y un grupo considerable se animó incluso a seguir la fiesta en un bar con pista de baile.

Grupo de trabajo II: Responsabilidad de los administradores por incumplimiento de sus deberes en el marco de la gobernanza corporativa

La jornada del viernes arrancó a las 9:30 con el Grupo de Trabajo II, moderado por la Dra. Kathrin Monen, y contó con las intervenciones del abogado alemán Konstantin Tschöpe y de la magistrada del Tribunal Supremo español Amanda Cohen Benchetrit. La sesión, titulada “Responsabilidad de los administradores por incumplimiento de sus deberes en el marco de la gobernanza corporativa”, se centró en cómo los criterios ESG están influyendo en la responsabilidad legal de los órganos de administración.

Ambos ponentes comentaron la Directiva (UE) 2024/1760, que impone la diligencia debida en sostenibilidad a las grandes empresas, y la posterior “Stop-the-Clock” (UE) 2025/794, que paralizó su tramitación y dejó la regulación de la responsabilidad civil en manos de los Estados miembros.

Desde la perspectiva alemana, Tschöpe explicó que la *Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz* (LkSG) excluye la responsabilidad frente a terceros, aunque sí permite que los administradores respondan ante la propia sociedad si incumplen sus deberes (§§ 76, 91 y 93 AktG). Por su parte, Cohen destacó que, en España, los administradores también pueden ser responsables por no actuar frente a riesgos ESG, de acuerdo con el deber de diligencia del artículo 225 del TRLSC y el régimen responsabilidad previsto en los artículos 236 y siguientes.

En resumen, ambas ponencias coincidieron en que la sostenibilidad ya no es solo una cuestión ética o reputacional, sino un factor clave en la responsabilidad legal empresarial.

Grupo de trabajo III: Derecho laboral internacional

Tras una breve pausa, la mañana continuó con el grupo de trabajo III, titulado “Derecho laboral internacional”. Fue moderado por Ignacio Ordejón y contó con la participación de los ponentes Álvaro Crespo García, abogado en Barcelona y Prof. Dr. Andreas Feuerborn, Catedrático de Derecho Civil, Derecho del Trabajo y Derecho Comparado de la Universidad *Heinrich Heine* de Düsseldorf.

El tema abordado en las presentaciones fue el teletrabajo en Europa, un tema adquiriendo una relevancia jurídica cada vez mayor ante la creciente movilidad laboral transfronteriza. Cabe señalar que, el enfoque de las dos ponencias fue distinto. Mientras Crespo García se centró en los aspectos fiscales del teletrabajo en España. Feuerborn se enfocó en ofrecer una visión general de las diversas -a veces confusas- definiciones del teletrabajo en la legislación alemana para poder después profundizar en la normativa vigente en Alemania, el Derecho laboral internacional y el Derecho internacional de la Seguridad Social.

Feuerborn subrayó que es difícil determinar qué normas de seguridad de trabajo se aplican al empleado que teletrabaja en el extranjero debido a las diversas opciones para estructurar el teletrabajo en el extranjero. Por ello, es aconsejable hacer una elección de la ley aplicable en el contrato de trabajo. No obstante, deben respetarse las restricciones a la elección de la ley aplicable previstas en el art. 8, apdo. 1, frase 2, del Reglamento Roma I.

Crespo García, por su parte, explicó los retos fiscales para las empresas que pueden surgir si -bajo condiciones estrictas- el teletrabajo en el extranjero puede implicar que el lugar de desempeño laboral del teletrabajador sea calificado como establecimiento permanente de la empresa. También explicó la normativa fiscal aplicable a los empleados, en particular la Ley Beckham.

En ambas presentaciones, los casos prácticos expuestos por los dos ponentes ofrecieron una visión concreta de las posibles áreas conflictivas en esta materia.

Tras la presentación, los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un agradable almuerzo en el jardín del Hotel Cándido.

Off-Law Retos y oportunidades de la transformación digital

La última jornada del Congreso concluyó con la sesión Off-Law de Aleix Valls, dedicada a la inteligencia artificial aplicada a los servicios jurídicos, resultando una intervención inspiradora y esclarecedora.

La sesión se estructuró en dos bloques principales: primero, la contextualización de la IA y su estado actual, destacando que esta tecnología posee exclusivamente capacidad intelectual. Hoy en día, la IA está preparada para realizar todas aquellas tareas en un despacho que requieren capacidad intelectual con un coste marginal cero. A futuro, se espera la llegada de la inteligencia artificial generativa (IAG), que incorporará además capacidad creativa, aunque para hacerla accesible a nivel global, será necesario superar el desafío tecnológico de reducir su elevado coste energético.

En segundo lugar, se abordó el impacto que esta tecnología tendrá en los servicios jurídicos y la profesión de abogado. En este sentido, la IA representa el nacimiento de un nuevo sistema operativo que transformará de forma irreversible el modelo de prestación de servicios legales. Esta tecnología no sustituirá a los abogados, sino que cambiará su forma de trabajar, exigiendo un proceso de adaptación profesional.

También se destacó el desarrollo de los llamados “agentes”, sistemas que añadirán memoria a la IA y ampliarán las funciones que esta tecnología puede desempeñar en un despacho.

En definitiva, se prevé que el sector jurídico experimentará un notable aumento en el consumo de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, dado que el acceso a productos legales será más sencillo y asequible, tanto en precio como en la forma de prestación.

El viernes por la noche tuvo lugar la cena de gala, uno de los momentos más memorables del Congreso. Destacó especialmente el tradicional corte del cochinillo con platos —una costumbre típica de Segovia— así como la ambientación musical a cargo del DJ, que animó a los asistentes a salir a la pista de baile.

El último día comenzó con la asamblea de socios, antes de dar paso a la excursión al Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, una antigua residencia de verano de la monarquía española situada cerca de Segovia. El conjunto destaca no solo por su suntuosa decoración

wurde ebenso thematisiert wie die praktischen Auswirkungen bei der grenzüberschreitenden Anwendung, Anerkennung und Vollstreckung dieser Maßnahmen. Abschließend betonte Palao Moreno die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden zu verstärken, die Fortschritte bei der Digitalisierung der Verordnungen zu erfassen und stellte zur Debatte, ob die derzeitige europäische Verordnung ausreichend ist oder ob sie einer Novellierung bedarf.

Am Donnerstagabend traf sich bei sommerlichem Wetter die Gruppe der Jungen Juristen im gemütlichen Restaurant „El Narizotas“ in der Altstadt von Segovia. Dort – und später beim gemeinsamen Abendessen mit allen Kongressteilnehmern – gab es die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre neue Mitglieder der Vereinigung kennenzulernen, Kontakte zu vertiefen und alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen. Nach dem Abendessen ließen viele den Abend bei einem Getränk auf der Restaurantterrasse ausklingen und eine größere Gruppe zog danach sogar noch in eine Tanzbar weiter.

Arbeitsgruppe II: Haftung von Geschäftsführern für Pflichtverletzungen im Rahmen der Corporate Governance

Am Freitag begann die Vortragsreihe des Kongresses um 9:30 Uhr mit der Arbeitsgruppe II unter der Moderation von Dr. Kathrin Monen und mit Beiträgen des deutschen Rechtsanwalts Konstantin Tschöpe sowie der spanischen Richterin am Obersten Gerichtshof, Amanda Cohen Benchetrit. Die Sitzung mit dem Titel „Haftung von Geschäftsführern für Pflichtverletzungen im der Corporate Governance“ befasste sich mit der Frage, wie ESG-Kriterien die rechtliche Verantwortung von Verwaltungsorganen beeinflussen.

Beide Referierenden sprachen über die Richtlinie (EU) 2024/1760, die großen Unternehmen eine nachhaltigkeitsbezogene Sorgfaltspflicht entlang der gesamten Lieferkette auferlegt, sowie über die nachfolgende „Stop-the-Clock“-Richtlinie (EU) 2025/794, die das Gesetzgebungsverfahren aussetzte und die Regelung der zivilrechtlichen Haftung den Mitgliedstaaten überließ.

Aus deutscher Sicht erläuterte Tschöpe, dass das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) eine Haftung gegenüber Dritten ausschließt, Geschäftsleiter jedoch bei Pflichtverstößen gegenüber der Gesellschaft selbst haftbar gemacht werden können (§§ 76, 91 und 93 AktG). Cohen hob hervor, dass in Spanien Geschäftsleiter ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie nicht auf ESG-Risiken reagieren, gemäß der Sorgfaltspflicht in Art. 225 TRLSC sowie dem in den Artikeln 236 ff. geregelten Haftungssystem.

Zusammenfassend waren sich beide Referierenden einig, dass Nachhaltigkeit längst nicht mehr lediglich ein rein ethisches oder reputationsbezogenes Thema ist, sondern einen zentralen Faktor für die rechtliche Verantwortung von Unternehmen darstellt.

Arbeitsgruppe III: Internationales Arbeitsrecht

Der Vormittag wurde nach einer kurzen Kaffeepause mit der Arbeitsgruppe III die den Titel „Internationales Arbeitsrecht“ trug fortgeführt. Moderiert wurde diese durch Ignacio Ordejón, Referenten waren der spanische Rechtsanwalt Álvaro Crespo García und Prof. Dr. Andreas Feuerborn, Professor für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Rechtsvergleichung an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf.

Gegenstand der Vorträge war Telearbeit in Europa, ein Thema was in Anbetracht der wachsenden grenzüberschreitenden Arbeitsmobilität zunehmend an rechtlicher Relevanz gewinnt. Dabei wurden jedoch unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Während Crespo García sich vor allem auf die steuerlichen Aspekte der Telearbeit in Spanien fokussierte, fokussierte Feuerborn sich darauf, einen gelungenen Überblick über die verschiedenen – teils unübersichtlichen – Begriffsbestimmungen der Telearbeit im deutschen Recht zu geben, um anschließend auf

die Rechtslage in Deutschland, das Internationale Arbeitsrecht und Internationale Sozialversicherungsrecht fundiert eingehen zu können.

Feuerborn betonte, dass aufgrund der verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten bei einer Telearbeit mit Auslandsbezug teils schwer zu ermitteln ist, welche Arbeitsschutzvorschriften auf den Arbeitnehmer Anwendung finden. Deswegen empfiehlt es sich, im Arbeitsvertrag eine Rechtswahl zu treffen. Dennoch müssen dabei die Schranken der Rechtswahl aus Art. 8 Abs. 1 S. 2 Rom I-VO der Rechtswahl beachtet werden.

Crespo García hingegen erläuterte die steuerlichen Herausforderungen für Unternehmen, welche sich ergeben können, wenn – unter strengen Voraussetzungen – durch Telearbeit im Ausland, das Homeoffice als eine Betriebsstätte eines Unternehmens gewertet werden könnte. Ergänzend erläuterte er auch die steuerlichen Regelungen für Arbeitnehmer –insbesondere Ley Beckham.

In beiden Vorträgen boten die Fallbeispiele der beiden Referenten einen praxisnahen Eindruck der möglichen Problemfelder in diesem Themengebiet.

Nach dem Vortrag wurde den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben einen angenehmen Mittagsnacks im Garten des Tagungshotels einzunehmen.

Off-Law Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation

Der Kongress wurde mit dem Off-Law-Vortrag von Aleix Valls über den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) geschlossen, der wertvolle Einblicke zum Umgang mit KI im juristischen Arbeitsleben gewährte.

Die Sitzung gliederte sich in zwei Hauptabschnitte: Zunächst erfolgte eine thematische Einordnung des Begriffs der KI und der aktuelle Stand der Technik wurde dargestellt, wobei hervorgehoben wurde, dass die Technologie ausschließlich über intellektuelle Fähigkeiten verfügt. Heute ist KI in der Lage, sämtliche Tätigkeiten in einer Kanzlei auszuführen, die nur intellektuelle Kapazität erfordern, und das bei marginalen Kosten von null. In naher Zukunft wird die generative künstliche Intelligenz (GKI) erwartet, die zusätzlich kreative Fähigkeiten besitzt. Um diese global zugänglich zu machen, muss jedoch zunächst die technologische Herausforderung eines hohen Energieverbrauchs bewältigt werden.

Im zweiten Abschnitt wurde die Auswirkung dieser Technologie auf juristische Dienstleistungen und die Anwaltsberufe diskutiert. KI stellt hierbei die Geburt eines neuen Betriebssystems dar, das das Modell der Rechtsdienstleistung grundlegend und dauerhaft verändern wird. Diese Technologie wird Anwälte nicht ersetzen, sondern ihre Arbeitsweise verändern und eine berufliche Anpassung erfordern.

Zudem wurde die Entwicklung sogenannter „Agenten“ thematisiert, Systeme, die KI um ein Gedächtnis erweitern und somit die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie in Kanzleien erweitern.

Abschließend wird prognostiziert, dass der juristische Sektor einen deutlichen Anstieg im Verbrauch KI-bezogener Technologien erleben wird, da der Zugang zu Rechtsprodukten einfacher und erschwinglicher wird – sowohl preislich als auch in der Art der Leistungserbringung.

Am Freitagabend fand das Galadinner als einer der Höhepunkte des Kongresses statt. Neben vielen besonderen Momenten des Abends bleibt vor allem das Anschneiden des Spanferkels mit Tellern – ein kulinarischer Brauch in Segovia – sowie das gemeinsame Ausklingen des Abends unter musikalischer Begleitung eines DJs in Erinnerung.

Der Folgetag begann mit der Mitgliederversammlung, bevor es zur Exkursion nach La Granja de San Ildefonso ging. Dabei handelt es sich um eine königliche Sommerresidenz in der Nähe von Segovia. Diese zeichnet sich nicht nur durch ihre pompöse Inneneinrichtung

und Deckenbemalung aus, sondern vor allem durch ihre Gärten mit Wasserspielen, von denen wir uns selbst ein Bild machen konnten. Der 39. Jahreskongress endete mit dieser Exkursion.

Abschließend bleibt uns nur, uns für die zahlreichen angenehmen Gespräche, die offene und kollegiale Atmosphäre sowie die wertvolle Erfahrung zu bedanken. Mit Vorfreude blicken wir auf die Tagung der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung am 15. November 2025 in Köln und freuen uns bei dieser Gelegenheit auf die persönliche Begegnung mit vielen vertrauten Mitgliedern aber auch mit einigen neuen Teilnehmern.



Laura Salamanca Santos

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/ Doktorandin
Universität Osnabrück, Münster
Laura.sa.sa@web.de



Carla Sans Argilés

Estudiante de Derecho
München
carlasans33@gmail.com



Julius Letzel

Student der Rechtswissenschaften
Taylor Wessing, Hamburg
julius.letzel@googlemail.com



Lucía Caamaño Rayo

Estudiante de Derecho y ADE
Universidad Pablo de Olavide, Espartinas
luciacaamanorayo@gmail.com



Greta Torka Caballero

Studentin
Universität Heidelberg
a_torka@web.de



Itamar Restrepo Masgrau

Student
Universität Münster
itamar.94@hotmail.es

Julian W. Maurer

Rezension: Sarah Rachut, Grundrechtsverwirklichung in digitalen Kontexten Berlin: Duncker & Humblot, 774 Seiten (2025), 149,90 EUR, ISBN 978-3-428-19305-9

Es gibt juristische Dissertationen, die ihre Materie solide und mit wissenschaftlicher Akribie durchdringen. Und es gibt Werke wie das vorliegende von *Sarah Rachut*, welche darüber hinaus eine angenehme intellektuelle Unruhe erzeugen: eine wohltuende Unruhe angesichts einer sich beschleunigenden digitalen Realität, welche die bestehenden Grundrechtsdogmatiken und administrativen Selbstverständlichkeiten längst herausfordert.

Bereits der Titel *Grundrechtsverwirklichung in digitalen Kontexten* signalisiert einen Perspektivwechsel: Nicht allein der Schutz, nicht bloß die Anwendung, sondern die Verwirklichung von Grundrechten steht im Fokus. Damit rückt Rachut jene Dynamiken in den Mittelpunkt, die zwischen normativem Anspruch und realer Umsetzung entstehen. Der Begriff der „*Verwirklichung*“ dient ihr dabei nicht als leerer Platzhalter, sondern als methodischer Leitstern für eine differenzierte Analyse der Wechselwirkungen zwischen digitalem Wandel, staatlicher Schutzverantwortung und individueller Freiheitsausübung.

Die Autorin geht dabei systematisch vor und dennoch bleibt die Lektüre keineswegs trocken. In vier Kapiteln entwickelt sie eine Argumentationslinie, die bei der verfassungshistorischen Einbettung der Grundrechte sowie ihren Dimensionen, Funktionen, Wirkrichtungen und Kollisionen ansetzt, die digitale Transformation zunächst begrifflich und phänomenologisch erschließt und sodann – mit analytischer Wucht – die Herausforderungen, Potenziale und möglichen Lösungsansätze für die Grundrechtsverwirklichung in digitalen Kontexten ausleuchtet. Der abschließende Teil bündelt unter anderem die Ergebnisse in klaren Thesen.

Was dieses Werk besonders macht, ist nicht allein die intellektuelle Souveränität im Umgang mit den dogmatisch höchst anspruchsvollen Fragestellungen. Beeindruckend ist vielmehr, wie selbstverständlich Rachut Brücken baut: zwischen Theorie und Praxis, zwischen Recht und Verwaltung, zwischen nationaler Verfassungsidentität und auch den Implikationen der europäischen Rechtsordnung. Gerade dieser interdisziplinäre Impuls, der technologische, administrative und gesellschaftliche Aspekte integriert, eröffnet Anschlussmöglichkeiten über den engeren Kreis der Verfassungs- und juristischen Verwaltungslehre hinaus – etwa auch für das Verwaltungsmanagement oder politik- und organisationswissenschaftliche Fragestellungen.

So lassen sich zentrale Überlegungen der Autorin fruchtbar auch aus steuerungstheoretischer Sicht lesen. Etwa wenn Rachut aufzeigt, wie regulatorische Untätigkeit und fehlende digitale Handlungsfähigkeit staatlicher Akteure in eine Erosion normativer Steuerungsmacht münden (S. 365 ff., 406, 548). Hier lässt sich an die Diskussion um evidenzbasierte und lernfähige Verwaltung anknüpfen: Eine digitale Verwaltung, die Grundrechtsverwirklichung ernst nimmt, müsste, folgt man Rachut, proaktiv, mithin entsprechend auch adaptiv und transparent handeln (S. 621). Ihre Vorschläge, unter anderem zu Reallaboren, „Recht by Design“ und in Hinblick auf digitale Schutzpflichten im Zuge einer

innovativen Risikosteuerung (vgl. S. 551 ff., 558 ff., 598 ff., 709) sind dabei nicht bloß technokratische Detailideen, sondern Ausdruck eines neuen Verständnisses staatlicher Verantwortung im digitalen Zeitalter.

Auch im rechtsvergleichenden Kontext stößt Rachuts Analyse auf Anschlussfähigkeit. Die in Deutschland geführte Debatte um die mittelbare Drittwirkung von Grundrechten gegenüber digitalen Plattformen oder das Verhältnis von informationeller Selbstbestimmung und Gesundheitsversorgung bei der elektronischen Patientenakte ähnelt in ihrer Struktur vielen Konfliktlinien, die auch in Spanien virulent sind. Rachuts Forderung nach einem effektiven und durchsetzungsstarken Staat im digitalen Raum wirkt daher umso anschlussfähiger für eine rechtsvergleichende Debatte, die über das bloße Nachzeichnen sich sehr ähnlicher aber dennoch unterschiedlicher Grundrechtskataloge hinausgeht.

Die Darstellungen in Rachuts Werk bleiben dabei vor allem nicht abstrakt. Besonders die Fallanalysen – von elektronischen Fernprüfungen über die ePA bis zur Corona-Warn-App (detaillierte Lösungsansätze werden ab S. 578 diskutiert) – illustrieren anschaulich, wie sich digitale Sachverhalte rechtlich strukturieren lassen, wo klassische Schutzmechanismen an ihre Grenzen stoßen und welche juristischen wie administrativen Antworten möglich oder gar notwendig wären. Die Fähigkeit der Autorin, komplexe Regelungszusammenhänge verständlich zu entwirren, ohne sie zu simplifizieren, gehört zu den großen Stärken des Werks.

Dass Rachut dabei nicht in eine Technologie-Euphorie verfällt, sondern immer wieder auf das Spannungsverhältnis zwischen Effizienz, Kontrolle und Legitimität verweist, verleiht ihrer Arbeit eine besondere argumentative Tiefe. Sie bleibt kritisch, auch gegenüber zunächst einfach erscheinender Vorschläge, etwa einer isolierten Kodifizierung neuer digitaler Grundrechte.

Wenn das Werk dennoch kein Pessimismus durchzieht, sondern ein analytischer Gestaltungswille, liegt das wohl auch an der biografischen Verankerung der Autorin in der Verwaltungsdigitalisierungsforschung und auch -praxis, wirkte sie doch bereits an unzähligen Beratungs- und Umsetzungsprojekten teil und erarbeitete unter anderem gemeinsam mit ihrem Doktorvater, Dirk Heckmann, die Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung, welche vielen weiteren Bundesländern als Blaupause für eigenständige Verordnungen diente. Diese Verankerung in Theorie und Praxis spürt man: Ihre Vorschläge sind realitätsfest, rechtlich präzise und dabei erstaunlich anschlussfähig für eine Umsetzung, zumindest in einem politischen Klima, das digitale Resilienz nicht länger als Randthema behandelt.

Insgesamt liegt mit dieser Arbeit weit mehr als ein Grundlagenwerk zur digitalen Grundrechtsdogmatik vor. Es ist ein Plädoyer für einen handlungsfähigen Staat im digitalen Zeitalter, der seine

verfassungsrechtlichen Verpflichtungen ernst nimmt, auch jenseits klassischer Steuerungspfadabhängigkeiten. Rachut gelingt damit das seltene Kunststück, gleichermaßen für die wissenschaftliche Diskussion, die legislative Praxis und den Verwaltungsdiskurs Impulse zu setzen.

Wer sich mit Grundrechten im digitalen Zeitalter beschäftigt, sei es aus rechtsdogmatischer, verwaltungswissenschaftlicher oder praxisbezogener Perspektive, wird an diesem Werk künftig kaum vorbeikommen. Dem Werk sei jedenfalls eine möglichst große Verbreitung in Forschung und Praxis zu wünschen. Eine Übersetzung in das Englische und ggf. sogar Spanische könnte dazu beitragen, die darin entwickelten Konzepte auch in anderen Rechtsordnungen fruchtbar zu machen.



Julian W. Maurer

Lektor/ Lehrbeauftragter
Hochschule Burgenland Weiterbildung, AT - Eisenstadt
julian.maurer@hochschule-burgenland.at

Alejandra Riera Humanes

Reseña: Francisco Antonio Vaquer Ferrer: La fiscalidad de los no residentes por la titularidad de participaciones en entidades con sustrato inmobiliario a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, Tirant lo Blanch, Valencia, 2023, 175 páginas.

La presente recensión tiene por objeto presentar la obra *La fiscalidad de los no residentes por la titularidad de participaciones en entidades con sustrato inmobiliario a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio*, del autor Francisco Antonio Vaquer Ferrer, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de las Illes Balears. En esta monografía el autor analiza exhaustivamente la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio español (IP) de las personas físicas no residentes que poseen participaciones en entidades cuyo activo principal está constituido por bienes inmuebles situados en territorio español, haciendo hincapié en la tributación de la titularidad indirecta de participaciones, prestando especial atención a los casos en los que se interpone más de una entidad y, al menos una de estas, es extranjera.

Tal y como señala en el Prólogo la Doctora Aurora Ribes Ribes, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante, considero que la obra aborda un tema de gran actualidad e incuestionable relevancia práctica para los contribuyentes no residentes, así como para el propio Fisco español. En efecto, es necesario clarificar el tratamiento fiscal de esta clase de estructuras societarias para lograr una mayor seguridad jurídica en el ámbito de la fiscalidad internacional. En este sentido, la obra se caracteriza por contener un profundo análisis doctrinal y jurisprudencial que permite al lector comprender con claridad las controversias interpretativas surgidas en torno a esta materia y las distintas soluciones propuestas.

Es preciso contextualizar en espacio y tiempo la obra. Al respecto, huelga decir que de cada vez es más frecuente, y está al orden del día, la adquisición de propiedades en España por parte de no residentes, sobre todo en zonas turísticas, como es el caso de las *Illes Balears*; hecho que hemos podido constatar en los últimos años el autor y yo, residentes ambos de las Balears. Y la propiedad de estos bienes inmuebles, en muchos casos, cae en manos de entidades, detrás de las cuales se encuentran personas físicas no residentes que ostentan, en la mayoría de las ocasiones, la titularidad de la totalidad de las participaciones de dicha entidad. Esta circunstancia dificulta someter a gravamen a los no residentes en el marco del IP.

Pues bien, la dificultad de este gravamen se ha sustentado en la interpretación que, a través de la jurisprudencia y las últimas consultas de la DGT, se le ha dado al artículo 5.Uno.b de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio (LIP). En particular, cabe citar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) 621/2020, de 3 de diciembre; este órgano considera, en líneas generales, que este artículo no permite gravar la titularidad indirecta de participaciones en entidades con sustrato inmobiliario situado en territorio español. Dicho así, en mi opinión, coincidente con la del autor, pueden generarse situaciones de discriminación en la tributación del IP entre sujetos pasivos residentes y no residentes, poniendo en riesgo uno de los principios jurídicos más importantes en nuestro país, el principio de igualdad. Incluso esta solución podría considerarse contraria a los objetivos sobre los que se creó en su día el tributo español y a los del propio ordenamiento jurídico español.

Como es sabido, mientras que el sujeto pasivo no residente tributa en el Estado español por obligación real, es decir, únicamente por los bienes situados o los derechos ejercitables en el territorio español, el sujeto pasivo residente tributa por obligación personal, esto es, en este caso, por el patrimonio mundialmente poseído. De este modo, si, debido a la práctica artificiosa de interposición de estas entidades, no se logra demostrar que, efectivamente, el no residente es titular de algún bien situado o derecho que pudiera ejercitarse o hubiera de cumplirse en territorio español, no se podrá gravar el patrimonio neto de dicho no residente, ya que será, a la luz del TSJIB, inexistente (directamente), algo que puede resultar incoherente, habida cuenta que siempre habrá una persona física, en este supuesto, no residente, que será “el titular real” del inmueble; expresión utilizada por el autor en la obra, señalando a la persona física que se “esconde” detrás de entidades patrimoniales, con la finalidad de no tributar en el Estado español por el patrimonio que ostenta en dicho territorio, aunque sea indirectamente en el caso de inmuebles.

De todas formas, tal y como explica el autor al principio de la obra, hay que señalar que esta problemática no nace en aquellos supuestos en los que la persona física no residente posee participaciones en entidades españolas con sustrato inmobiliario, puesto que se podrá gravar el patrimonio neto del no residente por obligación real en tanto en cuanto es titular de un patrimonio situado o que puede ejercitarse o ha de cumplirse en territorio español.

Por el contrario, el escenario que más preocupa es, como ya se puede deducir de lo que se ha comentado hasta el momento, cuando se ostentan únicamente participaciones en entidades extranjeras o cuando al menos la primera (en la que ostenta participaciones el no residente) es extranjera, con independencia de que la última (titular de los inmuebles y en la que participa la extranjera) sea española. En un plano teórico, se interpretará que el “titular real” que hay detrás de las entidades patrimoniales no ostenta directamente ningún bien situado o derecho que deba ejercitarse o cumplirse en territorio español.

Teniendo en cuenta que los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) juegan un papel principal en la tributación por obligación real de los no residentes, el autor realiza un exhaustivo análisis de los CDI suscritos por España con los demás países en los que existe una cláusula específica sobre participaciones en entidades con sustrato inmobiliario. De este análisis se extrae cómo la mayoría de los CDI otorgan la potestad de gravamen al Estado en el que se encuentre el sustrato inmobiliario para que este pueda gravar acciones, participaciones u derechos análogos que, de manera directa e indirecta, ostente el no residente. Por lo que, si a la luz de los CDI con cláusula específica se debiera interpretar el primer párrafo del artículo 5.Uno.b de la LIP, no habría duda ninguna de que la titularidad indirecta de dichas acciones o participaciones (o de otros derechos análogos) se encontraría implícita en la redacción de dicho artículo.

La interpretación y aplicación de la LIP, y, en concreto, de su artículo 5.Uno.b, generaron la problemática que se examinan en la obra objeto de recensión. El profesor Vaquer Ferrer se enfrenta a ello en aras de aportar una perspectiva interpretativa acorde a criterios de interpretación distintos al gramatical (sistemático, histórico, sociológico y teológico), igualmente válidos y admitidos por el ordenamiento jurídico-tributario, tal y como lo anuncia el artículo 3 del Código civil español (CC), al que se remite el artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), relativo a la interpretación de las normas tributarias. Afirma el autor, oponiéndose a la interpretación literal por la que han abogado las instituciones, que una correcta y completa (conforme a los criterios hermenéuticos mencionados antes) interpretación de la disposición conflictiva de la LIP permite incluir la titularidad indirecta de participaciones en territorio español.

De esta manera, se podrían ver solucionados gran parte de los conflictos que ha generado la falta de precisión del legislador en la redacción del artículo 5.Uno.b de la LIP.

En cierto modo, sería absurdo pensar que en el momento de creación de la norma tributaria no se llevaba a cabo la práctica de interposición de varias entidades entre las propiedades inmobiliarias y las personas físicas no residentes para eludir el gravamen, lo que lleva a pensar que el legislador podría haber querido contemplar implícitamente estas situaciones e incluirlas en la regulación.

Además, si se observan los CDI suscritos antes de la entrada en vigor de la LIP, estos ya contaban con cláusulas específicas, incluso los que se celebraron después de la aprobación de esta Ley. Cabe pensar que el legislador tuvo en cuenta esta clase de situaciones a la hora de la confección de la norma, de lo contrario, tal y como señala el autor, “habrían sido más de treinta años suscribiendo sinsentido cláusulas distributivas de la potestad de gravamen”. Este hecho contribuye a la idea de que el legislador sí tenía ánimo de incluir la titularidad indirecta de participaciones en el tan discutido primer párrafo del artículo 5.Uno.b de la LIP.

En cualquier caso, defiende el autor, si bien es cierto que el artículo 5.Uno.b, primer párrafo, de la LIP no recoge expresamente la titularidad indirecta, también lo es que tampoco se refiere expresamente a la titularidad directa.

Desde luego se debe asumir que este modo de interpretar la LIP no englobaría la totalidad de las situaciones de titularidad indirecta que se pueden dar en la práctica, sobre todo en los casos en los que únicamente se interponen entidades extranjeras. Al respecto, de una manera acertada, a mi modo de ver las cosas, el autor apela a la aplicación del artículo 15 de la LGT, que recoge el denominado conflicto en la aplicación de la norma tributaria (figura antes conocida como “fraude de ley tributaria”), apto para aquellos supuestos en los que sea imposible el gravamen de un hecho imponible que realmente se habría producido de no haberse usado una estructura alambicada.

Hay que añadir que la obra se desarrolla esencialmente en un marco legislativo anterior a la modificación de la LIP, operada a través de la Ley 38/2022, de 27 de diciembre. A través de esta Ley se añade un segundo párrafo al artículo 5.Uno.b de la LIP con la finalidad de recoger, expresamente, la titularidad indirecta de participaciones en entidades con sustrato inmobiliario; aunque, de acuerdo con el autor, he de decir que se trata de una redacción, en algunos puntos incongruente y contraria a la propia norma tributaria. Por ejemplo, el nuevo párrafo no excluye las entidades que explotan una actividad

económica; y, aunque se puede recurrir a la exención de participaciones alojada en el artículo 4.Ocho.Dos de la LIP, no siempre se excluirán absolutamente todas las participaciones, ya que la exención solo afecta a las participaciones que corresponden al patrimonio afecto a dicha actividad. Es decir, “la consecuencia de excluir *ab initio* la titularidad de (todas) las participaciones cuando los inmuebles están afectos a una actividad económica no es la misma que si se someten a gravamen y luego se aplica la exención”. Además, el nuevo párrafo, a la hora de realizar el cómputo del activo conformado por bienes inmuebles, prescinde de los valores contables, como hace el artículo 4.Ocho.Dos de la LIP, remitiéndose a los valores que recoge el artículo 10 de la LIP, lo cual rompe la sistematicidad de la LIP; ello sin perjuicio de que, finalmente, las participaciones serán valoradas de conformidad con el artículo 16 de la LIP. De esta diferencia parece desprenderse que el legislador tiene como objetivo, enmascarado bajo el gravamen de las participaciones que recaen sobre los bienes inmuebles, el gravamen de bienes inmuebles. Así lo señala el autor, perspectiva que comparto.

En la última parte de la obra, a mi parecer muy destacable, el autor se atreve con la aportación de alternativas al nuevo párrafo del artículo 5.Uno.b de la LIP a modo de soluciones “prácticas”.

En primer lugar, se propone una nueva redacción de dicho artículo. Con una redacción extensa, pero sin duda alguna eficiente en sus objetivos, el autor, entre otras cosas, apuesta por acotar la sujeción a gravamen a la parte proporcional de las participaciones que correspondan al activo conformado realmente por bienes inmuebles radicados en España, tomando en consideración únicamente los bienes inmuebles que no estén sometidos a una actividad económica; así se lograría la coherencia con el artículo 4.Ocho.Dos de la LIP. Además, apuesta por los valores contables como método para calcular el activo de la entidad si estos reflejaran la verdadera situación patrimonial de la sociedad. También recoge expresamente la posibilidad de que la última entidad, es decir, la titular directa de los bienes inmuebles, sea extranjera. Incluso prevé una medida para evitar que el gravamen se sortee mediante el fraccionamiento de participaciones. En mi opinión, no se le escapa ningún detalle.

En segundo lugar, como otra de sus brillantes soluciones, se refiere a la creación de un régimen de atribución de patrimonios, con una esencia similar al régimen de atribución de rentas regulado en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y que permitiría “transparentar estrictamente la entidad titular directa de [los] bienes inmuebles y atribuir el patrimonio a la/s persona/s física/s que fuesen partícipes de aquella, directa o indirectamente a través de otras entidades interpuestas”.

En último término, el autor sugiere introducir a las personas jurídicas como sujetos pasivos del IP, lo que eliminaría de manera instantánea la problemática, ya que, de esta manera, las entidades españolas estarían sujetas a gravamen por todos sus elementos patrimoniales, independientemente de donde se encontrasen, y las entidades extranjeras responderían únicamente por los elementos que guardasen conexión con el territorio español, como son los bienes inmuebles que ostentasen en él. De esta forma, como bien indica el autor en la obra, “ya no cabría plantearse si la normativa del IP alcanza los supuestos de titularidad indirecta ni analizar la aplicación del conflicto en la aplicación de la norma tributaria”. En todo caso, sería necesario que, de forma paralela, se regulase la exención absoluta de las acciones, las participaciones o los derechos análogos, con el fin de evitar supuestos de doble imposición económica.

En definitiva, la obra de Francisco Antonio Vaquer Ferrer contiene un análisis profundo y detallado de la controversia que ha venido suscitando la interpretación y aplicación del artículo 5.Uno.b de la LIP, desentramándose las contradicciones y deficiencias en la técnica legislativa, y que han generado situaciones de discriminación entre residentes y no residentes al impedirse gravar la titularidad indirecta de participaciones en entidades con sustrato inmobiliario. Se trata, pues, de una gran contribución al debate sobre la fiscalidad internacional y equidad tributaria, que ayuda a comprender la importancia de adaptar el marco normativo a la realidad de la sociedad actual, así como la de garantizar la aplicación del principio de capacidad económica de manera efectiva a todos los contribuyentes, con independencia de su residencia fiscal.

**Alejandra Riera Humanes**

Estudiante de Derecho
Universidad de las Illes Balears;
actualmente: alumna colaboradora del área de Derecho
Financiero y Tributario
alejandra.riera1@estudiant.uib.cat

Notizen aus der Vereinigung Noticias de la Asociación

Queridos amigos,

Fue realmente maravilloso poder compartir fantásticos momentos juntos durante el **Congreso Anual** de la Asociación que tuvo lugar en **Segovia del 19 al 21 de junio**.

La organización, a cargo de nuestro querido socio **Michael Fries** fue fantástica. Muchas gracias Michael.

El programa académico fue, una vez más, de muchísimo nivel, con ponentes realmente fantásticos.

El ya tradicional encuentro de **Jóvenes Juristas** del jueves por la tarde volvió a ser un éxito.

Durante la Asamblea General se trataron diversos asuntos de interés y, a propuesta de nuestro querido amigo **Ignacio Romero**, se acordó que el congreso principal de 2027 tendrá lugar en **Córdoba**. Obviamente, Córdoba no necesita presentación. Tanto el destino, como el organizador son inmejorables. ¡Será un gran congreso!

Asimismo, durante la asamblea se presentó el **programa de Mentoring y Reverse Mentoring** de la AHAI que, a propuesta de nuestra querida Susanne Dumke, se va a poner en marcha durante las próximas semanas. El programa pretende potenciar los intercambios intergeneracionales dentro de la Asociación, creando sinergias entre jóvenes juristas y juristas con experiencia que tengan voluntad de compartir inquietudes.

Os recuerdo que el **Congreso Anual de 2026** tendrá lugar en junio del año que viene en Karlsruhe, bajo la coordinación de nuestro querido socio **Miguel Ribas**.

Actualmente estamos trabajando intensamente en la organización de un webinar relativo a las novedades legislativas en España sobre arrendamientos turísticos y de temporada. El webinar tendrá lugar el 25 de septiembre de 11:00 a 12:30 y podéis apuntaros a través de este [enlace](#).

Asimismo, la próxima **Jornada anual** de la asociación que tendrá lugar el **15 de noviembre de 2025 en Colonia**. La Jornada tratará sobre **normativa de aspectos laborales y fiscales en relación a altos directivos en España y Alemania**, para lo cual contaremos con ponencias impartidas por ponentes de máximo nivel. Podéis apuntaros a partir de septiembre a través de nuestra Web.

Esperando veros muy pronto en Colonia, recibid un cordial saludo,

Un abrazo

Víctor Fabregat

Liebe Freunde,

auf dem **Jahreskongress der Vereinigung vom 19. – 21. Juni in Segovia** haben wir gemeinsam zahlreiche bereichernde und unvergessliche Momente erlebt.

Den Kongress hat unser geschätztes Mitglieds **Michael Fries** organisiert. Herzlichen Dank, lieber Michael, für dein Engagement!

Das wissenschaftliche Programm war wieder einmal von sehr hohem Niveau, mit zahlreichen hervorragenden Referenten.

Auch in diesem Jahr fand das traditionelle Treffen der **Jungen Juristen** am frühen Donnerstagabend großen Anklang.

Auf der Mitgliederversammlung wurden verschiedene interessante Themen besprochen. Auf Vorschlag unseres langjährigen Freundes Ignacio Romero wurde Córdoba als Veranstaltungsort für den Jahreskongress 2027 gewählt. Córdoba muss natürlich nicht vorgestellt werden. Sowohl Veranstaltungsort als auch Organisator sind unschlagbar. Wir freuen uns auf einen tollen Kongress!

Auf der Versammlung wurde das **DSJV-Mentoring- und Reverse-Mentoring-Programm** vorgestellt, das auf Vorschlag unserer lieben Susanne Dumke in den nächsten Wochen starten wird. Es zielt darauf ab, den Austausch zwischen den Generationen innerhalb der Vereinigung zu fördern und Synergien zwischen Jungen und erfahrenen Juristen, die bereit sind, ihre Anliegen zu teilen, zu schaffen.

Zur Erinnerung: der **Jahreskongress 2026** findet im Juni in Karlsruhe statt und wird von unserem geschätzten Mitglied **Miguel Ribas** organisiert.

Momentan stecken wir mitten in den Vorbereitungen für ein Webinar zur aktuellen Gesetzeslage in Spanien im Bereich der touristischen und saisonalen Vermietung. Es findet am 25. September von 11:00 - 12:30 Uhr statt und ihr könnt euch über diesen [Link](#) anmelden.

Die nächste **Jahrestagung** findet am **15. November 2025 in Köln** statt. Die Veranstaltung behandelt **arbeits- und steuerrechtliche Vorschriften für Führungskräfte in Spanien und Deutschland** und wir dürfen uns auf Vorträge erstklassiger Referenten freuen. Ab September könnt ihr euch über unsere Webseite anmelden.

Ich freue mich, euch bald in Köln willkommen zu heißen!

Seid herzlich begrüßt

Víctor Fabregat



Víctor Fabregat

Vicepresidente AHAI
Abogado
Fabregat Perulles Sales Abogado
Barcelona
v.fabregat@fabregat-perulles-sales.com

Veranstaltungen / Eventos

25.09.2025 - Frühstücks-WEBINAR

Anmeldung / Inscripción

25/09
2025
11.00
12.30

WEBINAR

Novedades legales sobre arrendamientos de temporada y de vivienda de uso turístico.

Últimas novedades regulatorias sobre limitación y/o prohibición de la actividad de viviendas de uso turístico.

Ponente

**Alejandro
Fuentes-Lojo
Rius**

Abogado

FUENTES LOJO
ABOGADOS,
Barcelona

Se analizarán las últimas novedades regulatorias sobre limitación y/o prohibición de la actividad de viviendas de uso turístico y de arrendamientos de corta duración o temporada en España, las nuevas obligaciones y responsabilidades legales de los anfitriones y de las plataformas en línea de alquiler, así como la problemática de ejercicio de esta actividad en edificios plurifamiliares y las herramientas jurídicas que tienen las comunidades de propietarios para vetar estas actividades, y el nuevo régimen sancionador aplicable.

Inscripción a
través de este
LINK



Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V.
Asociación Hispano-Alemana de Juristas

San Elías 29 - 35 5º B. 08006 Barcelona
T +34 93 209 78 82 info@dsjv-ahaj.org
www.dsjv-ahaj.com

Veranstaltungen / Eventos

25.09.2025 - Frühstücks-WEBINAR
Anmeldung / Inscripción

25/09
2025
11.00
12.30

Frühstücks - WEBINAR

Rechtliche Neuerungen der Saisonvermietungen und der Nutzung von Wohnraum als Ferienunterkunft.



Jüngste Entwicklungen in der
Gesetzgebung über die Einschränkung
und/oder das Verbot der Nutzung von
Wohnraum für touristische Zwecke.

Referent

**Alejandro
Fuentes-Lojo
Rius**

Rechtsanwalt
FUENTES LOJO
ABOGADOS,
Barcelona

Die neuesten regulatorischen Entwicklungen zur Einschränkung und/oder zum Verbot der Tätigkeit von Ferienwohnungen sowie von Kurzzeit- oder Saisonvermietungen in Spanien werden analysiert. Dabei werden auch die neuen gesetzlichen Pflichten und Verantwortlichkeiten der Gastgeber und der Online-Vermietungsplattformen behandelt, ebenso wie die Herausforderung bei der Ausübung dieser Tätigkeit in Mehrparteienhäusern und die rechtlichen Mittel, die Eigentümergemeinschaften zur Verfügung stehen, um solche Nutzungen zu untersagen. Abschließend wird das neue Sanktionsregime vorgestellt.

**Anmeldung
über [LINK](#)**



Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V.
Asociación Hispano-Alemana de Juristas

San Elías 29 - 35 5º B 08006 Barcelona
T +34 93 209 78 82 info@dsjv-ahaj.org
www.dsjv-ahaj.com

Veranstaltungen / Eventos

15.11.2025

Jahrestagung Köln / Jornada anual Colonia

Programm / Programa

Anmeldung ab September/ Inscripción a partir de septiembre



**Deutsch-Spanische
Juristenvereinigung e.V.
Asociación Hispano-Alemana
de Juristas**

Mercado de trabajo

Praktikantenstellen | Pasantías

Andersen Tax & Legal Iberia, S.L.P.

Andersen bietet Rechtsreferendaren und Praktikanten die Möglichkeit, eine Wahlstation oder ein Praktikum an den Kanzleistandorten in Valencia, Barcelona oder Madrid zu absolvieren. Die Tätigkeit umfasst die Mitarbeit im German Desk der Kanzlei, wobei deutschsprachige Mandanten in den Bereichen Steuerrecht, Immobilienrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht betreut werden. Gute Kenntnisse der spanischen und englischen Sprache sind erforderlich. Bei Interesse senden Sie bitte Ihr Anschreiben, Ihren Lebenslauf sowie Ihre Verfügbarkeiten an:

✉ germandesk@es.andersen.com.

Dr. Artz, López & Col., Kanzlei für Erbrecht, Familienrecht und Immobilien

Haben Sie Lust mit einem engagierten Team und in einem gutem Arbeitsklima in den Schwerpunkten (internationalen) Erbrecht, Familienrecht und Immobilienrecht die Theorie in die Tat umzusetzen und wichtige praxisbezogene Erfahrungen zu sammeln? In unserer Kanzlei suchen wir stets motivierte Praktikanten und Referendare. Zwar sind Spanisch- u./o. Englischkenntnisse von Vorteil, nicht jedoch eine zwingende Voraussetzung. Falls wir ihr Interesse wecken konnten, schicken Sie bitte ihre Bewerbung an

✉ mail@artzlopez.com

🌐 www.artzlopez.com

🌐 www.fb.com/artzlopez

¿Le apetece trabajar con un equipo comprometido dentro de un buen ambiente de trabajo en los ámbitos del derecho de sucesiones (internacional), el derecho de familia y el derecho inmobiliario, poniendo en práctica la teoría y aumentando el conocimiento con importantes experiencias? Buscamos pasantes y becarios motivados para nuestro bufete. Conocimientos en el alemán son imprescindibles. Si hemos podido despertar su interés, envíe su solicitud

✉ mail@artzlopez.com

🌐 www.artzlopez.com

🌐 www.fb.com/artzlopez

AD & M Abogados y Consultores

Unsere international ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei mit dem Schwerpunkt auf deutsch-spanischen Rechtsbeziehungen befindet sich im Zentrum von Barcelona. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind Gesellschafts-, Handels-, Erb-, Familien- und allgemeines Zivilrecht. Wir bieten deutschen Rechtsreferendaren oder Jurastudenten mit Spanischkenntnissen die Möglichkeit, Ihre Wahlstation oder ein Praktikum in unserer Kanzlei zu absolvieren. Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen postalisch an ADM Abogados y Consultores, Calle Balmes 163, Pral., 2a, 08008 Barcelona, Spanien z.H. von RA Robert Engels oder per e-mail an

✉ info@admabogados.net

Augusta Abogados

Wir bieten deutschen Rechtsreferendaren und -studierenden die Möglichkeit, ein mehrmonatiges Praktikum in unserer Kanzlei in Barcelona zu absolvieren, sei es als Wahl- oder Auslandsstation. Wir suchen Jurastudenten (mindestens 4 Semester) und Rechtsreferendare, die offen, zuverlässig und an der internationalen Praxis interessiert sind. Die Dauer des Praktikums beträgt i.d.R. drei bis sechs Monate und wir versuchen, uns den beruflichen bzw. akademischen Interessen der Kandidaten anzupassen. Gute Spanisch- und Englischkenntnisse, mündlich und schriftlich, sind erwünscht.

Bitte senden Sie uns ein Anschreiben mit Lebenslauf, Zeugnisse und Verfügbarkeit per E-Mail an:

Augusta Abogados, z.H.v. Frau Alba Ródenas-Borràs, Ref: Praktikum Barcelona, Via Augusta, 252, 4ª planta, E-08017 Barcelona

✉ info@augustaabogados.com

🌐 www.augustaabogados.com

Jesús Becerra. Derecho penal

Unsere Kanzlei in Barcelona bietet ein Praktikum für Referendare und/oder Jurastudenten an, die an der Ausübung des Strafrechts in Spanien interessiert sind. In unserem Büro werden Sie lernen, in einem Team von Strafrechtlern zu arbeiten und echte Erfahrungen in der spanischen Rechtswelt zu sammeln. Gute Kenntnisse der spanischen Sprache in Wort und Schrift sind unerlässlich.

Ansprechpartnerin: Maria Colomer

✉ hilfeundsupport@jesusbecerra.com

☎ +49 6966779987

☎ +34 683534682

Castellana Legal Abogados

Wahlstation für Rechtsreferendare/Praktikanten

Unsere Kanzlei bietet Referendaren/Praktikanten die Möglichkeit, in Madrid die Wahlstation bzw. ein Praktikum zu absolvieren. Kenntnisse der spanischen Sprache sind erforderlich. Bei Interesse Bewerbungen bitte per e-mail z. Hd. von Marcos Andreu Bleckmann an

✉ mableckmann@c-legal.com

unter Kennwort "Praktikum" zusenden.

Mercado de trabajo

Praktikantenstellen | Pasantías

Dikeos Estudio Jurídico

Wir sind eine international ausgerichtete Madrider Rechtsanwaltskanzlei mit Tätigkeitsschwerpunkten im Arbeits-, Gesellschafts-, Handels- und Zivilrecht, die sowohl forensisch als auch beratend tätig ist.

Unsere Klienten sind hauptsächlich Wirtschaftsunternehmen, auch aus dem deutschsprachigen Ausland. Wir bieten Rechtsreferendaren / -innen die Möglichkeit, Ihre Wahlstation in unserem Madrider Büro abzuleisten. Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse sowie Interesse für internationale, insb. deutsch-spanische Rechtsbeziehungen setzen wir voraus. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Paseo de la Habana, 5; 28036 Madrid.

Ansprechpartner: Christian Alexander Paschkes

☎ 915903370

✉ apaschkes@dikeos.com

Fabregat, Perulles, Sales, Abogados, Rechtsanwälte

Wir bieten deutschen Referendaren mit guten Spanischkenntnissen die Möglichkeit, ihre Wahlpflichtausbildung oder sonstige Ausbildungsstationen in unseren Kanzleien in Barcelona und Pollença (Mallorca) zu absolvieren. Plaza Emili Mira i López 2, E- 08022 Barcelona

☎ +34 93 205 42 31

✉ fps@fabregat-perulles-sales.com

🌐 www.fabregat-perulles-sales.com

Dr. Frühbeck Abogados

Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen mit guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges Praktikum in unseren Kanzleien in Barcelona, Palma de Mallorca, Marbella und Las Palmas G.C. zu absolvieren. Es wird ein Zeitraum von mindestens 3 Monaten bevorzugt. Wir bearbeiten hauptsächlich Fälle im Bereich des Handels-, Unternehmens- und Arbeitsrechts. Ofrecemos a pasantes con buenos conocimientos de alemán y español la posibilidad de realizar prácticas en nuestras oficinas de Barcelona, Palma de Mallorca, Marbella y Las Palmas G.C. Preferente un periodo no inferior a tres meses. Principalmente trabajamos los campos del derecho mercantil, societario y laboral.

☎ T: +34 93 254 10 70; barcelona@fruhbeck.com

☎ +34 971 719 228; mallorca@fruhbeck.com

☎ + 34 952 765225; marbella@fruhbeck.com

☎ +34 928 432 676; canarias@fruhbeck.com

Gerboth & Partner

Wir bieten Referendaren oder Studenten mit guten Spanischkenntnissen die Möglichkeit ihre Wahl- oder sonstige Ausbildungsstation während eines Zeitraumes, der drei Monate nicht überschreiten sollte, in unseren Büros in Palma de Mallorca oder Ibiza zu absolvieren. Desweiteren bieten wir spanischen Praktikanten mit guten Deutschkenntnissen die Möglichkeit zur Durchführung eines Rechtspraktikums in unseren Büros, ebenfalls für einen Zeitraum, der drei Monate nicht überschreiten sollte. Ansprechpartner: Christian Gerboth, Palma de Mallorca

☎ +34 971 722 494

✉ info@gerboth-partner.com

Göhmann

Als deutsch-spanische Kanzlei mit umfangreichen Tätigkeitsbereichen in beiden Rechtskreisen bieten wir interessierten deutschen Referendaren und spanischen Praktikanten die Möglichkeit, in einem unserer Büros in Bremen oder Barcelona eine oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren. Sehr gute Sprachkenntnisse sind Voraussetzung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: Bewerbungen in Deutschland: Dr. Arne Koch, Wachtstr. 17-24, D-28195 Bremen

☎ +49 421 339 53-0

✉ bremen@goehmann.de

Für Informationen können Sie unsere Internetseite besuchen:

🌐 www.goehmann.de

Gómez Acebo & Pombo

Referendaren mit Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit ihre Wahlstation während eines Zeitraumes von drei Monaten in unserer Kanzlei in Madrid zu absolvieren.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte an: Frau Christina Sánchez Weickgenannt

☎ +34 91 582 9218

✉ csanchezw@ga-p.com

Anwaltskanzlei Dr. Sabine Hellwege

bietet Rechtsreferendaren / Rechtsreferendarinnen mit Spanischkenntnissen die Möglichkeit die Wahlfachstation oder sonstige Ausbildungsstationen während eines Zeitraumes, der drei Monate nicht überschreiten sollte, in der Kanzlei in Palma de Mallorca zu absolvieren. Ansprechpartnerin: Dr. Sabine Hellwege, Rechtsanwältin und Abogada, Niedersachsenstr. 11, D-49074 Osnabrück

☎ 49 541 20 22 555, + 49 171 838 53 28,

✉ Shellwege@t-online.de

🌐 www.hellwege.de

Mercado de trabajo

Praktikantenstellen | Pasantías

Jurisch Consultants Abogados-Rechtsanwälte

Jurisch Consultants Abogados-Rechtsanwälte Deutsch-spanische Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Manacor/Mallorca und zivilrechtlicher Ausrichtung sucht Jurastudenten und Rechtsreferendare mit guten Spanischkenntnissen, denen wir im Rahmen eines Praktikums/ Ausbildungsstation eine interessante Tätigkeit anbieten. Ansprechpartner: Rechtsanwalt-Abogado Mirko Jurisch, C/Amargura, 14, 1º-1ª, E-07500 Manacor

☎ +34 971 845 805

✉ info@jurisch.legal

🌐 www.jurisch.legal

Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Praktikum (m/w/d) Spanish & LatAm Desk – Steuerberatung

Aufgaben:

- Bearbeitung breit gefächelter steuerlicher Aufgabenstellungen im Team mit Kolleg:innen verschiedener Fachbereiche sowie mandatsverantwortlichen Partner:innen bzw. Senior Manager:innen, insb. solcher unseres Spanish & LatAm Desk (<https://kleeberg-esdesk.de/>)
- Unterstützung bei der steuerlichen Beratung von international operierenden Mandanten in einem Team aus Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen
- Mitwirkung bei vielseitigen Mandaten und Projekten sowie bei Fachpublikationen mit Spanien- bzw. Lateinamerika bezug

Profil:

- Laufendes oder abgeschlossenes Studium in den Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften in Spanien und/oder Deutschland
- Kenntnisse im spanischen und/oder deutschen Steuerrecht, vorzugsweise auch im internationalen Kontext
- Interesse an der Mitarbeit in unserem multidisziplinären Spanish & LatAm Desk für 3-6 Monate
- Muttersprachliche oder in der Beratungspraxis anwendbare Kenntnisse in unseren Arbeitssprachen Deutsch, Spanisch und Englisch in Wort und Schrift
- Motivation und Engagement sowie Freude an der Mitwirkung bei der Analyse von grenzüberschreitenden Sachverhalten und steuerlichen Fragestellungen sowie der Arbeit mit Sprachen und Zahlen im Team

Unser Angebot:

- Einblick in die internationale Beratungspraxis einer deutschen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
- Angenehmes Betriebsklima in einem engagierten multikulturellen Team
- Umfassende Möglichkeiten zur beruflichen und fremdsprachlichen Aus- und Fortbildung
- Abwechslungsreiche Aufgaben innerhalb eines multidisziplinären Arbeitsumfelds
- Begleitung durch eine:n Pat:in, der in fachlichen sowie organisatorischen Fragen zur Seite steht

- Verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in unserem Team nach dem Praktikum

- Sehr zentraler Standort in München (zwischen Königsplatz und Hauptbahnhof)

Kleeberg ist eine deutschlandweit und international tätige Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in München. Wir betreuen mit mehr als 200 Kolleg:innen ein breites Spektrum großer und mittelständischer Unternehmen und Institutionen sowie anspruchsvollen Privatpersonen in den Bereichen Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und betriebswirtschaftlicher Beratung sowie -zusammen mit der Kleeberg Rechtsanwalts-gesellschaft mbH - Rechtsberatung.

Bei grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen betreuen wir unsere Mandanten, sowohl inbound als auch outbound, in Zusammenarbeit mit bewährten internationalen Partnern anderer Länder sowie dem weltweiten Netzwerk Crowe Global.

Im Geschäftsverkehr mit spanischsprachigen Ländern koordiniert das Spanish & LatAm Desk unserer Kanzlei die integrierte rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung sowie die Wirtschaftsprüfung in den Bereichen Tax, Audit, Advisory und Legal.

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Ansatz einer persönlichen Betreuung unserer Mandanten auf höchstem fachlichem Niveau. Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert auf die Schaffung von Kompetenzen und die Vermittlung von Know-how sowie die persönliche Förderung unserer Mitarbeiter:innen.

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Deine Nachricht unter

✉ bewerbung@crowe-kleeberg.de.

Für Fragen steht Dir unsere HR-Managerin, Raphaela Weingart gerne zur Verfügung.

☎ +49 89 559 83 268

Löber Steinmetz & Garcia Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

In unserer Kanzlei in Frankfurt bieten wir Referendaren und Praktikanten mit guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, eine oder mehrere Stationen bzw. ein mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren. Tätigkeitsschwerpunkte sind IPR, Erbschafts- und Immobilienrecht. Wir legen Wert auf selbständiges Arbeiten und hohe Motivation und können Ihnen im Gegenzug eine abwechslungs- und lehrreiche Tätigkeit anbieten. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit unserer spanischen Kooperationskanzlei in Palma de Mallorca, Löber Steinmetz Garcia, Rechtsanwälte Y Abogados, S.L.P., besteht nach individueller Absprache auch die Möglichkeit, die Wahl- oder Anwaltstation oder einen Teil derselben in Palma zu absolvieren. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: Kanzlei Löber Steinmetz & Garcia, z.Hd. Herrn Dr. Alexander Steinmetz, Kaulbachstr. 1, D-60594 Frankfurt

☎ +49 69 962 211 13

✉ a.steinmetz@loeber-steinmetz.de

Praktikantenstellen | Pasantías

Lohmann & Dr. Ahlers Rechtsanwälte in P., Notare a.D., Fachanwalt Verkehrsrecht, Mediatorin

Wir bieten deutschen und spanischen Referendaren oder Praktikanten die Möglichkeit, im Rahmen einer Stage erweiterte Kenntnisse des deutschen Rechts und der deutschen Sprache zu erwerben. Der Zeitraum sollte dabei drei Monate nicht unterschreiten. Tägliche Anwesenheit ist erwünscht und sinnvoll.

Ofrecen la posibilidad de realizar prácticas o pasantías a alemanes y españoles que deseen ampliar sus conocimientos en Derecho Alemán y la lengua alemana. El período de éstas no deberá ser superior a los tres meses. Se recomienda la asistencia diaria a fin de obtener buenos resultados.

Kontakt / Contacto: RA Wolfgang Lohmann, Pelzerstrasse 4, D - 28195 Bremen,

☎ +49 421 18571

✉ RA-Lohmann-Ahlers@gmx.de

Monereo Meyer Abogados

Referendaren oder Studenten mit guten Spanischkenntnissen bieten wir die Möglichkeit ihre Wahlpflichtfachausbildung oder sonstige Ausbildungsstationen während eines Zeitraumes, der 3 Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in Madrid, Barcelona oder Palma de Mallorca zu absolvieren.

Ansprechpartner: RA Mónica Regaño

✉ (rrhh@mmmm.es)

Spanischen Praktikanten mit guten Deutschkenntnissen bieten wir ebenfalls die Möglichkeit der Absolvierung eines Rechtspraktikums für einen Zeitraum, der 3 Monate nicht unterschreiten sollte, in unseren Büros in Madrid, Barcelona oder Palma de Mallorca.

Ansprechpartner: César García de Quevedo

✉ (rrhh@mmmm.es)

Pense Rechtsanwälte

Wir bieten spanischen und deutschen Juristen mit guten Kenntnissen beider Sprachen die Möglichkeit, ein Praktikum oder einen Teil des Referendariats in unserer Kanzlei zu absolvieren.

Das Wirtschaftsrecht, Zivil- und Immobilienrecht sowie Prozess- und Schiedssachen gehören zu den Kerngebieten unserer Tätigkeit. Wir sind auch für unsere internationale Rechtspraxis bekannt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten

🌐 www.pense.de

Bewerbungen richten Sie bitte an: Pense Rechtsanwälte, Herrn RA Dr. Till Pense, Wolfgangstrasse 85, D - 60322 Frankfurt am Main

☎ 49 69 55 05 65

✉ till.pense@pense.de

Ribas Brutschy Abogados

Wir sind eine international ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei mit Schwerpunkt auf den deutsch- spanischen Rechtsverkehr. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind Erb- und Immobilienrecht, Gesellschafts- und Handelsrecht, allgemeines Zivil- sowie Strafrecht.

Wir bieten Referendaren/innen und Praktikanten/innen mit guten Deutsch- und Spanischkenntnissen die Möglichkeit, ihre Wahlstation bzw. ein mehrmonatiges Praktikum am Hauptsitz unserer Kanzlei in Karlsruhe zu absolvieren. Hohe Motivation und Interesse für internationale, insbesondere deutsch-spanische Rechtsbeziehungen setzen wir voraus.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres Wunschzeitraums vorzugsweise per e-mail an:

Ribas Brutschy Abogados, z.H. von Frau Petra Beller, Marianne-Kirchgessner-Str. 5, 76646 Bruchsal / Karlsruhe

☎ + 49 7251 9377310

✉ p.beller@rb-abogados.eu

Wienberg Abogados

Rechtsanwaltskanzlei in Barcelona mit Schwerpunkt im dt.- sp. Rechtsverkehr bietet Ausbildungsmöglichkeit für Referendare und Praktikanten mit Spanischkenntnissen. Bewerbungen per Telefon:

☎ +34 93 241 97 20

✉ Simone.Jordan@wienberg.es

🌐 www.wienberg.es

Kanzlei Willner

Du hast Lust darauf Deine Wahlstation oder ein längeres Praktikum auf Mallorca zu absolvieren und die Arbeit im deutsch-spanischen Rechtsverkehr kennen zu lernen?

Dann bist Du bei uns richtig.

Wir bieten interessierten und motivierten Rechtsreferendaren die Möglichkeit, eine Ausbildungsstage oder ein mehrmonatiges Praktikum zu absolvieren.

Wir betreuen fast ausschließlich Privatmandanten im Bereich des Erb- sowie Immobilienrechts. In unserer Anwaltsboutique wirst Du von Anfang an mit eingebunden, kannst an Mandantengesprächen und Notarterminen teilnehmen und hast dennoch Freiräume für die Examensvorbereitung. Gute spanische Sprachkenntnisse sind allerdings unabdingbar

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, welche Du bitte an

✉ team@willner.legal

richtest. Kanzlei Willner, Plaza Porta Pintada 3, Entlo B, 07002 Palma de Mallorca

☎ +34 871 180 197

☎ +49 30 629 37 600

🌐 www.willner.legal

Mercado de trabajo

Praktikantenstellen | Pasantías

ZinnBöcker Rechtsanwälte

Wir bieten Rechtsreferendaren mit guten Kenntnissen der spanischen Sprachsowie spanischen Hochschul- absolventen die Möglichkeit, ihre Referendarstation bzw. ein Praktikum in unserer Kanzlei zu absolvieren. Wir sind ausschliesslich auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts tätig. Ein grosser Teil unserer Mandate hat Bezug zu Spanien bzw. Lateinamerika (insbesondere Mexiko). Es erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in erstklassiger Umgebung.

Mehr unter

🌐 www.zinnboecker.com.

Bewerbungen senden Sie bitte an: ZinnBöcker Rechtsanwälte, z.Hd. Dr. Christian Böcker (Rechtsanwalt und Abogado), Friedrichsplatz 10, 68165 Mannheim oder per e-mail an

✉ office@zinnboecker.com

Notare Dr. Christoph Neuhaus und Dr. Markus Buschbaum, LL.M., Maître en droit

Wir bieten deutschen Referendaren/innen und spanischen Notaranwärtern/Notaranwärterinnen mit guten Kenntnissen der jeweils fremden Sprache sowie der jeweils anderen Rechtsordnung die Möglichkeit, die Wahlstation oder eine Hospitation in unserem Büro in Köln zu absolvieren. Kenntnisse der englischen und der französischen Sprache sind von Vorteil, werden jedoch nicht vorausgesetzt. Nähere Informationen zu unseren Tätigkeitsfeldern finden Sie unter

🌐 www.neuhaus-buschbaum.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per e-mail an:

✉ notar@buschbaum-koeln.de.

Willkommen / Bienvenidos

Wir wollen folgende Mitglieder willkommen heißen
Queremos dar la bienvenida a los siguientes socios

Toledo Oms, Albert

Abogado

Ceca Magán Abogados, S.L.P.

Diagonal 601, 5ª Planta

E - 08028 Barcelona

☎ T + 34 93 487 60 50

✉ atoledo@cecamagan.com

🌐 www.cecamagan.com/

Restrepo Masgrau, Itamar

Student

Universität Münster

Bismarckallee 47D

D - 48151 Münster

☎ T +49 176 693 029 46 +34 627 468 996

☎ T +34 627 468 996

🌐 itamar.94@hotmail.es

Impressum / Pie de imprenta

INF INFORMACIONES

Zeitschrift für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr
Revista jurídica hispano-alemana

Zitierweise / Manera de citar: INF

Herausgeber / Editor:

Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V.
Asociación Hispano-Alemana de Juristas Geschäftsstelle

Oficina central:

San Elías, 29 - 35, 5º B, 08006 Barcelona,
T +34 93 209 78 82
info@dsjv-ahaj.org
www.dsjv-ahaj.com

Vorstand / Junta Directiva:

Präsident - Presidente

Lutz Carlos Moratinos Meissner (Hamburg)

Vizepräsident - Vicepresidente

Víctor Fabregat Rubiol (Barcelona)

Vizepräsident - Vicepresidente

Dr. Markus Artz, LL.M. (Koblenz)

Generalsekretär – Secretario General

Ignacio Ordejón Zuckemaier (Düsseldorf)

Kassenwartin – Tesorera

Dr. Kathrin Monen, LL.M. (Düsseldorf)

Beisitzer – Vocal

Alex Llevat Feliu (Barcelona)

Beisitzer – Vocal

Fernando Lozano (Valencia)



Schriftleitung und verantwortlich im Vorstand / Redacción y responsable en la Junta Directiva:

Dr. Markus Artz, LL.M.

Koblenzer Str. 80, 56073 Koblenz
T +49 2619 423173
artz@artzlopez.com
m.artz@dsjv-ahaj.org

Wissenschaftlicher Beirat:

Prof. Dr. Juan Hernández Martí (Valencia)
Prof. Dr. Stefan Leible (Bayreuth)

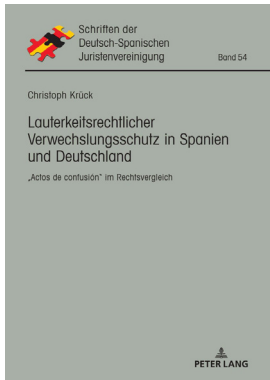
Layout und Satz / Diseño y maquetación:

Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e.V. /
Asociación Hispano-Alemana de Juristas Geschäftsstelle/
Oficina central:
San Elías, 29 - 35, E – 08006 Barcelona,
T +34 93 209 7882
info@dsjv-ahaj.org;
www.dsjv-ahaj.org

Redaktionsschlüsse / Cierres de redacción:

1. März / 1 de marzo
1. Juli / 1 de julio
1. November / 1 de noviembre

SCHRIFTEN DER DEUTSCH-SPANISCHEN JURISTENVEREINIGUNG



Band 54

Band 54

Christoph Krück

Lauterkeitsrechtlicher Verwehlungschutz in Spanien und Deutschland

„Actos de confusión“ im Rechtsvergleich

geb. | 978-3-631-82624-9 | 2021. 218 S. | €^D 54.95

eBook | 978-3-631-86122-6 | 2021. 218 S. | €^D 54.95

Band 53

Tim Wirth

Der Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft durch das spanische Strafrecht

geb. | 978-3-631-80647-0 | 2020. 246 S. | €^D 54.95

eBook | 978-3-631-82507-5 | 2020. 246 S. | €^D 54.95

Band 52

Teresa Puig Stoltenberg

Die Parteiautonomie im europäischen Erbrecht

geb. | 978-3-631-78424-2 | 2019. 398 S. | €^D 71.95

eBook | 978-3-631-79687-0 | 2019. 398 S. | €^D 79.95

Band 51

Matthias Schassek

Verträge über individuelle Software nach deutschem und spanischem Recht

geb. | 978-3-631-72690-7 | 2017. 234 S. | €^D 54.95

eBook | 978-3-631-72730-0 | 2017. 234 S. | €^D 60.95

Band 50

Ingrid Schleper

Wegfall der Geschäftsgrundlage im deutschen und spanischen Recht

geb. | 978-3-631-71701-1 | 2017. XXI, 285 S. | €^D 64.95

eBook | 978-3-631-70621-3 | 2017. XXI, 285 S. | €^D 71.95

Herausgegeben von der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung

ISSN: 1433-884X

Die Buchreihe *Schriften der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung* enthält Monographien zur Rechtswissenschaft, insbesondere zu verschiedenen Aspekten der deutschen und spanischen Rechtsprechung. Sie beschäftigt sich interdisziplinär aber auch mit Bereichen der Betriebswirtschaft und Politikwissenschaft. Die Reihe wird von der *Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung* herausgegeben, die zur Vertiefung der Kenntnisse der jeweilig anderen Rechtsordnungen sowie zur Förderung der juristischen Beziehungen der beiden Länder beitragen will.

Band 49

Sven Hendrik Haumesser

Geschäftsleiterpflichten und -haftung in der Insolvenz im deutschen und spanischen Recht

geb. | 978-3-631-70109-6 | 2016. 356 S. | €^D 71.95

eBook | 978-3-631-70104-1 | 2016. 356 S. | €^D 79.95

Band 48

Karl Felix Oppermann

Die Unteranknüpfung nach der EuErbVO im Mehrrechtsstaat Spanien

geb. | 978-3-631-67632-5 | 2016. XXXVIII, 152 S. | €^D 44.95

eBook | 978-3-631-06996 | 2016. XXXVIII, 152 S. | €^D 49.98

Band 47

Jessika Henke

Die vorgerichtliche Beweisermittlung im gewerblichen Rechtsschutz vor dem Hintergrund der europäischen Rechtsangleichung

Eine vergleichende Betrachtung des deutschen und spanischen Rechts nach Umsetzung der «Enforcement»-Richtlinie

geb. | 978-3-631-67615-8 | 2016. XXIV, 176 S. | €^D 54.95

Band 46

Britta Nietfeld

Mediation als Verfahren der konsensualen Konfliktbeilegung bei Trennung und Scheidung

Eine rechtsvergleichende Betrachtung des deutschen, spanischen und katalanischen Rechts

geb. | 978-3-631-66809-2 | 2015. XX, 284 S. | €^D 64.95

eBook | 978-3-631-05972-4 | 2015. XX, 284 S. | €^D 72.23



PETER LANG
INTERNATIONALER VERLAG DER WISSENSCHAFTEN

Band 45

Benedikt Leffers

**Die Einführung eines Präsenzbonus in
Deutschland unter Berücksichtigung der *prima de
asistencia* in Spanien**

geb. | 978-3-631-65965-6 | 2015. XX, 270 S., 11 Tab | €^D 64.95

eBook | 978-3-653-05409-5 | 2015. XX, 270 S., 11 Tab | €^D 72.23

Band 44

Christian Schönwandt

**Wirkungsschwächen der Schenkung
in Spanien und Deutschland**

geb. | 978-3-631-66293 | 2015. 364 S. | €^D 71.95

eBook | 978-3-653-05527-6 | 2015. 364 S. | €^D 79.97

Band 43

Hannah Rau

**Strafrechtliche Vergangenheitsbewältigung
am Beispiel Spanien**

geb. | 978-3-631-64974-9 | 2014. LXII, 414 S. | €^D 89.95

eBook | 978-3-653-04117-0 | 2014. LXII, 414 S. | €^D 100.08

Band 42

Stefanie Espitalier

**Die innerstaatliche Haftung
für Unionsrechtsverstöße in Spanien**

Eine Untersuchung der Verantwortungs- und
Haftungsbeziehungen zwischen dem spanischen
Zentralstaat und den Autonomen Gemeinschaften
im Falle finanzwirksamer Entscheidungen
der Europäischen Union

geb. | 978-3-631-63192-8 | 2012. 239 S. | €^D 53.95

eBook | 978-3-653-01703-8 | 2012. 239 S. | €^D 59.98

Band 41

Bettina Janka

**Corporate Governance in Deutschland
und Spanien**

geb. | 978-3-631-61843-1 | 2011. 297 S. | €^D 60.95

Band 40

Kristina Orthmann

**Kapitalmarktinformationshaftung
der Vorstände von Aktiengesellschaften
in Deutschland und Spanien**

geb. | 978-3-631-60099-3 | 2010. 304 S. | €^D 59.95

Band 39

Franziska Hohlers

**Der Vertragsschluss im e-Commerce
nach deutschem und spanischem Recht**

Unter besonderer Berücksichtigung
der europarechtlichen Vorgaben
zu den Informationspflichten

geb. | 978-3-631-61092-3 | 2010. 205 S. | €^D 56.95

Band 38

Florian Michallik

**Instrumentarien zur Steuerung
von Einzelhandel in Deutschland und Spanien**

Ein Beitrag zu nachhaltiger Raum- und
Stadtentwicklung

geb. | 978-3-631-61079-4 | 2010. 409 S. | €^D 86.95

Band 37

Katharina Grüter

**Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung bei
der spanischen Sociedad de Responsabilidad
Limitada und der deutschen Gesellschaft mit
beschränkter Haftung**

geb. | 978-3-631-61338-2 | 2010. 216 S. | €^D 56.95

eBook | 978-3-653-00391-8 | 2010. 216 S. | €^D 63.30

Band 36

Ingo Robert Müller

Spanisches Anwaltschaftsrecht

geb. | 978-3-631-60965-1 | 2010. XXX, 406 S. | €^D 92.95

eBook | 978-3-653-00425-0 | 2010. XXX, 406 S. | €^D 103.41

Band 35

Hendrik R. Bott

**Absicherung der Mängelrechte im spanischen
Bauvertragsrecht unter rechtsvergleichenden
Aspekten**

Eine Untersuchung der Rechtsverhältnisse zwischen
Besteller und Unternehmer

geb. | 978-3-631-60483-0 | 2010. 181 S. | €^D 53.95

eBook | 978-3-653-00303-1 | 2010. 181 S. | €^D 59.98

Unsere Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich zuzüglich
Versandspesen. Preisänderungen bleiben vorbehalten. An Bibliotheken liefern wir mit
5% Rabatt. €^D inkl. MWSt. – gültig für Deutschland und Kunden in der EU ohne USt-IdNr.

INF

Zeitschrift für den deutsch-spanischen Rechtsverkehr
Revista jurídica hispano-alemana



INFORMACIONES